

41ª REUNION — 32ª SESION ORDINARIA — 21 DE SEPTIEMBRE DE 1949

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y del señor Roberto Dri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretarios: señores Alberto S. Sosa y Gustavo Trombetta

DIPUTADOS PRESENTES:

ALBRIEU, Oscar E.
ALVAREZ PEREYRA, Manuel
ALLUB, Rosendo
ARAOZ, Ricardo E.
ARGAÑA, José M.
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
AYALA LOPEZ TORRES, Francisco
BAGNASCO, Vicente
BALBIN, Ricardo
BENÍTEZ, Antonio J.
BERETTA, Eduardo
BERNARDEZ, Manuel
BIDEGAIN, Oscar E.
BONAZZOLA, Romeo E.
BONINO, Alberto C.
BRUGNEROTTO, Juan N. D.
BUSTOS FIERRO, Raúl
BUTTERFIELD, Humberto
CÁMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANDIOTI, Alberto M.
CANÉ, José
CARRERAS, Ernesto A.
CASAS NOBLEGA, Armando
CATTÁNEO, Atilio E.
COLOM, Eduardo
CONTE GRAND, José Amadeo
COOKE, John William
CÓRDOVA, J. Salvador
CÚFRE, Orlando H.
CURSACK, Roberto Enrique
DÁVILA, J. Aníbal
DECKER, Rodolfo A.
DEGREEF, Juan Ramón
DE LA TORRE, Juan
DEL CARRIL, Emilio Donato
DEL MAZO, Gabriel
DELLEPIANE, Luis
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ, Carlos A.
DÍAZ, Manuel M.
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DRI, Roberto
ERRO, Saturnino S.
ESTRADA, Ángel C.
FERNANDEZ, Hernán S.
FERRANDO, Manuel P.
FERRER, Modesto
F'LLIPPO, Virgilio M.
FORTEZA, Eduardo Julio
FREGOSSI, Luis J.

FRONDIZI, Arturo
GARAGUSO, Bernardino Hipólito
GARAY, Marcelino S.
GARCIA, Manuel
GIL FLOOD, Mario
GONZALEZ FUNES, Tomás
GUARDO, Ricardo C.
HARAMBOURE, Horacio
IBARGUREN, Prudencio M.
ILLIA, Arturo U.
LAGRANA, Héctor D.
LAREO, Ricardo
LASCAR, Guillermo F.
LAVIA, Ludovico
LELOIR, Alejandro H.
LEMA, Manuel E.
LETAMENDI, Balbino (h.)
LICEAGA, Félix J.
LOPEZ SERROT, Oscar
LUCINI, Raúl Felipe
MAC KAY, Luis E.
MAINERI, D. Jacinto
MALDONADO LARA, José María
MANTARAS, Manuel J.
MARIATEGUI, Ángel S.
MARINI, Ángel C.
MAROTTA, José
MARTÍNEZ GUERRERO, Guillermo
MARTÍNEZ I UQUE, Enrique
MERCADER, Emir E.
MESSINA, Humberto
MIEL ASQUÍA, Ángel J.
MONJARDIN, Federico F.
MONTES, Abel
MONTES, Juan Manuel
MONTES DE OCA, Carlos
MONTIEL, Alcides E.
NORIEGA, Juan J.
NOVELLINO, Francisco
OSINALDE, Rafael
OTTONELLO, Benito J.
PALACIO, Ernesto
PASQUALL, Juan Domingo
PASQUINI, José P. D.
PASTOR, Reynaldo A.
PEREA, Pedro J.
PEREYRA, Luis Alberto
PÉREZ MARTIN, José
PIRANI, Antonio S.
PONCE, Ángel L.
PONTIERI, Silverio
RABANAL, Francisco
REPETTO, Agustín
REYNES, Leandro R.

RICAGNO, Roberto
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Manuel
RODRÍGUEZ, Nerio M.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Raúl
ROJAS, Absalón
ROJAS, Nerio
ROSSI, José
ROUGGIER, Valerio S.
RUDI, Ricardo
RUMBO, Eduardo I.
SÁNCHEZ, Pedro
SAN MILLAN, Ricardo Antonio
SANTANDER, Silvano
SAPORITI, Luis
SARAVIA, Teodoro S.
SARMIENTO, Manuel
SEEBER, Carlos Manuel
SILVESTRE, Adolfo J. B.
SOBRAL, Antonio
SOLÁ, Fernando
TEJADA, Ramón Washington
TILLI, Pedro
TOMMASI, Victorio M.
TORO, Ricardo
TREBINO, Natalio
URANGA, Raúl L.
URTIAGA BILBAO, Mateo de
VALDEZ, Celestino
VANASCO, Julio A.
VAREA, Isidoro
VELLOSO COLOMBRES, Manuel F.
VERGARA, Amanda
VILLACORTA, Luis René
VILLAFANE, José María
VISCA, José Emilio
VISCHI, Albino
VITOLO, Alfredo R.
YADAROLA, Mauricio L.
ZAMUDIO, Juan Carlos
ZANONI, Pedro P.
ZAVALA ORTIZ, Miguel Ángel

AUSENTES, CON LICENCIA:

CLEVE, Ernesto
FAJRE, José Benito
MACHARGO, Alfredo F.
STINCO, Luis A.

AUSENTES, CON AVISO:

PIEROTTI, Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

BRUNO, Domingo
MORENO, José Luis

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría.

2.—Izamiento de la bandera nacional.

3.—Versiones taquigráficas.

4.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley por el que se declara que para los transportes a cargo del Estado no rige la disposición del artículo 188 del Código de Comercio, sobre responsabilidad por el retardo en la ejecución del transporte.
- II.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- III.—Comunicaciones oficiales.
- IV.—Comunicaciones de comisión.
- V.—Despachos de comisión.
- VI.—Peticiones particulares.
- VII.—Proyecto de ley del señor diputado Rabanal: subsidios para obras y para sostenimiento, al Club Social y Deportivo Charrúa, de la Capital Federal.
- VIII.—Proyecto de ley de los señores diputados Velloso Colombres y Martínez Luque: creación de una oficina de Correos y Telecomunicaciones en Villa Belgrano, Argüello, provincia de Córdoba.
- IX.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi: construcción de edificio e instalaciones para la Escuela Industrial Simón de Iriondo, de Resistencia, territorio de Chaco.
- X.—Proyecto de ley del señor diputado Rabanal: subsidios, para obras y sostenimiento, al Club Deportivo, Social y Cultural Domingo Faustino Sarmiento, de la Capital Federal.
- XI.—Proyecto de ley del señor diputado Roche: modificación de la ley 13.000, de reglamentación de la profesión de despachantes de aduana, en lo referente a la fijación del arancel mínimo a que deberá ajustarse el cobro de las comisiones.
- XII.—Proyecto de ley de los señores diputados Cattáneo e Illia: creación y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Nacionales, con jurisdicción en la Capital Federal y en los territorios nacionales.
- XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Velloso Colombres: creación del Museo Histórico del General don José de San Martín en el convento San Carlos, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

- XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Velloso Colombres: construcción de edificio para el funcionamiento de la sucursal de Correos y Telecomunicaciones de Las Rosas, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe.
- XV.—Proyecto de ley del señor diputado Seeber: creación del Registro Nacional de Estadística y Censo Permanente de Incapacitados por Accidentes del Trabajo, y del Instituto Nacional de Readaptación y Rehabilitación de los Incapacitados por Accidentes del Trabajo.
- XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Mac Kay: pensión al señor Martín Marcó.
- XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Bonazzola: reedición de la obra *La educación popular* de Domingo Faustino Sarmiento, para su distribución entre los profesores y maestros de los institutos de segunda enseñanza, de escuelas de enseñanza primaria y bibliotecas públicas.
- XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Pereyra: creación del Consejo Tifológico Nacional, para promover la rehabilitación económica, intelectual y social de los privados de vista.
- XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Roche: subsidio a la Comisión de Fomento de Chabás, Santa Fe, para la erección de una estatua del general San Martín en esa localidad.
- XX.—Proyecto de ley del señor diputado Zanoni y otros, sobre prohibición del uso de distintivos políticos a los empleados o funcionarios del Estado durante las horas de servicio, y de la colocación de insignias, símbolos y pendones partidarios en los edificios y oficinas públicos.
- XXI.—Proyecto de ley del señor diputado Rojas (A.): subsidio para obras, al Centro Federal de Tiro y Gimnasia de Santiago del Estero.
- XXII.—Proyecto de ley del señor diputado López Serrot y otros: exención de recargos en el pago de impuestos a contribuyentes morosos.
- XXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Montes de Oca: pensión a la señora María Inés Arredondo de Rentería Beltrán e hijos.
- XXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Saravia: construcción y habilitación de un templo en Villa Cuyaya, provincia de Jujuy.
- XXV.—Proyecto de ley del señor diputado Álvarez Pereyra: subsidio para obras

a la Sociedad Argentina de la Cruz Roja, de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.

XXVI.—Proyecto de declaración del señor diputado **Pereyra**: construcción de edificio para la sucursal de Correos y Telecomunicaciones de **Devoto**, provincia de Córdoba.

XXVII.—Proyecto de declaración del señor diputado **Pereyra**: construcción de edificio para la sucursal de Correos y Telecomunicaciones de **Las Junteras**, provincia de Córdoba.

XXVIII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Cattáneo**: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre adquisición, en el extranjero, de tanques para el Ejército Argentino.

XXIX.—Proyecto de resolución de los señores diputados **Del Mazo** y **Rudi**: establecimiento y protección de granjas forestales en la zona Sur y Suroeste de la provincia de Buenos Aires y Sudeste del territorio de La Pampa.

XXX.—Proyecto de declaración del señor diputado **Fregossi**: obras de pavimentación y de carácter complementario en la ruta internacional número 11 Juan de Garay, en los tramos San Justo, Resistencia, Formosa y Clorinda, y caminos tributarios.

XXXI.—Proyecto de declaración del señor diputado **Lema** y otros: expresión del deseo de que se substituya el sistema de compensaciones que se aplica para subvencionar a la industria azucarera, por la fijación de un precio real del producto.

XXXII.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:

1.—Del señor diputado **Beretta**: expresión del anhelo de la Honorable Cámara de que la República de Bolivia retorne a la normalidad institucional.

2.—Del señor diputado **Villacorta** y otros: nombramiento de una comisión para que redacte un proyecto de ley azucarera nacional.

5.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados **Stinco** y **Machargo**.

6.—Homenaje al pueblo de Chile en el aniversario de su independencia.

7.—Manifestaciones del señor diputado **Filippo** con motivo de la terminación del gasoducto tendido de Comodoro Rivadavia a La Plata.

8.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Santander** con motivo de la producción de publicaciones.

9.—Moción del señor diputado **Visca** de que se autorice a la Comisión de Asuntos Constitucionales a producir despachos.

10.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Filippo** con motivo de expresiones vertidas en debates de la Honorable Cámara.

11.—Continúa la consideración del proyecto de resolución por el que se dispone designar una comisión encargada de redactar un proyecto de ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Se sanciona.

12.—Proyecto de resolución por el que se dispone la designación de una comisión encargada de redactar el Código del Niño.

13.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara.

14.—La Honorable Cámara continúa el estudio en comisión del proyecto de ley orgánica de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

15.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión, en el proyecto de ley a que se refiere el número 14 de este sumario.

16.—Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de septiembre de 1949, siendo las 16:

1.

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Miel Asquía. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación de que se continúe llamando hasta obtener quórum.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Señor presidente: correspondería tratar el proyecto sobre registro de automotores, pero hago moción de que se aplaze, a fin de que la Cámara continúe constituida en comisión y siga considerando el que le sigue en turno, referente a la reforma de la ley de obras sanitarias.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires de que se aplaze la consideración del proyecto de ley sobre registro de automotores.

— Resulta afirmativa de 59 votos; votan 83 señores diputados.

14

CONFERENCIA. — OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Sr. Presidente (Dri). — Queda reanudada la conferencia.

Continúa el estudio en comisión del proyecto de ley orgánica de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación (1).

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Estamos reanudando la consideración de la ley orgánica de una repartición que merece el respeto de todos los habitantes del país, de una repartición que en su larga existencia ha realizado una labor profícua y de positivos beneficios generales.

No voy a hacer historia de esta repartición, pero sí recordaré que nació a principios de 1870 como consecuencia de la necesidad de proveer de agua a las locomotoras del Ferrocarril Oeste, necesidad acrecentada inmediatamente por la epidemia de cólera que tantas víctimas causó en esta ciudad y de la que aun se conserva triste recuerdo.

Desde entonces Obras Sanitarias de la Nación fué extendiendo su radio de acción por toda la República, ampliando sus sistemas de provisión de agua potable, redes cloacales, saneamiento, desagües, etcétera. Podemos afirmar que esta repartición tiene una extraordinaria responsabilidad para el mejoramiento de la higiene en el país y una indudable relación con el desenvolvimiento económico del mismo.

Por estas razones debo referirme en términos generales a algunos aspectos que considero substanciales, fundamentalmente a la ampliación en forma gradual y sistemática de su actividad en el vasto territorio de la República. Esto

es primordial, lo mismo que el estudio de la ley orgánica proyectada, complemento de la antigua ley 8.889.

Las riquezas del país son extraordinarias, pero su progreso depende en gran parte del aprovisionamiento adecuado de agua para beber y cultivo. Naturalmente que Obras Sanitarias tiene una misión específica que cumplir en cuanto al aprovisionamiento de agua potable.

Tengo aquí la Memoria de Obras Sanitarias de la Nación correspondiente al año 1943; ninguna otra posterior, porque este gobierno, que trata por todos los medios de aparentar una preocupación especial por los problemas de orden público, en muchos aspectos no cumple con su deber. En este caso debo hacerle cargo a Obras Sanitarias de la Nación, cuya última memoria publicada y conocida es del año 1943.

Sr. Colom. — ¿Contra quién es el cargo, señor diputado? ¿Contra Obras Sanitarias?

Sr. Presidente (Dri). — No interrumpa el señor diputado por la Capital al orador que está en el uso de la palabra.

Continúa con la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Desde 1943 Obras Sanitarias de la Nación no ha publicado ninguna memoria. El cargo es para todos los funcionarios que han dirigido Obras Sanitarias desde 1944 hasta la fecha.

— El señor diputado Colom pronuncia palabras que no se alcanzan a percibir.

Sr. Illia. — El señor diputado sabe que no somos tan ingenuos creyendo que podremos interpelar a algún señor ministro. Todos los proyectos de interpelación, y no sólo los proyectos de interpelación, sino todos los proyectos solicitando información al Poder Ejecutivo — lo sabe bien el señor diputado — no han sido tratados por esta Cámara. De manera que el expediente que el señor diputado propone es — considerémoslo así — de buena voluntad, pero ineficaz.

Sr. Colom. — El señor diputado renuncia a una prerrogativa parlamentaria, como es la de pedir al Poder Ejecutivo explicaciones sobre el asunto.

Sr. Presidente (Dri). — No está en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Por datos de la citada memoria y con antecedentes suministrados por la Dirección de Mineralogía, Geofísica e Hidrología de la Nación, se comprueba que en el país existen vastas extensiones con precipitaciones pluviales muy escasas; 1.100.000 kilómetros cuadrados con porcentaje inferior a 500 milímetros; 300.000 kilómetros cuadrados con porcentaje de 500 a 750 milímetros; 1.300.000 kilómetros

(1) Véase el proyecto de ley en la página 3331 del Diario de Sesiones.

cuadrados con más de 750 milímetros. Es decir que, excluyendo la zona mesopotámica, la provincia de Buenos Aires, la no totalidad de Córdoba y Santa Fe, las fuentes de provisión de agua potable originadas por lluvia son escasas en el resto del territorio de la República y no solamente ocurre lo antedicho, sino que son pobres, en general, en cantidad de agua que se puede obtener por perforaciones subterráneas. En otras regiones en las que las precipitaciones son abundantes el agua subterránea resulta impotable. De manera que la obtención de agua en buenas condiciones es un problema complejo y difícil, y Obras Sanitarias de la Nación debe realizar extraordinario esfuerzo para ir paulatinamente resolviéndolo.

A este aspecto de la cuestión, que quiero destacar en esta forma muy somera y general, se agrega otro. La provisión de agua potable en el país se efectuó generalmente por Obras Sanitarias de la Nación; en pequeña escala por los gobiernos provinciales y municipales y, otras, por empresas particulares.

De acuerdo con la misma memoria de 1943, solamente 70 poblaciones de la República —en la que están incluídas, por supuesto, las más importantes— tenían provisión de agua potable suministrada por Obras Sanitarias de la Nación. De esas 70 poblaciones, 45 se complementaron con desagües cloacales.

En general se puede considerar que entre lo que proveen Obras Sanitarias de la Nación, provincias y municipalidades, y lo realizado por las empresas particulares —muchas de las cuales, como las de Avellaneda y de Rosario, han pasado al patrimonio de Obras Sanitarias de la Nación— el 50 % de los 16.000.000 de habitantes de la República carece de provisión de agua potable, y más del 50 % carece de obras cloacales. Y no hablemos de obras de saneamiento y desagües pluviales, que constituyen un problema importante, del cual Obras Sanitarias de la Nación no ha podido ocuparse con preferencia.

Por ello quiero destacar la significación y la responsabilidad que incumbe a Obras Sanitarias de la Nación con respecto a las calidades del agua que se bebe en el territorio de la República. Donde Obras Sanitarias de la Nación carece de instalaciones, se bebe agua de mala calidad desde el punto de vista físicoquímico y, sobre todo, bacteriológico.

Es indudable que a medida que Obras Sanitarias de la Nación va extendiendo sus servicios, muchas de las enfermedades endémicas, verdaderas plagas que han causado innumerables defunciones en la República, como la fiebre tifoidea y las enfermedades afines, van desapareciendo. Así, por ejemplo, en la Capital Federal, hace cincuenta años, antes de que Obras Sanitarias instalara su red de agua y de cloacas, el

50 o/oo de las defunciones eran originadas por fiebre tifoidea, proporción que en la actualidad es solamente de 0,2 por mil.

Esta y otras enfermedades tienen importancia sobre la economía de la región: muchos habitantes, aptos para el trabajo, sufren sus consecuencias. Es un aspecto que debe preocupar hondamente en un país que se dice económicamente libre y donde aun está por resolverse este substancial problema higiénico.

Numerosas leyes se han dictado con el objeto de ir incrementando la acción de Obras Sanitarias de la Nación. El señor miembro informante de la mayoría se refirió ya a alguna de ellas, a la ley 4.158, dictada el año 1902, entre las principales, que estableció el mecanismo para proveer de agua a las capitales y ciudades importantes de la República; a la ley 10.998, referente a otras ciudades de menor importancia de provincias y territorios; a la ley 12.140, que estableció en su articulado una disposición a la cual los diputados de este sector le asignamos la destacada importancia que tiene, pues en virtud de la misma, Obras Sanitarias de la Nación puede realizar provisión de agua en pequeñas poblaciones y establecer servicios reducidos y gratuitos.

Pero existe contrasentido, en mi concepto, pretendiendo que los servicios prestados en gran proporción, deben tener carácter retributivo. No es posible que sigamos legislando con este criterio.

Sr. Casas Noblega. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Illia. — Sí, señor diputado.

Sr. Casas Noblega. — Creo que el señor diputado no es justo en su apreciación. El servicio gratuito que presta Obras Sanitarias está establecido por la ley, y las provincias o los municipios adhieren en virtud de un convenio a esa disposición legal y entonces Obras Sanitarias presta el servicio gratuitamente. Es lógico que así sea, porque si vamos a examinar el sentido jurídico del servicio retributivo, nos vamos a encontrar con la situación paradójica de que hay lugares, como sucede en mi provincia, que son pobres y tendrían que estar pagando ese servicio público. En ese sentido la ley ha previsto el servicio gratuito que se ha realizado siempre, ahora y antes, porque esa ley viene de tiempo atrás.

Sr. Illia. — Seguramente no me he expresado bien, porque coincido totalmente con la manifestación del señor diputado por Catamarca.

Quería decir dos palabras sobre el sentido general que nosotros tenemos sobre lo que llamaríamos la economía de la ley. En Obras Sanitarias de la Nación se ha creído y así se ha establecido permanentemente, que el servicio debía ser retributivo, salvo esas obras de servicio reducido a las cuales me refería recién. Y

nosotros entendemos que no tiene por qué ser siempre un servicio retributivo el de Obras Sanitarias de la Nación. Quiero decir, que deben realizarse las obras donde sean necesarias, sin atender especialmente la capacidad económica de las poblaciones para cumplir con la devolución de los gastos efectuados en concepto de construcción y explotación.

Si es verdad que el servicio en última instancia es individual o particular, y no tiene la misma característica que el prestado, por ejemplo, por Dirección Nacional de Vialidad cuando habilita un camino utilizable por los que deseen transitar por él o cuando se construyen escuelas, a las que pueden concurrir los niños en general, en cambio, depende del servicio prestado por Obras Sanitarias, la salud de la población, y la salud de la población, el mejoramiento físico del pueblo está por sobre todas las obligaciones que puedan tener los habitantes de pagar capital e intereses invertidos para proporcionarles agua en buenas condiciones. Nosotros creemos que Obras Sanitarias de la Nación debe extender en forma amplia sus servicios en todo el territorio de la República, sin discriminaciones de ningún género.

Se podrá habitar una mala casa —y no deseamos que ningún ciudadano argentino viva en una casa incómoda—; se podrá concurrir a una escuela cuyo edificio, muebles o útiles no sean lo eficientes que deseamos para todos los niños del país, pero jamás debe admitirse que chicos y grandes beban agua en malas condiciones y esto le ocurre a la mitad de la población de la República. Nosotros debemos tratar de resolver en forma integral este gravísimo problema que es fundamental, como dije al comienzo de mi exposición, para el real progreso del país.

Debe encararse, por otra parte, con gran energía y decisión, la regularización de los cursos de nuestros ríos interiores. Estos, salvo alguna excepción, son de régimen irregular; con crecidas periódicas que imposibilitan su utilización como fuentes de provisión de agua, porque existe una época del año en que llevan un caudal insignificante.

Sr. Colom. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Illia. — Sí, señor diputado.

Sr. Colom. — Ya que estamos legislando en forma constructiva, desearía que el señor diputado por Córdoba nos dijera si es o no eficiente la acción desarrollada por este gobierno, a través de Obras Sanitarias de la Nación, en esa provincia. Si justo es aceptar y reconocer errores, también lo es que por boca de un diputado de la oposición, que en este caso hace crítica, se diga si en realidad Obras Sanitarias ha realizado o no obras de bien público en la provincia de Córdoba.

Sr. Illia. — Le voy a contestar al señor diputado refiriéndole con toda exactitud, lo que ha hecho, lo que hace y lo que proyecta Obras Sanitarias en mi provincia.

Sr. Colom. — Me interesa lo hecho.

Sr. Illia. — También le diré lo que queda por hacer. Casualmente, me iba a referir a problemas importantes contemplados en la provincia de Córdoba no exclusivamente por este gobierno, ya que los gobiernos en estos asuntos tienen importancia transitoria. Considero que este gobierno ha de comprender estos problemas, porque son de urgencia nacional y estimo que no puede haber argentinos que no estén dispuestos a colaborar intensamente en sus soluciones.

Sr. Colom. — Yo, que conozco el patriotismo del señor diputado por Córdoba, quisiera saber cuál es la obra realizada. Lo que se hará es cuestión perteneciente al futuro.

Sr. Dellepiane. — El señor diputado recién llega, después de haber bebido agua.

Sr. Colom. — Siempre acostumbro a beber té.

Sr. Illia. — Repito: Una de las fuentes principales de producción de agua potable pueden ser nuestros ríos, por lo que es necesario encarar el problema de la regularización de sus cursos en el interior de la República.

En este sentido, existe un hecho ilustrativo. En 1930 se concluyó la construcción del dique Río Tercero, se regularizó su curso permitiendo realizar a Obras Sanitarias de la Nación algunos proyectos de singular importancia. El acueducto de Villa María a San Francisco —posiblemente una de las más importantes obras en su género—, proporciona agua potable a importantes poblaciones, como la de San Francisco, en zonas donde el promedio de lluvias es grande y las napas freáticas tienen aguas impotables por su alta proporción de arsénico. Es también aspiración de los pobladores del Sudeste cordobés, cuyo centro es la ciudad de Laboulaye, que se construya, partiendo del río Tercero, otro acueducto que llene las mismas imperiosas necesidades que el mencionado antes.

Con esto quiero significar la importancia extraordinaria que tienen los ríos de escaso caudal, de crecidas periódicas, y la necesidad que existe de regularizar su curso. Esta repartición cuya ley orgánica estamos considerando debe actuar en forma concordante con la Dirección del Agua y la Dirección de la Energía, quienes tienen intervención en la construcción de estos embalses.

Tengo la seguridad que algo se hará en este sentido. Hay muchos estudios y proyectos, y como pareciera que de acuerdo con las informaciones del señor diputado Colom el país pasa por un momento de extraordinario bienestar, pensamos que no sólo se han de utilizar los dineros públicos para acrecentar la tremenda burocracia que soportamos, sino que con ellos

se han de realizar estas obras indispensables para que nuestros compatriotas del interior superen necesidades apremiantes.

Sr. Colom. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Illia. — Con mucho gusto.

Sr. Colom. — Deseo saber, porque no he entendido bien, si se ha realizado o no en época de este gobierno de la revolución el acueducto que une Villa María con San Francisco.

Sr. Illia. — En Córdoba existen obras que han realizado los gobiernos anteriores y que este gobierno las completó e inauguró. El señor diputado sabe que este gobierno inaugura todas las obras y les pone la etiqueta de esta época y el sello de la revolución, pero han sido hechas y comenzadas durante el régimen anterior.

En esta época, Obras Sanitarias de la Nación ha tomado por su cuenta la provisión de agua de la ciudad de Cruz del Eje. Se trata de un problema importante cuya solución era indispensable. Además, se está ampliando en la ciudad de Córdoba la red de provisión de agua y no recuerdo si hay alguna otra obra de importancia en dicha provincia...

Sr. Colom. — Si me permite una interrupción el señor diputado...

Tengo sobre mi banca una información de carácter oficial. Durante este gobierno revolucionario, se terminó la construcción de un acueducto de 170 kilómetros de largo con un diámetro de 70 centímetros, que une a Villa María con San Francisco. Esa obra surte de agua a 11 localidades. Como bien se ha dicho, ha sido posiblemente proyectada por otros gobiernos, pero la verdad es que ha sido ejecutada en su casi totalidad durante la actual administración. Con esta obra se ha terminado con el «negocio» del agua en San Francisco, elemento por el cual se cobraban precios prohibitivos a la población. La falta de agua potable hizo que la población de San Francisco sufriera pestes y calamidades de toda naturaleza, que felizmente han sido superadas por la instalación de dicho acueducto.

Sr. Lucini. — Le ruego al señor diputado por Córdoba me permita también una breve interrupción.

Sr. Illia. — Sí, señor diputado.

Sr. Lucini. — Con respecto al acueducto de Villa María a San Francisco, tienen razón el señor diputado por la Capital y algo de razón el señor diputado por Córdoba. Digo esto en homenaje a la verdad.

El acueducto fué proyectado hace varios años, iniciándose las obras, pero luego fueron abandonadas durante muchos años. En realidad, después de 1943 se hizo la instalación del acueducto de punta a punta y además las distintas conexiones en los pueblos de Las Mojaras, Arroyo Algodón, Laspiur, Las Varillas, Las Varas, Quebracho Herrado, Colonia Prosperidad y Monte Redondo y la ciudad de San Francisco.

Toda esa zona, como bien lo ha dicho el señor diputado por Córdoba, tiene el problema de las napas de agua no potables por su tenor de arsénico que las hace nocivas.

Esa obra ha sido costosísima para el Estado y, como digo, si bien es cierto que se ha proyectado con anterioridad, la casi totalidad de la obra se realizó después de 1943.

El señor diputado, que creo ha ejercido su profesión durante muchos años en Cruz del Eje —no sé si es oriundo de dicha ciudad— ha de conocer muy bien el problema pavoroso de las epidemias que se desarrollaban durante el verano en dicho punto. Había un verdadero problema de Salud Pública, y Obras Sanitarias ha hecho grandes esfuerzos para dar una solución rápida al problema.

En Deán Funes, localidad que el señor diputado probablemente ha omitido porque no tenía información, también se hizo una perforación y Obras Sanitarias se hace cargo del servicio.

En Mina Clavero y en Villa Dolores se han ampliado las conexiones domiciliarias; también en Jesús María, Ascocchinga, etcétera...

Sr. del Carril. — ¿Por qué el señor diputado no pide la palabra para pronunciar después un discurso?

Sr. Lucini. — Es que quiero simplemente dar unos datos que el señor diputado Illia no mencionó, con respecto a la actuación de Obras Sanitarias en los últimos años.

En algunos sectores de la ciudad de Córdoba se carece de agua potable, pero ello se debe al enorme crecimiento de la ciudad y a la falta de provisión por insuficiencia del dique San Roque. Algunas perforaciones, como el pozo del barrio San Martín y otras que se hacen en barrios circundantes de la ciudad, han encontrado capas que son insuficientes. Por eso, el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del respectivo ministerio, está construyendo el dique del río Segundo, llamado Los Molinos. Terminado ese dique, se proyecta hacer un acueducto de sesenta kilómetros, con declive natural, con un nuevo sistema de filtros, con lo cual se dará solución definitiva al problema de la provisión de agua potable a la ciudad de Córdoba.

Además, podría recordar el sistema de cloacas en Villa María y en San Francisco, así como los desagües en San Vicente, y otras obras, pero sería en realidad intercalar un discurso en lugar de una interrupción.

Simplemente he querido suministrar algunas informaciones para responder a la pregunta del señor diputado Colom.

Agradezco al señor diputado por Córdoba la interrupción concedida.

Sr. Presidente (Dri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — No es mi propósito entrar en una pequeña polémica acerca de cuando se proveyó

de agua potable o cuando se dejó de hacerlo. Me limitaba a responder a una pregunta del señor diputado Colom, a quien parece debemos mandar a la escuela para que estudie la hidrografía cordobesa.

El río Tercero nace en las sierras de Calamuchita y no en Villa María. Pasa por la ciudad de Villa María, y desde ahí parte el acueducto.

Sr. Colom. — Mi propósito era que se reconociese que el gobierno actual hizo la obra. A tal fin, no interesa si Villa María está sobre el río Tercero o no lo está. La realidad es que el acueducto fué hecho por nosotros.

Sr. Illia. — El acueducto fué terminado por el gobierno actual, pero se inició antes. Fué proyectado por ley especial debida a la iniciativa del diputado por Córdoba, doctor Palacio.

En cuanto a las informaciones suministradas por el señor diputado Lucini, no he entrado a discutir las realizaciones de Obras Sanitarias. He hecho un pequeño cargo con relación a la memoria, pero desde el primer momento destacó que las condiciones de capacidad técnica de esa repartición, que ha sido de resultados beneficiosos para la República. Si algo tuviera que decir con respecto a esa entidad es que su capacidad técnica se ha visto malograda en los últimos tiempos por infiltración politiquera. Quizá me refiera en algún aspecto, a la manera en que actualmente es dirigida la repartición.

Con los datos citados y con las observaciones de orden general formuladas, he querido destacar la extraordinaria importancia del problema que la falta de provisión de agua potable crea a los pueblos del interior. Sobre ese problema podrían decirse cosas dramáticas y trágicas, pero no vengo a decir cosas dramáticas ni quiero expresar en una exposición trágica la dura necesidad que sufre la mitad de la población de la República. Los señores diputados, especialmente los del interior, conocen bien esa necesidad y me acompañarán en la apreciación que hago sobre este fundamental problema.

Con referencia directa al proyecto de ley orgánica que estamos tratando, quiero decir que debe dársele a Obras Sanitarias de la Nación una extraordinaria autonomía, dotándola de todos los recursos indispensables para que cumpla un gran programa de construcciones en el país.

Una de las características del nuevo gobierno —de este gobierno de la revolución, como lo llaman los señores diputados de la mayoría—, es su afán centralista. El gobierno quiere centralizar la mayor parte de las actividades de la República, quiera tener en sus manos todos los aspectos de la economía del país. Este sistema está dando pésimos frutos. Es el nuestro un país en el que nosotros debiéramos respetar las autonomías municipales y provinciales y reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo. En

este sentido discrepamos fundamentalmente con los señores diputados de la mayoría.

Sostenemos que en nuestro país deben descentralizarse las actividades entregándolas a las provincias, a los municipios o a aquellos particulares que quieran colaborar en la obra patriótica del progreso de la Nación, trasladando hacia ellos parte de la responsabilidad que en este momento asume el Poder Ejecutivo de la Nación.

Esta responsabilidad, señor presidente, es de extraordinaria trascendencia, pues por la complejidad de los problemas que el gobierno debe resolver, esta centralización que observamos provoca que las cosas se resuelvan en general, tarde y mal. Debe, pues, descentralizarse nuestro país, por su extensión, por la población diseminada a través de un largo territorio, y es menester darle mayor autoridad a las provincias y a los municipios para resolver sus problemas, acordando también a estas reparticiones técnicas una auténtica autarquía.

En el proyecto que discutimos se habla de autarquía de Obras Sanitarias de la Nación, pero resulta que en realidad se le ha quitado totalmente la autarquía de que gozaba esta repartición técnica con lo que se le ha inferido un grave daño. De acuerdo con la ley 8.889, Obras Sanitarias de la Nación era administrada por un presidente y un consejo de administración, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, durante cuatro años en el ejercicio de sus funciones. Este organismo ha sido reemplazado por otro consejo constituido por un administrador general y los jefes de las reparticiones más importantes de Obras Sanitarias: jefe técnico, de explotación comercial, finanzas, contabilidad, asuntos jurídicos y el de personal y asistencia social, nombrados por el Poder Ejecutivo, sin acuerdo del Senado, lo que significa que pueden ser removidos en cualquier momento, y que no tienen término fijo en su mandato. Se le acuerdan las atribuciones que en general tenían por la recordada ley 8.889, pero al presidente del organismo, nombrado, por supuesto, por el Poder Ejecutivo, se le otorga el derecho de veto; lo que significa que reunido este nuevo consejo de administración, teniendo en sus manos la resolución de problemas técnicos, económicos y financieros de gran importancia, suponiendo que los directores tienen la responsabilidad técnica que corresponde a su carácter de jefes de oficinas técnicas, en el consejo de administración no tienen derecho de hacer prevalecer sus opiniones, si el presidente se opone. El presidente tiene doble voto y derecho de veto, pero en última instancia el Poder Ejecutivo será quien resuelva sobre cualquier diferencia que pueda ocurrir en el consejo de administración.

Nosotros no estamos de acuerdo con este régimen y vamos a proponer, en la discusión en

particular, ya sea que se adopte éste o se conserve el antiguo régimen de administración, que el consejo de administración pueda resolver por sí, desde luego comunicando al Poder Ejecutivo todos los problemas de la repartición.

Es imposible crear reparticiones técnicas con jefes que carezcan de autoridad para cumplir su cometido. Por eso disintimos con la mayoría y es una de las causas por la que hemos firmado en disidencia este despacho.

Otra observación de carácter fundamental, a que ya hice alusión al comienzo de mi exposición, es la siguiente. En distintas épocas, Obras Sanitarias de la Nación se ha ido manejando con fondos que obtenía mediante financiación de títulos colocados en el mercado interno o externo, de acuerdo con autorizaciones dadas por distintas leyes.

En 1940 el Poder Ejecutivo fijó por decreto el monto de lo que le adeudaba Obras Sanitarias de la Nación, en los siguientes términos: «La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de 448.000.000 de pesos al 31 de diciembre de 1939, y las que con el mismo fin ha recibido con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés anual no menor al de los títulos en plaza, y su importe será reintegrado a aquella institución mediante la entrega de una cuota del 2 % anual.»

No sabemos exactamente cual es el monto total que Obras Sanitarias adeuda al gobierno. En concepto de cuenta capital ascendía a 448.000.000 de pesos en 1940; pero es probable que con las entregas sucesivas hechas por el gobierno nacional esta deuda se haya acrecentado. Por esta ley se condonan las deudas por servicios financieros.

Nosotros vamos a proponer la cancelación de la deuda de Obras Sanitarias de la Nación con el Poder Ejecutivo. Queremos que Obras Sanitarias de la Nación tenga la mayor independencia posible; que no tenga que cobrar interés por el capital a los usuarios, que no deban cargar éstos con los servicios financieros. Creemos que el gobierno puede perfectamente bien hacerse cargo de esta deuda, cuyo monto no es extraordinario. Sabemos que la deuda pública de la Nación en estos momentos alcanza más o menos a trece o catorce millones de pesos, según nos dijo en la sesión...

Sr. Colom. — Conviene no aumentarla.

Sr. Presidente (Dri). — La Presidencia ruega al señor diputado por la Capital que no interrumpa al orador que está en uso de la palabra.

Sr. Illia. — Esto sigue siendo deuda de la Nación, porque si es deuda que tiene Obras Sanitarias con el gobierno de la Nación, Obras Sanitarias ha emitido con el respaldo del gobierno nacional, y esa deuda, de acuerdo con

el decreto de 1940, ha sido incluida dentro del monto total de la deuda de la Nación. Como digo, no se trata de una suma extraordinaria. Dejaríamos a Obras Sanitarias de la Nación una libertad mucho más amplia para moverse en el terreno financiero, poder ampliar extraordinariamente sus servicios y hacer sus construcciones en forma menos onerosa para el usuario.

Hemos de tratar que la suma que anualmente fija el Poder Ejecutivo, y de acuerdo con la misma ley orgánica, en las leyes 12.576 y 12.815, de créditos de obras públicas, se invierta una cantidad mayor que la de 200.000.000 de pesos, que está incluida en el artículo 18. Y vamos a proponer también que una cantidad apreciable de esta suma sea destinada por Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de fomento, es decir, de obras que se hagan en las villas, pueblos y pequeñas poblaciones de la República, cuya capacidad contributiva es escasa y que no pueden devolver a Obras Sanitarias de la Nación lo que ella invierte en la construcción de dichas obras. Esos serán algunos aspectos de carácter general que nosotros vamos a proponer, modificando el despacho, y que afirman nuestra disidencia parcial con el proyecto.

En términos generales, estamos de acuerdo con el mismo. Queremos que Obras Sanitarias de la Nación tenga una nueva ley orgánica; queremos que tenga independencia; queremos que tenga autarquía; queremos que tenga fondos suficientes para realizar su importantísima obra en beneficio de toda la colectividad. En este sentido y este aspecto la repartición, el gobierno nacional y los señores diputados de la mayoría encontrarán siempre una colaboración franca y leal de los miembros de la minoría.

Nosotros, al pretender reformar en algunos aspectos esta ley, lo hacemos con el solo interés de que esta repartición trate en todo lo posible de aumentar su capacidad constructiva y de que, si ha estado al servicio del país en forma que no podemos discutir, de aquí en adelante pueda llenar su cometido en forma amplia, satisfactoria y consultando estos vitales intereses que he expuesto en forma sucinta. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — La ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación no es una ley común; es una ley fundamental para la vida de la institución, ley que estimo debe merecer la mayor consideración y estudio por parte de los señores diputados, ley que debe permitirse que se discuta ampliamente; ley que tiende a dar estructura definitiva al desarrollo de las obras de salubridad en todo el país; ley que habrá de satisfacer innumerables aspiraciones de muchos sectores que vienen bregando desde hace largos

años por el afianzamiento de conquistas que son fundamentales para el desenvolvimiento de las poblaciones más lejanas de la República.

El señor diputado Illia ha definido ya el pensamiento del sector radical, señalando a través de un análisis meditado y responsable, la importancia que el radicalismo le asignó desde el gobierno y desde el llano a todos los problemas que como el presente hacen a la existencia misma de la familia argentina.

Esta no es una cuestión nueva; podemos decir que desde la época del afianzamiento de la patria, ha sido motivo de no pocas preocupaciones la solución de los problemas que aseguran la salubridad del país. A las primeras tentativas de reglamentación del consumo de agua potable para la población, de fiscalización de los pozos negros, y de la forma de arrojar a los riachos o cursos de agua los líquidos residuales de los antiguos saladeros y curtidurías de la ciudad de Buenos Aires, sigue —consolidada ya la organización del país— la primera ley de saneamiento que lleva el número 1.371, sancionada el 24 de octubre de 1883. Fué el primer instrumento legal destinado a reglar la construcción de obras sanitarias, en modo especial en la Capital Federal y en las zonas limítrofes que hoy constituyen lo que ha dado en llamarse el aglomerado bonaerense.

Esa ley fué motivo de no pocas y serias preocupaciones por parte de los especializados en la materia en aquella época. Digamos de paso, a manera de justo homenaje, que esas preocupaciones fueron siempre compartidas patrióticamente por los hombres que dirigían los destinos del país. Al ingeniero Santiago Bevans, en 1824, se debe la construcción del primer pozo artesiano de agua potable en la zona denominada la «Noria de la Recoleta». Los posteriores trabajos del ingeniero Carlos Pellegrini, entre 1860 y 1865, que la falta de fondos impidió realizar totalmente, revelan el afán de los hombres de gobierno por asegurar no sólo a la Capital, sino también al resto de la República, obras de salubridad. Ya antes, en 1853, al dictarse la ley orgánica de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, se prevee la importancia que tienen estas obras y establece que estarán bajo su jurisdicción todas las cuestiones vinculadas con el agua potable, la desinfección del aire, el destino de los líquidos residuales de los viejos saladeros y curtiembres, y la conservación de los surtidores de agua de la ciudad y la campaña.

Ante la aparición de los primeros síntomas de la fiebre amarilla, el entonces ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, don Nicolás Avellaneda, en una nota dirigida al presidente de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires —quiero señalar a la Honorable Cámara el respeto y la independencia que existía entonces entre los poderes; y al mismo tiempo destacar la clara interpretación que se

daba al texto constitucional en todo cuanto se vinculara con la autonomía del municipio de la ciudad de Buenos Aires—, urge la necesidad de realizar las obras oásicas de salubridad para la ciudad.

Desgraciadamente el cólera morbus, que avanzó en forma notoria asumiendo los trágicos contornos que registra la historia, hace imprescindible que el gobierno de la provincia de Buenos Aires adopte inmediatamente las medidas necesarias para asegurar en forma definitiva, eficiente y concreta, los primeros servicios de agua corriente para la ciudad de Buenos Aires. Recurre en procura de urgente ayuda a la Legislatura y ésta haciéndose eco del estado epidémico de la capital sanciona la primera ley de mejoramiento higiénico para Buenos Aires el 23 de diciembre de 1867. Después de sortearse algunos inconvenientes de orden financiero y de jurisdicción, el gobierno de la provincia de Buenos Aires inaugura el 4 de abril de 1869 el primer plan de obras de suministro de agua a la Capital Federal.

Este ensayo inicial que beneficiaba a una muy limitada zona urbana, trajo aparejado como consecuencia de la terrible epidemia de la fiebre amarilla, la necesidad de ampliar las obras de provisión de agua y de llevar a cabo la instalación de la primera red cloacal. Pero todas estas loables tentativas, puede decirse que sólo adquieren fisonomía propia en el ordenamiento final de las obras cuando el ingeniero Bateman, presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, es contratado por el gobierno argentino para planear en forma definitiva un servicio eficiente de obras de salubridad para la Capital Federal.

Entonces Bateman, con la colaboración de prestigiosos ingenieros argentinos, como los ingenieros Balbin, Taylor y Pellegrini, entre otros, realiza una tarea llena de méritos. Está pendiente aun de resolución el gran homenaje que merecen estos esforzados pioneros del saneamiento de la ciudad de Buenos Aires. Estudian ellos, entre otras cosas, la ubicación definitiva del puerto de la Capital, la instalación de un servicio eficiente de aguas corrientes, y la construcción de una red colectora cloacal. Se consultan y se tienen en cuenta los códigos y tratados de los países más adelantados en la materia, sobre legislación preventiva y planificación rural de la salubridad urbana. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, nos brindan antecedentes en los que se encuentran elementos fundamentales para perfeccionar el nuevo código, para estructurar el planeamiento que asegure la realización de las nuevas obras que espera con ansiedad la ciudad de Buenos Aires y que habrán de ser el basamento definitivo de su progresiva extensión al resto del territorio de la República.

De estos estudios meditados, profundos, surgió la conveniencia de aceptar el planeamiento y

sistema propuesto por el ingeniero Bateman. Ya él en aquella época, con gran visión del futuro, señala como punto de referencia para el arrojamiento de los líquidos cloacales al río de la Plata, el mismo lugar donde se halla instalado en la actualidad el sifón en Berazategui.

Y así llegamos al año 80 en que, como consecuencia del pacto de federalización de la Capital de la República, se sacan de la órbita municipal en forma definitiva los servicios de las obras de salubridad. Ya lo dije al comienzo; sólo con la ley 1.371 podemos afirmar que se logra en forma definitiva el primer instrumento orgánico para la Capital Federal, en materia de obras sanitarias. Posteriormente, la ley 4.158, promulgada el 26 de diciembre de 1902, afirma la capacidad del Estado para la dirección y administración de las obras sanitarias de la Nación, que si en algún momento pudieron ser entregadas a una empresa privada, no fué ello óbice para que bien pronto el gobierno reconociera la necesidad de asumir el control de las mismas. A raíz de esta sabia medida de gobierno, se designa entonces el primer directorio de obras sanitarias a fin de que este importante y fundamental servicio fuera controlado y dirigido por el propio gobierno de la Nación.

Ahora bien; puedo afirmar que sólo en el período que media entre 1916 a 1922, durante la primera presidencia de Yrigoyen, es cuando este organismo adquiere perfiles definitivos. Mediante un gran plan de obras de salubridad para toda la República, aquel insigne mandatario demuestra su gran preocupación por todos los problemas en ese orden de cosas, que afectan no solamente a la Capital Federal, sino también a las ciudades del interior de la República. La sanción de la ley 10.998, en fecha 21 de octubre de 1919, materializa esa honda preocupación del gran presidente argentino.

Digamos, además, que sólo entre 1918 y 1920 el laboratorio de Obras Sanitarias de la Nación efectúa un serio y meditado estudio orgánico referente al estado higiénico de las aguas del Río de la Plata en el tramo que va de San Isidro a Río Santiago, por ser esta zona la que se utiliza para abastecer regularmente de agua potable a la ciudad de Buenos Aires.

La sanción de la ley 10.998 se recuerda aún con gratitud y con cariño. Sus beneficios fueron incalculables, adquiriendo con el andar del tiempo contornos históricos. Antes de proseguir quiero reafirmar algunos conceptos del señor diputado Illia, en el sentido de que la ley 10.998 en ningún caso fué vehículo de avasallamiento de la autonomía de las provincias o municipios.

Diecisiete años después de aquel extraordinario plan, vuelve a tomar estado público la preocupación por el mejoramiento de la acción sanitaria en el país a través —y lo reconozco con toda lealtad— de la eficiente actuación del ingeniero Selva al frente de Obras Sanitarias

de la Nación. A él se debe, en principio, la sanción de la ley 12.140, que configura una etapa más dentro del desarrollo siempre progresista de las obras sanitarias en el país.

A esta altura de mi exposición quiero complementar una información suministrada a la Cámara por el señor diputado Illia, cuando hablaba del régimen diferencial existente en la aplicación de las tarifas entre la Capital Federal y el interior del país. A título informativo deseo agregar que la ley 12.140 tuvo la virtud de unificar tarifas en todo el país, a fin de evitar que ellas, si bien pudieran resultar equitativas y justas en la Capital, resultaran onerosas y antieconómicas para las más modestas poblaciones del dilatado territorio argentino.

Llegamos así, después de un largo período de preocupación por la solución de los problemas relacionados con el suministro de agua corriente, construcción de desagües y redes cloacales, llegamos a 1942, año en que se estudia la posibilidad de dictar una nueva ley orgánica para Obras Sanitarias de la Nación, que estuviera en consonancia con las siempre crecientes necesidades de los centros urbanos más poblados de la República.

El proyecto de la nueva ley orgánica de 1942 contemplaba iniciativas importantes. Las relacionadas con la provisión de agua al conglomerado bonaerense y a numerosas ciudades del interior ocupan un lugar destacado.

Es con alguna pena —y quiero señalar toda la simpatía que siento por esa institución que cuenta siempre con el beneplácito de todos los argentinos— que debo manifestar que a partir de 1942, salvo honrosas excepciones, nada de importancia se registra en materia de legislación, acerca de obras sanitarias. Puede afirmarse que del simple análisis de la actividad del organismo a que me estoy refiriendo, se observa que el estancamiento más absoluto se operó en el período 1943 - 1948.

Sr. Visca. — ¿Usted cree que no se trabaja?

Sr. Rabanal. — Ya llegaré a ese punto. Le estoy rindiendo a Obras Sanitarias el homenaje que se merece, etapa por etapa...

Sepa además el señor diputado que en los problemas relacionados con la vida y desarrollo de las actividades de esta institución entiendo que jamás debe hacerse política.

Sr. Visca. — Me parece muy bien; como en ningún otro problema.

Sr. Rabanal. — Me corresponde ahora analizar algunos de los aspectos que nos llevarán al terreno que ya señaló el señor diputado Illia, cuando se refirió a la funesta acción política desarrollada por algunos funcionarios que no midieron la responsabilidad que implicaba tener a su cargo la dirección de un organismo de la importancia de Obras Sanitarias de la Nación.

Es por ello que pregunto: ¿Qué razones existieron para que por un decreto que lleva la

firma del presidente de la República se diera por tierra con una magnífica organización y se creara la Administración Nacional del Agua, más conocida por la sigla ANDA? Tal medida significó despreciar la experiencia de funcionarios capaces y dignos, que con su esfuerzo y dedicación honraron el cargo que desempeñaban. No se puede olvidar que se destruía una entidad que fué orgullo de todos los argentinos, y se la refundió con la Dirección General de Irrigación, en una inocua amalgama de cloacas y diques.

¿Qué razones técnicas o de otro orden pudieron haber influido como factores decisivos para llevar adelante tan descabellado planteo? Si practicamos un elemental análisis, que nos dará sin duda la razón en todos sus órdenes, comprobaremos lo siguiente: Obras Sanitarias de la Nación provee de agua a núcleos urbanos; Irrigación, en cambio, provee de agua a zonas rurales; Obras Sanitarias provee agua para uso potable; Irrigación provee agua exclusivamente para riego; Obras Sanitarias capta el agua de ríos y pozos, distribuyéndola por cañerías; Irrigación distribuye el agua en los predios rurales por el sistema de canales; Obras Sanitarias construye conductos cloacales, cloacas, filtros y tanques; Irrigación construye, en cambio, diques, embalses y represas; Obras Sanitarias realiza sus estudios y obras para pequeñas superficies urbanas; Irrigación, en cambio, efectúa estudios y construye obras para abastecer grandes superficies rurales.

Como se puede advertir, son dos organizaciones distintas con actividades técnicas diferentes, regidas por principios sociales, administrativos técnicos y financieros que en nada se asemejan entre sí.

Yo pregunto a fin de complementar este análisis: ¿qué se consiguió con esto? Mejoró la capacidad de organización y de desenvolvimiento en la realización de las obras hasta ese momento a cargo de Obras Sanitarias de la Nación? No, señor presidente. Muy por el contrario, puedo afirmar sin temor a equivocarme que ése fué el primer paso hacia la anarquía total, que más tarde daría los frutos que también trataremos de analizar serenamente a través del desarrollo de este debate.

No mentimos si afirmamos que se dilapidó tiempo, experiencia y dinero, señor presidente, dinero que pertenece al pueblo argentino. Así vemos cómo al personal técnico, especializado, ingenieros, etcétera, que habían dedicado toda su vida al estudio y solución de los problemas del riego, por razones fáciles de comprender, —por razones políticas—, se los destinaba a funciones distintas y en lugares lejanos a los de su residencia habitual. En cambio, otros que llevaban más de veinte años dedicados al estudio de la instalación de cañerías, de aguas corrientes o redes cloacales se los obligaba a im-

provisar en el planeamiento y desarrollo de los sistemas de represas, embalses o diques.

¿Qué trajo aparejado como consecuencia mediata esta falta de sentido común? Incurrir en enormes gastos de traslado de personal, creación de nuevas oficinas, modificación del régimen de contralor y administración, etcétera.

Se había creado con ello una frondosa planta burocrática, en la que luego encontrarían cordial albergue los primeros arrivistas de la revolución que hoy nos gobierna.

Desgraciadamente estaba previsto que ANDA no podía durar mucho tiempo. ANDA fué en su breve existencia una peligrosa e ingrata aventura para la defensa de los intereses confiados a su custodia. Eso lo reconoció leal y sinceramente el gobierno de la Nación, al dejar sin efecto por un nuevo decreto dicha resolución.

Con ello, Obras Sanitarias de la Nación recuperaba en principio su ya precaria autonomía. La opinión pública esperó entonces una reacción, un nuevo ordenamiento que le permitiera recuperar el prestigio adquirido durante largo tiempo por Obras Sanitarias de la Nación. Se esperaron, además, las razones que debía dar el propio presidente de la República, firmante del decreto, para determinar por qué causas se había decretado la disolución de ANDA. Pero nada de eso se dijo. Por el contrario, el silencio más absoluto coronó este decreto.

Aclaro que al señalar estas deficiencias de conducción me hago un deber en repetir lo que ya he dicho ante esta Honorable Cámara y es que ni en los problemas municipales ni en los de obras sanitarias puede hacerse política de ninguna naturaleza, baja política sobre todo. No obstante ello, es conveniente que la opinión pública sepa que todo este desorden es el resultado de una sorda lucha mantenida sin cuartel por los dos grupos actuantes en aquel momento en ANDA. Tiene la palabra entre otros en este asunto el entonces interventor de la Administración Nacional del Agua y hoy gobernador de La Rioja, ingeniero Zuleta. Quiero que la Cámara sepa que de esa lucha entre el ingeniero Zuleta y el subinterventor de ANDA, señor José Leopoldo de Lasaleta...

Sr. Visca. — Estamos tratando la ley orgánica, y no la actuación de los funcionarios.

Sr. Sarmiento. — Hago la cuestión formal de que el señor diputado no se está refiriendo a la ley de Obras Sanitarias, sino a la actuación de los directores de ANDA, que nada tiene que hacer con la ley.

Sr. Rabanal. — Afirmando la verdad cuando digo que fué una lucha de predominio entre dos grupos...

Sr. Presidente (Dri). — La Presidencia ruega al señor diputado por la Capital que se circunscriba al asunto en debate.

Sr. Rabanal. — Las referencias que estoy haciendo serán beneficiosas para el debate.

Sr. Vischi. — Diga si la ley presentada sirve o no sirve.

Sr. Rabanal. — Como consecuencia de la intervención, hubo que reorganizar...

Sr. Sarmiento. — No habla de las condiciones del ingeniero Zuleta, pero lo critica por su política interna.

Sr. Rabanal. — No es mi propósito hablar del ingeniero Zuleta. Si tuviera que hacerlo debería recordar a la Cámara un episodio que he vivido en el Concejo Deliberante, siendo presidente de la Comisión de Obras Públicas, episodio muy ingrato que no quiero comentar aquí.

Sr. Lucini. — No lo recuerde si no lo quiere comentar.

Sr. Sarmiento. — Otra cosa que trae de los cabellos.

Sr. Rabanal. — Ya se lo explicaré particularmente.

Sr. Sarmiento. — Explíquesele a la Cámara, si atañe a la cuestión.

Sr. Rabanal. — A pesar de todo esto no quiero proseguir adelante sin rendir sincero homenaje a la pléyade de funcionarios que en abnegada tarea, en algunos casos de más de treinta años de actuación en Obras Sanitarias de la Nación, hicieron posible que a ese organismo se lo considerara un modelo entre las reparticiones del Estado en la República. Muchos de ellos han sido declarados cesantes. A ellos también rindo mi emocionado homenaje.

Sr. Vischi. — Póngase de pie.

Sr. Rabanal. — Con ANDA comienza la consolidación de la burocracia en perjuicio del pueblo y de la propia organización de Obras Sanitarias. Tengo a la vista los boletines de Obras Sanitarias que justifican esta afirmación. Tomemos por ejemplo el que se relaciona con el artículo del proyecto que habla del consejo administrativo.

En 1943, Obras Sanitarias tenía cuatro directores y un administrador general; en la actualidad tiene treinta y un directores, con sueldos mínimos de 2.500 pesos mensuales. Digamos a mayor abundamiento que: en 1943, los jefes de departamentos eran seis; ahora son sesenta y cinco, con sueldo mínimo de 1.600 pesos. Los jefes de división en 1943 eran seis; ahora son setenta y cuatro con sueldos de 1.600 pesos mensuales. ¿Han mejorado los servicios de Obras Sanitarias en relación al extraordinario aumento del personal?

En cambio, en forma inexplicable se mantiene a los obreros, con sueldos de hambre, sueldos básicos que oscilan entre 250 y 300 pesos mensuales.

Sr. Pasquini. — No es cierto.

Sr. Rabanal. — Además en el boletín que pongo a disposición de la Honorable Cámara

figura un decreto firmado por el presidente de la República y el señor ministro de Hacienda, por el cual se suprime la subvención por alto costo de la vida, a los obreros de Obras Sanitarias. Este decreto lleva el número 36.913/48.

Sr. Pasquini. — No hay obreros con esos sueldos en Obras Sanitarias.

Sr. Dellepiane. — Ya sabemos que los obreros están muy contentos con sus representantes.

Sr. Rabanal. — Le voy a leer el decreto. Tiene fecha 11 de diciembre de 1948 y está firmado por el presidente de la República y el ministro Cereijo. Boletín de Obras Sanitarias que lleva el número 523.

Sr. Visca. — Señor presidente llame a la cuestión al señor diputado.

Sr. Presidente (Dri). — Recuerdo al señor diputado por la Capital que está en discusión el proyecto de ley orgánica de Obras Sanitarias y que a ese tema debe concretarse.

Sr. Rabanal. — Prosigo, señor presidente. Rindo mi leal homenaje en este instante a aquel gran presidente de Obras Sanitarias que se llamó Marcial Candiotti, quien entre 1918 y 1924 puso en marcha el instrumento que permitió dotar de agua a toda la zona de la Capital fuera del radio antiguo y a importantes ciudades del interior de la República, como dije al comienzo de mi exposición.

En 1910, Candiotti había demostrado, ya como diputado, su gran preocupación por la solución del problema de la salubridad del país. Es por esa razón que Yrigoyen vio en él al hombre necesario para cumplir tan importante tarea. Digamos de paso que Candiotti hizo honor a esa designación; consolidó la fisonomía y el progreso de nuevas ciudades del interior del país, y realizó una obra que aun se recuerda con cariño y emoción por todos los argentinos.

En su obra titulada «Cincuentenario de las obras de la ciudad de Buenos Aires», o sea de la Capital, condensa, en un enjundioso estudio, toda la preocupación que desde la primera hora hasta la terminación de su mandato en el ejercicio de la presidencia del directorio de Obras Sanitarias de la Nación puso al servicio de la solución de los problemas sometidos a su consideración. Lo hizo siempre con un espíritu constructivo, con un espíritu de patriota, de verdadero argentino.

Yo aspiro a que Obras Sanitarias de la Nación vuelva a ser un organismo apolítico, como lo fuera en el período de su mayor esplendor. Su actual situación es el resultado de la funesta política anarquizante, que se inició el 19 de enero de 1945, con la creación de ANDA.

Al hacer esta breve reseña no he deseado promover polémica alguna con los señores diputados de la mayoría. Estamos aquí al servicio de la verdad, elaborando el futuro de Obras Sani-

tarias de la Nación, en forma orgánica y responsable, mediante una crítica leal y constructiva.

Sr. Visca. — Están al servicio de la recuperación de una política que no llega ni llegará.

Sr. Rabanal. — Comenzaré, ahora, a analizar algunas de las cuestiones vinculadas con el articulado del proyecto de ley orgánica que estamos considerando.

Bien sabemos que una ley orgánica debe ser, en todos los casos, el instrumento legal que, mediante su claro y concreto ordenamiento, asegure el normal funcionamiento del organismo que se regirá por su articulado. Además debe posibilitar la realización, sin trabas de ninguna naturaleza, de las obras que, como en el presente caso, tiendan a procurar el mayor coeficiente de higiene y salubridad a la población de todo el territorio de la República. Para ello es elemental el respeto por la división de los poderes y a la autonomía de las provincias y municipios. Es en estos principios sobre los que se asientan la base y esencia de nuestro federalismo. Ese respeto y entendimiento entre las provincias, los municipios y el poder central nunca es más necesario que en nuestros días. Sólo así podrán aquéllas plantear con amplia libertad sus más elementales necesidades, sus más legítimos anhelos, sus más caras aspiraciones. No entenderlo así sería negar todo nuestro pasado histórico.

Pero desgraciadamente, si entramos a analizar en detalle al proyecto puesto a consideración de la Honorable Cámara, comprobaremos fácilmente la tendencia centralizadora y absolutista del Poder Ejecutivo, que ya señalara con todo acierto el señor diputado Illia. Ello se desprende claramente del mensaje que acompaña al proyecto de ley orgánica enviado por el Poder Ejecutivo.

Nosotros, señor presidente, debemos confesarlo, esperábamos una gran ley orgánica. Una gran ley orgánica, de saneamiento para toda la República, que es, sin duda alguna, la que esperan desde hace mucho tiempo todos los argentinos. Una ley que concrete, en forma clara, los deberes y obligaciones del gobierno nacional, los deberes y derechos de los habitantes de la República, el estímulo que debe darse a las provincias, territorios y municipios del país, para acrecentar su constante progreso; la posibilidad de promover, en algunos sectores de la República la constitución de cooperativas entre su vecindario, tal como se ha hecho con gran éxito en Estados Unidos y otros países.

Sr. Lucini. — Donde hay cooperativas no interviene Obras Sanitarias de la Nación.

Sr. Rabanal. — De esa manera se podrá promover una gran movilización de recursos. Los municipios y las comisiones de fomento podrán así, en las más apartadas regiones del país, es-

tudiar y resolver los problemas que les son propios, y superar sus más vitales necesidades locales. Tenemos que convencernos de que todo será factible a través de la acción coordinada del poder central, de las provincias y de los municipios.

Nada se nos dice del estímulo que debe darse a los pequeños pobladores mediante la instalación de servicios reducidos, de muy bajo costo en provincias carentes de agua, como Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, etcétera.

Sr. Visca. — En Catamarca y otras provincias hay agua.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Rabanal. — Yo no sé por qué a través de esta ley orgánica se suprimen los últimos vestigios de la autonomía municipal, haciendo que no sólo éstos, sino las propias provincias sean meros instrumentos del poder central, en materia de obras sanitarias.

Sr. Lucini. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Rabanal. — Sí, señor diputado.

Sr. Lucini. — En casi todos los municipios chicos del interior es un anhelo general que Obras Sanitarias de la Nación se haga cargo de la provisión de agua, porque se ha comprobado que ningún municipio —salvo aquellos en que hay una concesión a cooperativas— puede tener provisión de agua potable en forma eficiente. Ahí está el caso de Cruz del Eje, por ejemplo, que reiteradamente ha pedido la intervención de Obras Sanitarias de la Nación hasta conseguirlo. Esta repartición no invade ninguna provincia o municipio, porque siempre, en todos los casos, hay un convenio recíproco.

Yo deseo, como argentino, que a todos los municipios del país llegue la acción de Obras Sanitarias, que es también lo que desea todo el pueblo de la República. Hay que conocer el interior del país y la situación de todos los municipios para comprender este anhelo.

Sr. Rabanal. — En realidad, el señor diputado por Córdoba no me ha interpretado bien.

Nosotros defendemos la autonomía municipal en este aspecto, entendiendo que Obras Sanitarias de la Nación debe dar participación a las autoridades comunales en los estudios, elaboración de proyectos y confección de planes para la distribución de agua y extensión de redes cloacales y de desagüe, porque los municipios tienen en la mayoría de los casos sus planes de trabajos locales. Puede suceder así que de la nivelación que haga Obras Sanitarias de la Nación, por ejemplo, dependa que se ocasionen graves perjuicios a los municipios y vecinos cuando éstos dispongan la construcción de pavimentos o desagües.

Esa es la razón por la cual nosotros sostenemos que se debe dar participación permanente

a los municipios en la realización de los planes de Obras Sanitarias.

Digo estas cosas porque la Cámara debe recordar que el gobierno de la revolución tuvo, en su hora, una manifiesta preocupación por los problemas de los municipios argentinos. Preocupación que lo llevó a realizar un congreso nacional. Yo no me explico cómo ahora, de la noche a la mañana, se ha operado ese odio a los municipios, al mantenimiento del régimen municipal, al respeto recíproco que se deben el poder central, las provincias y los municipios, en el desarrollo de actividades comunes que tanto hacen a la defensa del régimen republicano, representativo, federal.

Volviendo al análisis del proyecto, vemos cómo en el artículo 5º la influencia centralizadora resulta manifiesta y visible. En cuanto atañe a la autarquía administrativa de Obras Sanitarias de la Nación, el proyecto dice lo siguiente: «El consejo de administración estará formado e integrado por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.» Pero los señores diputados no deben olvidar que el único que llega de fuera de la casa es el administrador general, porque el resto de los componentes del consejo son funcionarios integrantes de la planta permanente de la institución. De tal manera resulta paradójal este régimen, que hace que esos funcionarios dignos y meritorios, muchos de ellos con cerca de treinta años de servicios, sean nuevos subordinados del administrador general. Y esto es doblemente grave porque esa independencia, de la que se priva por la gravitación del superior jerárquico a uno, dos, tres, cuatro, cinco o a todos los integrantes del Consejo de Administración, resulta doblemente funesta, ya que, por lo dispuesto en el artículo 6º del proyecto, se restringen definitivamente las facultades del Congreso al substraer de su consideración el estudio y la discriminación del plan de obras a realizar. Se arroga de esta manera el Poder Ejecutivo, sin razón verdadera alguna, contrariando la tradición argentina y a espaldas del Parlamento, el derecho de determinar qué obras deben llevarse a cabo y la oportunidad de realizarlas. Por ello, entiendo que nuestra discrepancia es lógica y atinada al señalar que la composición del Consejo de Administración es prácticamente una farsa. Y es una farsa porque, como dije hace un instante, los directores que pertenecen a la planta permanente de la institución son todos empleados de carrera administrativa y tienen que estar, lo quieran o no, subordinados a la voluntad del administrador general. Puedo citar aquí el caso de un grupo de funcionarios responsables de Obras Sanitarias de la Nación, que tuvieron la valentía en su hora de exponer con altura, con patriotismo, con independencia, su opinión. Recibieron como respuesta la cesantía a ese acto, que en el fondo tendía a defender los intereses

permanentes de la institución, señalando que era lo que más convenía en materia de obras, o puntualizando también la inoportunidad de llevar a cabo otras iniciativas.

Es lógico que frente a esta composición anódina del consejo de administración se afirme que no puede existir auténtica autoridad e independencia de criterio entre el administrador general y los miembros del mismo, pertenecientes a la planta permanente de la institución. Estos últimos carecerán siempre, y es humano reconocerlo, de la autonomía necesaria para actuar en la dilucidación de los más importantes problemas que tenga a su consideración Obras Sanitarias de la Nación.

El régimen establecido en el proyecto resulta de esta manera paradójal e inoperante. A nuestro juicio, lo que corresponde en esta materia es darle a ese consejo de administración, o al directorio, o como quiera llamársele, la independencia que merece, estableciendo un principio federalista. Si es necesario, que el propio Poder Ejecutivo designe a todos los miembros del consejo de administración con acuerdo del Senado, pero que en ningún caso se incorpore a ese consejo administrativo a hombres que ya en el ocaso de su vida, cuando próximos a una justa jubilación, que habrá de coronar todo el esfuerzo de su vida retirándose al descanso a que tienen derecho, se les obligue a afrontar por su experiencia, su capacidad y dignidad, la responsabilidad de integrar un directorio en el que muchas veces, sin lugar a dudas, no podrán compartir las preocupaciones y el pensamiento del administrador general. En cambio, si se aceptara la modificación del régimen que señala el proyecto de ley orgánica, al establecer cómo se integrará el consejo de administración, todos estos directores de la planta del personal permanente de la institución podrían formar el gran consejo consultivo de Obras Sanitarias, cuya autoridad técnica y administrativa sería indiscutible y, lógicamente, en cada caso su opinión técnica sería valiosa y estaría a cubierto de cualquier maniobra de baja política.

Es evidente que esta ley orgánica, a la que nuestro sector le asigna extraordinaria importancia para la materialización de nuevas y grandes obras reclamadas urgentemente por los habitantes del país, debe ser una ley que permita subsanar estos y otros inconvenientes que señalará sin duda otros compañeros de mi sector, que intervendrán en el debate. Esta ley debe ser un instrumento legal adecuado que facilite la realización de todas las obras que espera el país. Con ello daremos fin al esclarecimiento de muchos problemas que venimos estudiando desde hace muchos años, con pasión de argentinos, los hombres de la Unión Cívica Radical.

Y a propósito de estos problemas de salubridad, quiero señalar que estamos en evidente

retardo en aspectos importantísimos que se refieren no sólo al interior de la República, sino también a la Capital Federal y al aglomerado bonaerense, vinculados todos ellos al estado sanitario en que desarrollan sus actividades y su vida millones de habitantes. No sabemos si esos problemas han sido dejados de lado u olvidados por Obras Sanitarias de la Nación; pero tenemos la obligación de señalarlos, sobre todo en estos momentos, porque su solución se reflejará de inmediato con una mayor eficiencia en el suministro de agua, en la construcción de desagües y en la ampliación de los servicios cloacales. No quiero alarmar a la Honorable Cámara ni a la población, pero todos sabemos que el estado sanitario de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios limítrofes no es nada satisfactorio. Sabemos que aquí, en la Capital Federal, no solamente es Obras Sanitarias la responsable de esa situación. Todo el mundo comenta a diario que la despreocupación de los que gobiernan el municipio es evidente, y algunos médicos, con responsabilidad científica, han señalado que parte de la epidemia de escarlatina y viruela que sufre la ciudad es consecuencia del estado de calamitosa suciedad en que en ella se vive. Se une a ello el pésimo sistema de recolección de basuras. Las aguas de lluvia arrastran consigo todas las materias orgánicas en completa descomposición que encuentra a su paso y las reciben lógicamente los desagües y los cursos de agua que son utilizados en determinadas épocas del año como zonas balnearias por una enorme cantidad de habitantes de la Capital y zonas suburbanas.

No es un secreto para nadie que el servicio de aguas corrientes adolece de fallas fundamentales. Aun hay barrios dentro de la Capital Federal que carecen de ella. Tenemos zonas, como el Sur de Ramos Mejía, San Justo, Morón, etcétera, que tampoco disponen de agua corriente. Nosotros deseamos que esta ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación le dé la capacidad funcional que necesita ese organismo en todos sus aspectos, para que puedan ser superadas así estas dificultades. Yo aspiro a que de este debate surjan soluciones favorables para el desarrollo de todas las obras que estamos señalando y que entendemos debe realizar en forma urgentísima el gobierno de la Nación.

Aquí, en la Capital, vemos con complacencia la iniciación de las obras de la planta de suministro de agua que se llamará Depósito Constitución, ubicado en la manzana existente en Entre Ríos, Constitución, Pozos y Pavón; aunque discrepamos con el procedimiento que se ha utilizado para adueñarse del terreno, que pertenecía al Consejo Nacional de Educación. De cualquier manera es una obra que viene a cumplir una gran necesidad dentro de nuestro medio, y asegurará la posibilidad de que en las épocas de verano muchos sectores de la ciu-

dad puedan disponer agua en abundancia, cuyo consumo en los días de sofocante calor adquiere proporciones astronómicas.

Nosotros queremos que el decreto 28.678, que establece la inversión de 600.000.000 de pesos por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, se materialice. El aglomerado bonaerense está esperando todas estas obras que le aseguren sus servicios de provisión de agua, conductos que reciban los líquidos cloacales y desagües pluviales adecuados.

Nosotros queremos también, señor presidente, que en los partidos de Avellaneda, con 300.000 habitantes; Cuatro de Junio, con 280.000; Quilmes, con 150.000; Lomas de Zamora, con 140.000; San Martín, con 270.000; y otros pueblos no menos importantes, como Matanza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Tigre, Las Conchas y toda la zona del Delta se concrete un gran plan de saneamiento. Plan que contemple el suministro de aguas corrientes en abundancia, que asegure magníficos desagües, que termine con los pozos negros, mediante la construcción de eficientes instalaciones cloacales.

Será una obra de un gran contenido social, que el radicalismo auspicia y apoyará decididamente.

Sr. Marotta. — ¿Qué tiene que ver lo que está diciéndolo el señor diputado con el proyecto que estamos considerando? Su exposición está al margen del tema en debate.

Sr. Colom. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Rabanal. — Ya voy a terminar.

Sr. Colom. — Es para una cuestión que es necesario acotar precisamente en este momento. Es de carácter ilustrativo; y así, de paso, interrumpimos la monotonía en que está sumida la Cámara.

Sr. Presidente (Dri). — El señor diputado por la Capital no desea ser interrumpido.

Sr. Rabanal. — Yo desearía que ese decreto de economías, que establece la paralización de las más importantes obras que estoy enunciando y algunas otras que señalaré, no se lleve a la práctica. Hay obras suntuarias que pueden ser postergadas; en cambio, éstas son de urgente e inmediata realización, porque asegurarán en forma definitiva la higiene sanitaria de la población del país.

Nosotros quisiéramos que esta ley orgánica también interpretara una vieja aspiración de los vecinos de los barrios bajos de la Capital; que llamara a la realidad a las autoridades nacionales y municipales, por intermedio del organismo que tiene a su cargo la realización de las obras de saneamiento, otorgándole los niveles definitivos.

Un sector importante de la Capital Federal viene siendo olvidado injustamente desde hace más de 35 años. Me refiero al bañado de Flores. Este gobierno podría efectuar allí una gran

obra de urbanización y saneamiento, y dar cabida a millares y millares de familias, mediante la construcción de un importante núcleo de modernas viviendas.

Villa Soldati y la zona del bañado de Flores viven hoy como hace 30 años, sin solución de continuidad, su grave y permanente problema de la falta de niveles. La comisión mixta — de Obras Sanitarias y de la Municipalidad —, no se sabe por qué razón, no lleva a cabo ninguna tarea que tienda a solucionar definitivamente el problema. De este estado de cosas yo hago responsable al actual gobierno de la Nación.

Sr. Astorgano. — ¿Qué tiene que ver el bañado de Flores con el proyecto que consideramos?

Sr. Rabanal. — Tiene mucho que ver, señor diputado: el bañado de Flores es una rémora dentro de la ciudad y constituye otro de los focos de infección que registra la crónica periodística todos los días. Seiscientas toneladas de basuras, que no son quemadas, porque no pueden ser incineradas por falta de capacidad de los hornos municipales de la Capital, son descargadas diariamente en ese sector de la ciudad, brindando un espectáculo que es una afrenta que no merecen los sacrificados vecinos de Flores Sur, Villa Soldati y Pompeya.

He hecho mención del bañado de Flores porque su problema tiene vinculación con este proyecto.

Algún día comentaremos otros aspectos que hacen al fondo de la cuestión, para determinar por qué no se dan niveles definitivos a algunos barrios de la ciudad. Con niveles definitivos en la zona Sur de la Capital, se habría dado un gran paso en la contribución a la solución del pavoroso problema de la vivienda. Ello hubiera facilitado, sin duda alguna, grandes ampliaciones de modestos hogares levantados hace más de treinta y treinta y cinco años, que por esta causa no pueden levantar una modesta pieza. Parecería que toda esa gente no perteneciera a la parte civilizada de la Capital Federal. Lo mismo acontece con los barrios levantados en Cuatro de Junio, uno llamado Villa Jardín y otro Villa Cartón, donde se vive en la más espantosa promiscuidad, sin suministro de agua corriente, sin instalaciones de redes cloacales de ninguna naturaleza. Yo he visto bañarse a los chicos en charcos de aguas inmundas, infectas.

Por estas razones, creo que los señores diputados estarán contestes conmigo en la urgente necesidad de realizar obras de salubridad en esos sectores de la Capital Federal y en la zona del Gran Buenos Aires.

Y en el orden de los conductores cloacales...

Sr. Presidente (Dri). — Señor diputado por la Capital: está en discusión el proyecto de ley orgánica de Obras Sanitarias.

Sr. Rabanal. — ...esperamos que los hombres que manejen esta ley orgánica terminen con ese

proceso de indiferencia y de inactividad, cuyos resultados son, desde todo punto de vista, lamentables.

Con responsabilidad podría señalar algunas de las cosas que hacen a la existencia misma de esa institución en lo relacionado con los aspectos esenciales de su función específica: la salubridad general.

Tenemos el gran problema de la tercera cloaca máxima de la Capital Federal, habilitada parcialmente, que ha impedido que nuevos sectores...

Sr. Pasquini. — Señor presidente: hago la cuestión reglamentaria de que el señor diputado no se ajusta al tema en debate.

Sr. Presidente (Dri). — Señor diputado por la Capital: el señor diputado por Salta plantea la cuestión reglamentaria de que no se ajusta al asunto en debate.

Sr. Rabanal. — Voy a la cuestión.

Sr. Colom. — Quería evitarle al señor diputado que colocara el dedo en el ventilador; y sin embargo lo ha puesto.

Sr. Rabanal. — Estas cosas que estoy diciendo se refieren a obras previstas en la ley orgánica cuyo proyecto estamos comentando. Acaso, ¿no es patriótico señalar estas deficiencias a fin de que se termine con ese estado de alarma que motivan los grandes focos de infección que se registran a diario y que hace posible que se perciba en forma más acentuada el estado de epidemia que viene soportando el Gran Buenos Aires?

Sr. Cané. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Rabanal. — Sí, señor diputado.

Sr. Colom. — A mí no me concedió una interrupción.

Sr. Presidente (Dri). — Sírvase no interrumpir el señor diputado por la Capital.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Colom. — Señalo la falta de deferencia del señor diputado por la Capital.

Sr. Cané. — Ruego al señor diputado Colom que no se ponga celoso. (Risas.)

Sr. Colom. — Me complace que el señor diputado por Buenos Aires haya obtenido la interrupción solicitada.

Sr. Cané. — Escuché en toda su larguísima exposición al señor diputado por la Capital con una paciencia que el mismo señor diputado tendrá que reconocer, que ha requerido verdaderos esfuerzos debido al tipo de exposición que ha hecho. De toda ella me ha interesado una aseveración, que la hemos tolerado una vez, pero cuya repetición me obliga a solicitar esta interrupción.

El señor diputado acaba de afirmar que se diseminan los focos de epidemia existentes en la Capital Federal y sus alrededores. Quisiera que me aclare de qué epidemia se trata, porque

no conozco que Buenos Aires y sus alrededores se encuentren en estado de epidemia.

Sr. Rabanal. — Me refiero a la viruela y a la escarlatina, señor diputado.

Sr. Cané. — Recurra a sus colegas médicos, así podrá salir del apuro.

Es posible que pueda contestar. Yo ignoro si en este momento la ciudad de Buenos Aires sufre alguna epidemia.

Sr. Mercader. — Y eso que el señor diputado no vive en Lincoln, sino en Buenos Aires. Yo le aseguro que Buenos Aires vive en un estado de epidemia. Lo afirmo con responsabilidad técnica, como médico.

Sr. Colom. — El señor diputado se debe referir a los mítines de la oposición que constituyen una verdadera epidemia...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Sr. Cané. — El señor diputado por Buenos Aires no puede afirmar con su reconocida autoridad médica que el estado de epidemia de la ciudad se debe a deficiencias en los servicios sanitarios. Es inexacto lo que dice el señor diputado.

Sr. Mercader. — Con la autorización de la Presidencia, me voy a permitir una interrupción.

Mi afirmación está limitada a absolver posiciones respecto a una pregunta precisa y concreta que salió de boca del señor diputado por Buenos Aires. Dijo que él ignoraba que hubiera en Buenos Aires un estado de epidemia...

Sr. Cané. — No, señor diputado...

Sr. Mercader. — Yo no me he referido a las causas de la epidemia, sino que he afirmado, respondiendo a su pregunta, que en Buenos Aires existe en este momento un estado epidémico por reaparición de la viruela, y de un importante brote epidémico de eruptivas. Hago además esta afirmación: que es una verdadera vergüenza que en un país civilizado, con nuestra capacidad técnica y médica, en el año de gracia «peronista» de 1949, la Capital de la República sufre una epidemia de viruela.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Mercader. — Declaro también que es de constancia objetiva, para todos los médicos que hacen su práctica cotidiana, que la Capital del país sufre una epidemia de enfermedades eruptivas, y que en especial la escarlatina azota en este momento a la ciudad de Buenos Aires.

Sr. Lucini. — No hay viruela, sino varicela.

Sr. Mercader. — Eso no merece respuesta. Pero afirmo que la lucubración del señor ministro Carrillo para diferenciar la viruela del alastrín, con vista a sus consecuencias pronósticas, carece de responsabilidad técnica desde el punto de vista epidemiológico y se limita a una manifestación de índole política tendiente a lograr efectos psicológicos en la población. Declaro también que el señor diputado Rabanal ha estado en la verdad al afirmar que Buenos Aires padece epidemias.

Declaro igualmente que el señor diputado Colom podrá en esta materia como en otras cambiar su caballo en medio del río, pero no podrá negar que la campaña de su diario respecto a las vacaciones de invierno la hizo sobre la base del deficiente estado sanitario de la ciudad de Buenos Aires.

Sr. Colom. — Si me permite el señor presidente...

Al propugnar «La Epoca» por las vacaciones de invierno, lo hizo en base a tres causales: la necesidad de descanso en los niños, el frío de la estación, que fué muy crudo en los días de agosto y los casos aislados de escarlatina ocurridos en algunos establecimientos educacionales. Nunca afirmó «La Epoca» la existencia de plagas o de pestes en esta Capital, como acaba de sostenerlo el señor diputado por Buenos Aires.

Para terminar esta brevísima aclaración, sin que ello signifique «cambiar de caballo en medio del río», debo decirle que si alguna peste hay en la ciudad de Buenos Aires es la viruela boba que prolifera en los mítines radicales de la Capital Federal. (Risas.)

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Cámpora). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanal. — Antes de entrar nuevamente en materia, quiero referirme a algunas manifestaciones del señor diputado Cané, para expresarle que no he hablado de la contaminación de las aguas que se suministra a Buenos Aires, sino del estado de suciedad de la ciudad Capital. Ella constituye un magnífico vehículo para el desarrollo de focos epidémicos de graves consecuencias, para hombres, mujeres y niños.

Esta no es una afirmación improvisada. En el número 127 de la Revista de Obras Sanitarias de la Nación, de julio de 1948, el doctor Rogelio A. Trelles, director principal de laboratorios de Obras Sanitarias de la Nación, en un artículo sobre el problema de la contaminación de los cursos de agua en el país, hace afirmaciones concretas al respecto.

Para no entorpecer la labor de la Honorable Cámara pido autorización a la misma para insertar, a esta altura de mi exposición, las manifestaciones del doctor Trelles, que son muy ilustrativas.

Sr. Presidente (Cámpora).— Si hay asentimiento, se hará la inserción en la forma solicitada.

—Asentimiento.

La contaminación de los cursos naturales de agua, en especial de los ríos o arroyos de escaso caudal, por la descarga de aguas servidas o por los líquidos residuales provenientes de industrias, es un problema higiénico que en nuestro país adquiere día a día mayor importancia.

Han sido siempre el gran desarrollo industrial (cuando las fábricas se radican sin una planificación previa) y el crecimiento rápido de las poblaciones, los responsables de que los ríos o arroyos que circundan a las poblaciones se conviertan muchas veces en verdaderos focos insalubres. El problema presenta aún mayor importancia cuando una población debe utilizar para su abastecimiento de agua, a un río que aguas arriba o en sus inmediaciones, recibe la descarga de líquidos servidos o residuales: Se plantea ahí, no sólo un problema higiénico, sino también económico, dado que, para purificar esa agua, deben utilizarse mayores cantidades de substancias químicas y disponerse de un sistema muchísimo más complicado de instalaciones, que en el caso de tratarse de una fuente de provisión menos impura.

La historia sanitaria de las grandes ciudades, muestra como casi todas ellas han tenido que pagar tributo a la imprevisión de no haber tomado a tiempo medidas para impedir la contaminación creciente de los ríos, y han sido siempre las descargas industriales (no fiscalizadas o excesivas) las causantes de la disminución o aun anulación del poder de autodepuración de los cursos de agua que las reciben.

Olvidamos con frecuencia que es mucho más fácil y económico evitar que las aguas de un río se contaminen, que el volverlas a sus primitivas condiciones, una vez que han sido impurificadas por la industria, creando con ello una serie de situaciones que luego resulta difícil modificar al hacer un plan de saneamiento.

Al efectuar la descarga de un líquido residual o de aguas servidas a un río, los inconvenientes originados pueden ser de índole diversa, a saber:

- a) *Estética*: Por modificación de las condiciones del ambiente que lo hacen ofensivo para el hombre;
- b) *Higiénica*: Cuando las descargas contaminan un curso de agua haciéndolo inapropiado como fuente de provisión, siendo factible también que esas aguas se infiltren contaminando a las subterráneas;
- c) *Industrial*: Cuando una descarga residual modifica tanto la composición química del agua de un curso, que llega a hacerla inapropiada para ciertas industrias;
- d) *Agrícola*: Por dañar los terrenos o los forrajes, o hacer inapropiada el agua para bebida de los animales, tal como sucede con muchas aguas residuales que contienen productos tóxicos;

e) *Piscícola*: La conservación y reproducción de los peces en los ríos, arroyos, lagos, etcétera, exige que el agua contenga siempre una cierta cantidad de oxígeno disuelto. Una descarga excesiva de un líquido residual puede eliminarlo, haciendo desaparecer una fuente de economía (pesca), aparte de restringir el esparcimiento de la población.

Es fácil deducir de lo expuesto, la importancia que realmente tiene desde el punto de vista higiénico y aun económico, el que un país procure conservar sus ríos, arroyos, lagos, etcétera, en el mejor estado posible, y que ellos reciban, únicamente y sólo en casos excepcionales, aquellas descargas cloacales o residuales que su poder de autodepuración sea capaz de aceptar; en caso contrario se impurifican, y las que eran corrientes de agua normales, con algas (*plankton*) y peces, es decir, llenas de vida, se transforman rápidamente en aguas sucias, desagradables, malolientes y peligrosas.

La importancia real de esta cuestión fué muy bien comprendida en los países del viejo continente, especialmente en Inglaterra, que desde un principio organizó su legislación sanitaria en forma tal, que abarcara todo su territorio.

Creemos interesante resumir algunos antecedentes, sobre todo, aquellos relacionados con el tema que consideramos.

En el año 1831, a causa de los peligros del cólera, epidemia que periódicamente diezmaba a los pueblos, se instituyó un Consejo Provisional de Sanidad, creándose en el año 1843, la «Royal Commission», con un fin principal de: «Investigar el estado higiénico de las grandes poblaciones y distritos populosos.» Otra gran epidemia de cólera (1), la del año 1847, que ocasionó 50 000 defunciones en el país, hizo que en 1848 se dictara una ley que hacía obligatoria la conexión domiciliaria con el alcantarillado. Se formó además, la Comisión Sanitaria Metropolitana, que integraba el célebre higienista Edwin Chadwick; fué en la época en que Disraeli, uno de los hombres más prominentes de la historia del Imperio y a quien se deben las leyes protectoras de la salud y de la higiene pública («Government Board» y «Public Health Act»), era primer ministro de Inglaterra.

Recordamos las palabras del primer ministro: «La salud es el fundamento en que reposa la felicidad del pueblo y el poder del Estado...» «El cuidado de la salud pública, es el primer deber de todo hombre de Estado...»

Fué también en Inglaterra, donde William Farr estableció las primeras nociones sobre el valor de la vida humana y lo que representaba para el Estado desde el punto de vista económico, la pérdida prematura de muchas vidas, en las cuales se había invertido grandes sumas de dinero en alimentación, vestido, educación, etcétera.

Aquella obligación de conectar la cloaca domiciliaria con el alcantarillado, es decir, la supresión de los pozos sépticos, juntamente con el aumento creciente del consumo de agua con fines domésticos y de servicios públicos, trajo como consecuencia (por falta de grandes obras de alcantarillado y depuración),

(1) La verdadera etiología del cólera fué demostrada recién en el año 1882 por el doctor Roberto Koch, aun cuando ya en el año 1849 se mencionaba el factor hídrico como medio de transmisión de la enfermedad.

que las aguas servidas fueran volcadas sin fiscalización en los ríos, transformándose muchos de ellos en verdaderas cloacas. Por otra parte, como gran número de ciudades se veía luego obligado a utilizar para su provisión esas aguas intensamente contaminadas, fué necesario nombrar una comisión para que considerara la grave situación planteada, lo que se efectuó, en el año 1857.

Posteriormente aparecen las «River Pollution Prevention Acts» dictadas en 1876, modificadas posteriormente en los años 1893 y 1895, en las cuales se obliga a depurar las aguas residuales que fueran perjudiciales para los ríos, lagos, arroyos, etcétera. Se señalan en ellas las posibles causas principales de contaminación —«Pollution»— de las aguas.

En 1898, se constituyó la «Royal Commission on Sewage Disposal», realizándose una encuesta muy completa sobre el estado sanitario de los ríos y lagos. Dicha comisión publicó en los años 1900 al 1915 una serie de trabajos interesantísimos, que ha servido de base para que se efectuaran posteriormente estudios semejantes en otros países.

Más tarde aparecen las especificaciones que hizo «The British Royal Committee», relativas a los líquidos residuales del lavado del carbón, industrias del hierro, etcétera, con el objeto de evitar que aquellas descargas continuaran contaminando los cursos de agua.

Tal es, en un brevísimo resumen, la obra realizada en Inglaterra. Recordaremos de paso antecedentes leyes y organizaciones sanitarias de otros países. En Alemania: en los años 1843 y 1846, el Estado prusiano tenía ya la llamada «Ley de Pesca»; y la ley de «Policía Rural y Forestal» del 1º de abril de 1880.

En 1885 se inician en Alemania los estudios sobre «Autodepuración de las aguas». Es curiosa la anotación que hace el doctor Pedro N. Arata, del célebre canciller Bismarck; refiere que éste se indignó un día por los estudios sobre el tema que tanto preocupaba a los higienistas alemanes: «Más valía que se ocuparan de lo que podía perjudicar a los hombres y no de lo que se encuentra en los ríos».

En 1901 se funda en Berlín el «Instituto para el Examen y Estudio de los Métodos de Purificación de las Aguas Servidas», y fué en el Congreso de Higiene y Demografía celebrado en aquella misma ciudad en el año 1907, donde se recomendó «que los gobiernos tuvieran una organización técnica, que vigilara los cursos de agua, con el objeto de evitar la contaminación creciente de los mismos y vigilara también la depuración de las aguas cloacales y residuales».

Se formuló también un voto en dicho congreso para que «se constituyera una entidad internacional, para establecer métodos uniformes de fiscalización, así como también, para recoger toda la experiencia técnica que se obtuviese sobre purificación de los cursos de agua».

En lo referente a Francia, aparece una serie de leyes sobre «Selvas y aguas», desde el año 1669 al 1875. En 1892, se dicta la ley sobre «Protección de la salud pública», la que se modifica el 25 de febrero de 1902. Al Departamento de Agricultura, por ley del 8 de abril de 1858, se le confiere autoridad sobre el «Régimen de las aguas».

Recién en el año 1900, el sabio profesor doctor Calmette inicia en el Instituto Pasteur, en Lille, los estudios sobre purificación de los líquidos cloacales, en la estación experimental de la Magdalena, cuyos

trabajos se publican en una serie de volúmenes en los años 1906 a 1914.

Pasando a Italia, se puede citar la ley del 20 de diciembre de 1888, que prohibía la pesca y caza en los lagos, ríos, etcétera, en los que se descargaban aguas servidas; y la de «Protección de la higiene y la salud pública», del año 1888, dictada a instancias del célebre higienista Pagliani. Debe mencionarse especialmente la obra realizada por el Instituto de Higiene de la Universidad de Roma, con su escuela de «Perfeccionamiento de la Higiene».

Existen muchos otros antecedentes europeos, en especial, los de Holanda, donde se pone de manifiesto la importancia que se le ha dado, desde hace muchos años, al problema de la conservación de las aguas de los ríos, lagos, etcétera, en su primitivo estado higiénico.

En los Estados Unidos de América es amplia la campaña emprendida últimamente para encarar el problema de la contaminación. Esta campaña se inicia en una forma efectiva en el año 1936, cuando el Congreso sanciona las leyes y se asignan además los fondos para estudiar y planificar en una forma integral, el problema que creaba la contaminación creciente de algunas cuencas. El extraordinario desarrollo industrial fué, a no dudarlo la causa principal del fenómeno.

En ese país, por existir una mayor conciencia sanitaria, a la que no debe ser ajena la especialización que se ha hecho de estos estudios y la misma industria, que ha sido respetuosa de las leyes y reglamentaciones dictadas, hizo que se encarara muy bien esta cuestión higiénica.

Antecedentes en nuestro país

Teniendo en cuenta los antecedentes consignados, vamos a pasar revista a lo que se ha hecho o tentado hacer en nuestro país, respecto a la contaminación y saneamiento de los ríos. Se enumerarán las iniciativas, leyes y trabajos técnicos y científicos, empezando por aquellas relacionadas con:

- 1º El destino final que se daría a los líquidos cloacales de la ciudad de Buenos Aires;
- 2º El problema de saneamiento del Riachuelo de Barracas.

Referente al primer problema, diremos que su estudio comenzó en el año 1870, cuando el ingeniero Juan F. de la Trobe Bateman (1), ex presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, fué consultado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, acerca de la construcción de un puerto en la Capital, el aumento de la provisión de agua a la ciudad y sobre la instalación de una red de colectoras cloacales, con el objeto de eliminar los pozos negros.

En un principio, se proyectó adoptar para la eliminación de los líquidos cloacales un sistema similar al que entonces se empleaba en Londres para su descarga al Támesis, es decir, a macenar las aguas cloacales durante el flujo, y una vez pasada la pleamar, abrir las compuertas y dejar volcar las aguas al río.

(1) R. H. Parsons Clere: «Las Obras de Salubridad de la Ciudad de Buenos Aires» (1896), un folleto; Londres. «Minutes of Proceedings of the Institution on Civil Engineers», CXXIV (1896), 2.

Antes de resolver este punto, se realizó una serie de prolijas experiencias, por medio de boyas echadas al agua en el sitio en que se pensaba hacer la descarga, con el fin de establecer las leyes que regulaban la dirección y rapidez de las corrientes.

Estas boyas fueron lanzadas en distintos períodos de marea, pues se trataba también de fijar hasta qué distancia aguas arriba del punto de descarga podrían llegar los residuos cloacales, con las condiciones más favorables de marea y viento.

Las posiciones de las boyas fueron anotadas periódicamente, tanto de día como de noche, por medio de rumbos cruzados, consignándose los respectivos trayectos en planos. Estos experimentos demostraron que las corrientes del río eran más afectadas por los vientos que por las mareas, y que, si las aguas cloacales se volcaban al mismo, cada doce horas como en Londres, cuando la marea comienza a bajar, aquellas aguas podían ser arrastradas en dirección inversa a la esperada.

Se resolvió, por lo tanto, que la descarga sería continua y que ella debería efectuarse en un punto lo más alejado posible, situado aguas abajo del que se había pensado en un principio, de suerte que, con ninguna combinación posible de marea y viento, pudiesen llegar las aguas cloacales a contaminar la toma de provisión de agua de la ciudad de Buenos Aires.

Se ubicó la desembocadura de la cloaca al Sur del pueblo de Quilmes, a una distancia de 19 kilómetros, aproximadamente, de la ciudad.

El proyecto del ingeniero Bateman pasó a consideración de una comisión especial integrada por V. E. Casares, Rufino de Elizalde, Manuel Porcel de Peralta y Federico Sassounberger, la que se expidió el 22 de abril de 1872 en la siguiente forma:

- 1º Que es un hecho incuestionable la contaminación de los ríos por el drenaje de las ciudades;
- 2º Que no existen agentes químicos ni mecánicos capaces de depurar permanentemente las aguas impuras de los desagües;
- 3º Que la irrigación de los terrenos preparados convenientemente y plantados, es el único y exclusivo procedimiento de depuración.

Y resuelve:

- a) El producto de las cloacas se destinará a la irrigación de las praderas permanentes;
- b) Las tierras dedicadas a la irrigación, formarán parte de las obras de salubricación.

Fueron consultados otros técnicos y todos ellos parecían concordar, en que las aguas cloacales no deberían descargarse en el río.

Fué el ingeniero Valentín Balbín (1) uno de los profesionales que más bregó por la descarga de los líquidos cloacales al río, quien decía: «a nuestro juicio, para afirmar que el sistema es malo, es necesario probar científicamente que las materias que se arrojan al río en determinado punto de la ribera, por ejemplo, en la localidad de Quilmes, serán traídas por

la acción de la corriente a las cercanías de la ciudad».

Consideró también Balbín los argumentos del ingeniero Carlos Pellegrini, quien en una carta dirigida al ingeniero Bateman (1871), criticaba la idea de la descarga cloacal al río, lo mismo que los del agrimensor don Pedro Pico, que sostenía que las ballenas y ballenatos que morían en las aguas del Plata, aparecían con frecuencia en las costas de San Fernando. Era necesario, refutaba, «saber realmente dónde habían muerto esas ballenas».

Al comentar los experimentos realizados por el ingeniero Taylor, quien utilizaba botellas que arrojaba en la costa de Quilmes, y que luego aparecían en las orillas del río a la altura de la ciudad, criticaba el experimento, afirmando que las mismas eran arrastradas por la corriente costanera o lateral que tiene todo río.

Balbín aconseja, finalmente —de acuerdo con la opinión de uno de los hombres más destacados de aquella época sobre problemas de saneamiento, el químico inglés doctor Frankland, presidente de la Comisión de Higiene de Londres—, emplear el sistema de purificación por irrigación, y no siendo posible adoptarlo en forma continua, arrojar simplemente las aguas servidas al río de la Plata.

Por último se resolvió la construcción del sistema cloacal, en base a las ideas del ingeniero Bateman, con la descarga directa de los líquidos al río de la Plata, a la altura de Berazategui (1).

Antes de terminar este primer punto creemos interesante mencionar las disposiciones que existían en aquella época relativas a la protección sanitaria del río de la Plata (2).

- 1º Acuerdo en virtud del cual se prohibió el lavado de ropas en las orillas del río, en la ribera comprendida entre los lugares denominados Pobre Diablo y Palermo Chico (25 de julio de 1872).
- 2º Ordenanza prohibiendo arrojar aguas servidas al río de la Plata (16 de abril de 1880).
- 3º Ordenanza relativa a la prohibición de arrojar residuos o sólidos al Riachuelo (3 de abril de 1882).

2º El problema del saneamiento del Riachuelo de Barracas

Otro problema que ha preocupado mucho, y desde largo tiempo atrás, es el que se refiere al saneamiento del Riachuelo de Barracas.

Nace con el nombre de río Matanza, en una serie de lagunas situadas al Oeste del partido del mismo nombre, a las que les sirve de desagüe en ciertas épocas del año; en su recorrido recibe como afluentes importantes: la Cañada de los Pozos y a los arroyos Morales y Cañuelas. Es al llegar al puente de Barracas donde cambia su nombre por el de Riachuelo de Barracas o, simplemente, Riachuelo.

(1) Nota del ingeniero Bateman desde Londres (8 de julio de 1874). Acta e informe de la comisión especial: químico J. J. Kyle, ingeniero A. Ringuet, ingeniero R. Lindwark, doctor Cleto Aguirre, doctor M. A. Montes de Oca, ingeniero A. F. Buttner y doctor Ricardo Gutiérrez; consulta al doctor Guillermo Rawson.

(2) Coni E. - T. (1891), 62.

(1) «La salubricación de la Ciudad de Buenos Aires». Tesis Nº 1 (1872), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Buenos Aires.

Y así como en el presente se han establecido en sus márgenes numerosas industrias, también hace más de cien años fué asiento de nuestra primera y gran industria: la de los saladeros.

Estos, como puede imaginarse, contaminaban intensamente al Riachuelo, ya que se arrojaban a él todos los desechos de la carne y la sangre, que en aquel tiempo no se industrializaba. Además de las salmueras, que se escurrían de las «tinajas de salazón», y las llamadas «aguas de cola», que se condensaban en las tinajas de desgrasamiento. Estos eran los residuos principales que originaban la contaminación. Si se suma a ello, que constantemente había una gran cantidad de barcos anclados en el Riachuelo, cuyas tripulaciones arrojaban a sus aguas toda clase de residuos, es fácil imaginar el estado deficiente y antihigiénico de este río, y en especial, en la época de los grandes calores, en la que entraba en putrefacción toda esa masa orgánica.

Fueron muchas las protestas que originó este estado antihigiénico entre los vecinos de Buenos Aires; en especial cuando se registraba algún caso de cólera o de fiebre amarilla, arreciaban las protestas contra los saladeros que se consideraban como posibles causantes de ellas. Más de una vez, el capitán del puerto se dirige a las autoridades, denunciando que «había observado un color verdoso en las aguas del río y que suponía que era debido a inmundicias que arrojaban los saladeros de Barracas al Riachuelo, y avisaba para que se corte este mal que vendría a perjudicar la salud de la población».

Otras veces, era el mismo jefe de Policía el que debía hacer las averiguaciones sobre el estado higiénico del Riachuelo, por especial encargo de las autoridades sanitarias.

Es interesante observar que, cuando se criticaban las condiciones insalubres del Riachuelo, había también quien trataba de justificarlas, arguyendo que en la zona de los saladeros, se habían producido siempre menos casos de enfermos de fiebre amarilla o cólera que en otros barrios de la ciudad. Para el caso de la fiebre amarilla, tal vez fuera valedero el argumento, si se considera que el mosquito transmisor de la enfermedad no se desarrolla en las aguas muy impuras, y menos en las exentas de oxígeno disuelto, como era la del Riachuelo.

Los doctores Puíggari, Amoedo y Blancas (1), demostraban en el año 1854 que de las aguas del Riachuelo se desprendía hidrógeno sulfurado, hecho que comprobaba la ausencia de oxígeno disuelto. Ese hidrógeno sulfurado deterioraba la pintura de los buques surtos en el río, lo que también motivó reiteradas protestas (2).

En el año 1868, las autoridades parecían estar resueltas a encarar este problema higiénico. Fueron nombradas dos comisiones técnicas; una, por parte de las autoridades, y otra, por la de los saladeros. Presidía la primera, el doctor M. A. Montes de Oca (3) y estaba integrada por Mariano Moreno, Charles Murray, Emilio Rosetti, D. B. Speluzzi y Juan Ramorino. La de los saladeros, por Mariano Bandriz, Julio Pantouth, A. Cambaceres y Constant Santa María.

Se propusieron diversas soluciones: desde la construcción de una especie de represa (Teja y Herrera), cuyas aguas serían elevadas por medio de bombas y aprovechadas luego para riego, idea que fué también considerada en un proyecto de Sarto y Fernández (1), hasta la propuesta por el ingeniero Juan Coghlán, quien proyectaba un conducto para conducir los residuos líquidos de los saladeros, los cuales, decía: «mezclados con tres partes de agua y serían impedidos por una máquina de presión a vapor y llevados por la fuerza repulsiva de ésta hasta un depósito construido entre Barracas y Quilmes (a tres millas de la ciudad). Estos líquidos podían ser destinados al riego o volcados directamente al río de la Plata».

Por su parte, Catelín y Puíggari propiciaron el aprovechamiento de algunos de los subproductos que se arrojaban al río, disminuyendo así su contaminación, por ejemplo: la sangre, fabricando, con ellos, abonos, carbón animal, etcétera; el mismo doctor Puíggari construyó una planta experimental para demostrarlo.

El proyecto del conducto del ingeniero Juan Coghlán fué objetado, argumentándose que algunos residuos se solidificarían en el mismo, obstruyéndolo. Los propietarios de los saladeros también lo criticaban, por cuanto su situación económica no les permitía efectuar un desembolso de tantos pesos como exigía aquella construcción.

Se llegó finalmente a una transacción: los saladeros no arrojarían ciertos residuos al Riachuelo, los que serían incinerados.

Este acuerdo fué aceptado por ambas comisiones y luego, refrendado por el gobierno, por un decreto que lleva las firmas de Alsina y Avellaneda (2).

Debe rendirse especial tributo en la campaña en pro del saneamiento del Riachuelo, al doctor Miguel Puíggari, quien en forma empeñosa, en numerosos escritos y trabajos, trató en toda forma de llamar la atención de las autoridades sanitarias, para que dieran solución a este grave problema higiénico.

En sus «Lecciones de química aplicada a la higiene y a la administración», que fueron publicadas en el año 1863, se encuentran algunos de sus trabajos relacionados precisamente con este tópico.

Posteriormente, en el año 1898, la Dirección de Salubridad Pública de la provincia (3) planteó al Departamento Nacional de Higiene el grave problema higiénico que creaban los establecimientos industriales situados sobre la margen provincial del Riachuelo, al arrojar al mismo sus aguas residuales y otros desechos.

Se estableció, como consecuencia de ello, la inspección de aquellos establecimientos, resolviéndose, además, efectuar análisis químicos y bacteriológicos de las aguas que descargaban, como también de las mismas aguas del Riachuelo.

Uno de los trabajos químicos más completos que se han publicado sobre el problema higiénico del Riachuelo, es el de los doctores Pedro N. Arata, Jacobo García y Enrique Carmona (4), donde mencio-

(1) A la misma conclusión llega en el año 1874 el doctor Juan Dillon en su trabajo «El agua y fango del Riachuelo» - Anales de la Sociedad Científica Argentina - I (1874), 57.

(2) Hace pocos años (1944), intervino el Laboratorio de O. S. N. por un caso semejante.

(3) Revista Farmacéutica (1868), 74.

(1) M. L. Sarto y Fernández: «Anteproyecto de saneamiento y canales de riego presentado al gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires», Imprenta «El Censor» (1887), 47 páginas y un mapa.

(2) Revista Farmacéutica (1868), 74.

(3) Anales del Departamento Nacional de Higiene - VIII (1898), 16.

(4) «Saneamiento del Riachuelo y del Puerto de Buenos Aires», Anales del Departamento Nacional de Higiene - XI (1904), 289.

nan que: «El superior gobierno concedió la rectificación del mismo a una empresa llamada "Canalizadora del Riachuelo". La rectificación de la primera sección permitió reducir el recorrido del Riachuelo en un 50 % y fué realizado por los ingenieros Toledo y Maraini.

Muestran los autores, por los análisis químicos y bacteriológicos realizados, cuáles eran las principales fuentes de contaminación y señalan especialmente, la descarga de los líquidos residuales del Matadero Municipal.

También se fijaron en un anteproyecto las condiciones químicas a que debían responder los líquidos residuales, para aceptarse su descarga al Riachuelo.

Una iniciativa más reciente, se encuentra en la nota que dirige el doctor José Penna (1), nuestro prestigioso higienista ex presidente del Departamento Nacional de Higiene, al Ministerio de Gobierno de la Nación, sobre el problema higiénico del Riachuelo y del Maldonado, y en la que se establece la necesidad imperiosa de sanear este curso de agua.

Finalmente citaremos como trabajos interesantes, desde el punto de vista químico, el del doctor Mariano A. Chinestraud (2), quien efectuó análisis de muestras de agua tomadas a distintas alturas del Riachuelo, mostrando cómo se va contaminando con las diversas descargas industriales; el del doctor L. J. Palet (3), realizado para optar a su tesis doctoral, trabajo realmente de mérito y que debe calificarse como magistral, por los rumbos que señalaba para los problemas de la contaminación de los cursos de agua y en especial, de dicho riacho; y por último, el del doctor Alejandro Sener (4), titulado «Algunos vibriones aislados de las aguas del Riachuelo», muy interesante en su faz higiénica.

Desde el punto de vista ingenieril habría de recordar que el problema del Riachuelo fué también encarado por el ingeniero Santiago Bevans (5), en el año 1823, en su punto sobre el puerto de Buenos Aires y también lo hicieron en los años 1859 y 1871 los ingenieros Juan Coghlan (6) y J. de la T. Bateman, en sus respectivos proyectos sobre el mismo asunto.

Hubo además un proyecto de los ingenieros A. Ebelot y P. Blot (7) en el que se proponía la comunicación mediante un canal, del Riachuelo con el arroyo Maldonado, construyendo al mismo tiempo un gran puerto de cabotaje. El canal que uniría ambas curvas de agua sería navegable.

Debe reconocerse también al ingeniero Luis A. Huergo (8), quien con la autoridad y prestigio que lo distinguiera en la ingeniería argentina, se ocupó también del problema del Riachuelo.

(1) Anales del Departamento Nacional de Higiene - XVII (1910), 471.

(2) Farmacia Moderna - I (1910), 36, 62, 88.

(3) «Las aguas residuales, su composición, inocuidad, métodos de purificación, límites y métodos de contralor». Tesis; Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Buenos Aires (1913).

(4) Revista Farmacéutica - LV (1913), 388.

(5) «Memorias y planos del puerto de Buenos Aires», (1923-24).

(6) «Memoria y proyecto del puerto de Buenos Aires»; Juan Coghlan (1859), 30 planos.

(7) Don A. Ebelot era ingeniero civil diplomado en París. En el año 1876 construyó la línea de defensa contra los indios llamada «Zanja de Alsina», que iba desde Bahía Blanca hasta Italó, con una extensión de 100 leguas.

(8) Ingeniero Luis A. Huergo: «Mejoras del Riachuelo»; Anales Sociedad Científica Argentina, 2 (1876), 28.

Consideraremos ahora las iniciativas y leyes de carácter general que aparecen en una época más reciente, comenzando por el primer proyecto de ley sobre protección de ríos. Lo encontramos al plantearse el problema de la construcción de las obras de salubridad de la ciudad de Rosario de Santa Fe; en aquella época el Departamento Nacional de Higiene sometió a aprobación del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, el siguiente proyecto:

«Artículo 1º — Desde la promulgación de la presente ley, queda absolutamente prohibido a toda ciudad, villa, pueblo o aldea que se encuentre situada en la costa o inmediaciones de los ríos de la República, arrojar a ellos sus aguas cloacales, siempre que las poblaciones se surtan de sus aguas para los casos alimenticios.

«Art. 2º — Tratándose de fábricas o establecimientos industriales que produzcan residuos líquidos, no podrán disponer de los ríos cercanos para arrojar a ellos sus residuos, sin llenar previamente los siguientes requisitos:

«1º Deberán presentar por escrito al superior gobierno, manifestando el género de industria, la clase de residuos, su composición detallada y todos los datos que se relacionen con la materia;

«2º El Departamento Nacional de Higiene expedirá su informe en cada uno de estos casos de acuerdo con las disposiciones consignadas en cada uno de los siguientes títulos:

No podrán ser arrojados a los ríos, los residuos de fábricas y establecimientos industriales cuyas aguas contengan por litro:

- «a) de 5 a 10 mg de materia sólida en suspensión;
- «b) 3 mg de azoe bajo forma de compuestos orgánicos o amoniacales;
- «c) aguas que necesitan 2 mg de permanganato de potasio para oxidar todos sus compuestos orgánicos;
- «d) 2 mg de ácido sulfhídrico o de algún sulfuro soluble;
- «e) 5 mg de ácido sulfhídrico o clorhídrico o de un álcali libre;
- «f) 0,05 mg de cloro o ácido sulfuroso libre;
- «g) 0,01 mg de arsénico combinado;
- «h) 10 mg de sulfato de cinc o de hierro;
- «i) 30 mg de alumbre o hierro potásico;
- «j) 200 mg de cloruro de calcio o magnesio;
- «k) 500 mg de cloruro de sodio;
- «l) 0,05 mg de productos de destilación de carbón fósil;
- «m) para los ríos de pequeño caudal, agua caliente cuya temperatura pase de 20º C.

«Art. 3º — En los casos de duda sobre la interpretación de la presente ley, el Departamento Nacional de Higiene resolverá administrativamente el punto (octubre de 1889).»

Esta iniciativa no llegó a concretarse; posteriormente, en el año 1891, se sanciona la ley 2.797 (1) por la que se establece:

(1) A iniciativa de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional doctor Bartolomé Novaro.

«Artículo 1º—Las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados a los ríos de la República, si no han sido sometidos previamente a un procedimiento eficaz de purificación.

«Art. 2º—El Poder Ejecutivo mandará practicar los estudios necesarios para establecer el mejor sistema de purificación de los residuos cloacales de la Capital Federal y ciudad de Rosario, remitiéndolos oportunamente al Honorable Congreso.

«Art. 3º — Comuníquese, etc.»

Debemos aclarar que la ley, a pesar de haber sido dictada en el año '831, no ha sido aún reglamentada.

A propósito de esta ley, y como ejemplo del incumplimiento de la misma, diremos que la descarga cloacal de la ciudad de Rosario de Santa Fe, originó una protesta de la población de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Este hecho dió lugar a que se efectuara en el país el primer estudio sobre contaminación y autodepuración de un curso de agua, efectuado por el Dr. Telémaco Sussini (1) sobre las aguas del río Paraná, en las inmediaciones de Rosario. La parte química del trabajo, la ejecutó el Dr. Francisco P. Lavalle.

Se estableció en dicho estudio que la descarga no llegaba a producir la contaminación de las aguas de una gran zona, pues la autodepuración se realiza rápidamente. Aconsejaron la prolongación del caño de descarga cloacal hacia el centro de la corriente.

Otros antecedentes relacionados con la contaminación de los cursos de agua y protección de los mismos, serían:

a) Un decreto dictado en el año 1ººº por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con motivo de una grave contaminación del río Luján. En su artículo 2º se especificaba: «Prohibir a las destilerías y otros establecimientos industriales, arrojar las aguas a los ríos o arroyos sin previa separación de las materias sólidas, por medios químicos o mecánicos, y recomendar el empleo de los líquidos sobrantes para el riego de los terrenos labrados.»

b) En septiembre 11 de 1894, el Dr. Pedro Pando, que era jefe de la oficina química del Consejo Superior de Higiene de la provincia de Buenos Aires, solicitó una reglamentación más severa para evitar la contaminación de las aguas del Tigre y nuevamente en el año 1895, y a raíz del informe de los doctores Pando y Gorostiaga (2), sobre la infección de los ríos Luján, Tigre y Las Conchas, por líquidos cloacales, el Poder Ejecutivo de la provincia, representado en aquella época por el interventor nacional Dr. Lucio Vicente López, dictó un decreto «prohibiendo las descargas de líquidos cloacales e industriales, y encargando a la municipalidad de Las Conchas, el cumplimiento de dicha reglamentación.

Recién en el año 1903 se dicta la ley nacional 4.198, cuyo objeto principal es resguardar la contaminación del agua del río de la Plata, fuente de abastecimiento de la gran ciudad, como así también, de la napa llamada semisurgente, por cuanto ésta era utilizada por Obras Sanitarias de la Nación para el suministro

de agua a los barrios de Flores, Belgrano, Villa Urquiza y además, por muchos inmuebles situados fuera del radio de las aguas corrientes.

Transcribimos a continuación la ley nacional 4.198:

«Artículo 1º — (*Facultando la adopción de medidas.*) Desde la promulgación de la presente ley queda facultado el Poder Ejecutivo para adoptar dentro del territorio de la Capital Federal, todas las medidas conducentes a impedir la contaminación del agua del río de la Plata, y la de la segunda napa, comúnmente llamada semisurgente, en cuanto ella pueda afectar a la población del mismo.

«Art. 2º — (*Depuración de las aguas servidas.*) Las casas particulares, establecimientos industriales y otros cualesquiera que directa o indirectamente arrojen sus aguas servidas al río de la Plata, o a cursos de agua que en él desemboquen, en parajes donde puedan producir la contaminación a que se refiere el artículo anterior, quedan obligados a depurarlas previamente dentro de los plazos y con los procedimientos que al efecto establezca el Poder Ejecutivo.

«Art. 3º — (*Obligando condiciones previas de depuración.*) No podrán establecerse en adelante fábrica o taller de cualquier clase que sea, o casahabitación con desagüe de aguas servidas al río de la Plata o a cursos de agua que desemboquen en el mismo, en las condiciones antes mencionadas, sin previa autorización del Poder Ejecutivo. En cada caso, el Poder Ejecutivo establecerá las condiciones en que se han de depurar las aguas servidas, de acuerdo con los procedimientos que aconseja la Dirección General de Obras de Salubridad.

«Art. 4º — (*Pozos semisurgentes.*) Queda absolutamente prohibida la perforación y uso de pozos semisurgentes en condiciones tales, que por defectos de construcción o por ser utilizados como pozos absorbentes, puedan contaminar la napa que los alimenta.

«Art. 5º — (*Cumplimiento de la ley.*) El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección de Obras de Salubridad, ejercerá la inspección y vigilancia necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de dicha dirección la aplicación de los reglamentos y disposiciones que al efecto dictare el Poder Ejecutivo.

«Art. 6º — (*Multas.*) El Poder Ejecutivo podrá imponer multas hasta la suma de \$ 1.000 m/n. a los infractores de las disposiciones reglamentarias de esta ley, quedando igualmente autorizado para efectuar por cuenta de los interesados, cuando éstos se rehusaren a hacerlos, los trabajos u operaciones de saneamiento que se les ordene, y para clausurar cualquier establecimiento insalubre mientras no se ponga en condiciones reglamentarias.

«Art. 7º — (*Derogación de disposiciones contrarias.*) Queda derogada toda disposición en contrario de la presente.

«Decreto reglamentario de la ley 4.198, sobre medidas conducentes a impedir la contaminación del agua del río de la Plata y de la napa semisurgente

«Buenos Aires, junio 17 de 1904.

«Hallándose facultado el Poder Ejecutivo por la ley 4.198 para adoptar dentro del territorio de la Capital Federal todas las medidas conducentes a impedir la contaminación del agua del río de la Plata y de la napa subterránea llamada semisurgente, y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección General de las Obras de Salubridad de la Nación,

(1) Anales Departamento Nacional de Higiene - 14 (1894), 225, y «Semana Médica», I.

(2) Memoria presentada al Consejo Superior de Higiene de la provincia de Buenos Aires. La Plata (1895), 35.

«El presidente de la República

«DECRETA:

«Artículo 1º—El propietario de toda casa particular, establecimiento industrial o inmueble de cualquier clase—en adelante se denominará el propietario—, ubicado en el territorio de la Capital de la República que desde la fecha de este decreto necesite arrojar aguas servidas, cloacales o industriales al curso de agua que desemboque directa o indirectamente en el río de la Plata, deberá solicitar previamente el permiso correspondiente al Poder Ejecutivo. Con este objeto presentará a la Dirección General de las Obras de Salubridad de la Nación una solicitud, acompañada de los planos correspondientes al edificio e instalaciones y de una memoria explicativa del objeto a que se le destina, con todos los datos necesarios para poder determinar la cantidad y calidad del líquido. Deberá también acompañar planos y memoria explicativos del procedimiento que propone la depuración previa de los líquidos y de la canalización que los conducirá hasta el curso de agua más próximo.

«Art. 2º—La Dirección General de las Obras de Salubridad de la Nación—designada en adelante con la palabra Dirección—, dentro del plazo de sesenta días, remitirá al Ministerio de Obras Públicas cada solicitud, informando respecto del procedimiento de depuración y de las instalaciones propuestas. Si el proyecto fuese aprobado por el Poder Ejecutivo, volverá a la dirección para la aprobación e inspección de los trabajos. En caso de que fuera rechazado el expediente, volverá igualmente a la dirección a fin de que ésta señale un plazo que no excederá de sesenta días para que el propietario presente un nuevo proyecto o introduzca las modificaciones necesarias, y vencido este plazo, volverá al Ministerio de Obras Públicas para la resolución definitiva.

«El propietario que habiendo presentado planos no concurren al llamado de la dirección para modificarlos, si fuere necesario, o no los devolviera modificados dentro del plazo fijado al efecto para su aprobación, incurrirá en una multa de veinte a cien pesos moneda nacional.

«Art. 3º—Otorgado por el Poder Ejecutivo el permiso a que se refiere el artículo anterior, el propietario podrá comenzar las obras debiendo dar aviso previo de diez días a la dirección para que establezca la inspección correspondiente. Dicha dirección queda encargada de inspeccionar las obras y exigir que se ejecuten de conformidad a los plazos y especificaciones aprobadas y a las instrucciones que dictaren sus inspectores, pudiendo al efecto hacer uso de las facultades y de los procedimientos que establece el reglamento general para la construcción de cloacas domiciliarias en la Capital Federal.

«Art. 4º—Todo propietario de casa particular, establecimiento industrial o inmueble de cualquier clase que descargue actualmente aguas servidas en el río de la Plata o en arroyos o ríos que desemboquen directa o indirectamente en el mismo dentro del territorio de la Capital, queda obligado a denunciar estos desagües a la dirección, a cuyo efecto se da un plazo de sesenta días a contar desde la fecha de este decreto. Los propietarios de establecimientos que no presentaren su denuncia dentro del plazo señalado anteriormente, incurrirán en una multa de quinientos pesos moneda nacional.

«La dirección, por medio de publicaciones en los diarios de la Capital, durante veinte días por lo menos, llamará a los interesados en mantener esos desagües a fin de que presenten una solicitud para obtener permiso del Ministerio de Obras Públicas para seguir usándolos.»

Finalmente, relacionado con este problema debemos recordar que en el período comprendido entre enero de 1918 y octubre de 1920, el laboratorio de Obras Sanitarias de la Nación (1) estudió desde el punto de vista higiénico, las aguas del río de la Plata en la zona comprendida entre San Isidro y Río Santiago, fijando las zonas de influencia de las descargas de los arroyos Cildañez, Vega, Maldonado, puerto de Buenos Aires y del Riachuelo, además, la gran zona correspondiente a la descarga de la cloaca máxima de la Capital, en Berazategui.

En el estudio de esta última zona (Berazategui), que como hemos dicho tiene ya 30 años, debe tenerse en cuenta que en aquella época los caudales eran:

Año	Promedio para la Capital Federal agua consumida	Líquido cloacal (Descargado en Berazategui)
1917 . . .	338.000 m ³ /día	208.000 m ³ /día
1918 . . .	382.000 "	233.000 "
1919 . . .	403.000 "	267.000 "

Actualmente estos volúmenes han aumentado considerablemente, pues en el año 1947 el promedio registrado era para el:

Agua consumida en la Capital Federal y pueblos ribereños	Líquido cloacal descargado en Berazategui
de 1.273.000 m ³ /día	de 1.081.000 m ³ /día,

lo que lógicamente ha hecho variar la zona de influencia de la descarga cloacal. Fué éste, sin lugar a dudas, el primer estudio de importancia que sobre contaminación y autodepuración de las aguas se ha realizado en el país.

En septiembre de 1937, debido a insuficiencia del sistema cloacal de la Capital Federal, Obras Sanitarias de la Nación se vió obligada a efectuar una descarga de aproximadamente 50.000 m³ diarios de líquido cloacal al Riachuelo (2), vertimiento que se efectuó a la altura de la calle San Francisco. Otra descarga importante se realizó en Puerto Nuevo, con un volumen semejante y otros menores, a los arroyos Vega y Maldonado.

Lógicamente estas descargas perjudicaban el estado higiénico del Riachuelo y del río de la Plata, pero era la única solución factible en aquel momento, para encarar el problema que planteaba el gran desarrollo de la ciudad de Buenos Aires.

Como final de esta recopilación, debemos manifestar que, desgraciadamente, a pesar de las leyes 2.797 y 4.198 y de todos los decretos, reglamentaciones, ini-

(1) Bado A. y Bernaola V.: "Autodepuración del agua del río de la Plata. Influencia de la descarga de la cloaca máxima". 2º Congreso Nacional de Ingeniería; Buenos Aires; año 1923.

(2) Acta Nº 8 de la Dirección Técnica de Obras Sanitarias de la Nación.

ciativas, trabajos, votos formulados (1), etcétera, el estado higiénico de muchos de los cursos de agua en los alrededores de nuestras grandes ciudades y, en especial, de la Capital Federal, es, por muchas razones, lamentablemente criticable.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes, el crecimiento rápido de las poblaciones y el gran resurgimiento industrial que se viene operando en estos últimos años, han traído problemas de gran magnitud higiénica y cuya solución deberá encararse con premura.

La falta de una planificación previa en la distribución de las industrias ha producido dos graves inconvenientes: la insalubridad del medio por las aguas y desechos residuales y el agotamiento de las napas subterráneas de agua, cuya reserva no deberíamos malgastar. En muchas zonas, la industria ha agotado ya, prácticamente, las napas o ha hecho que se salinificaran intensamente, como ha ocurrido en Avellaneda, Cuatro de Junio, Bernal y otras localidades cercanas a la Capital Federal.

Las perspectivas de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires son poco halagüeñas. Esta situación la crean los mismos industriales que, al instalarse en las cercanías de la Capital, impiden la descentralización de las industrias, principalmente aquellas que necesitan grandes cantidades de agua.

Otro problema higiénico que debe considerarse relacionado con la contaminación de los ríos es el siguiente: muchos cursos de agua son utilizados como balnearios en la época de los fuertes calores por una gran masa de población, lo que constituye un peligro que es necesario evitar, pues la mayoría están contaminadas hasta con líquidos cloacales y no deben de ninguna manera destinarse a balnearios. Tal vez sea ésta una de las causas de que exista en nuestra población gran número de personas parasitadas. El mismo origen puede atribuirse a muchas diarreas y fiebres entéricas de verano, y es que, al problema que presenta el mal estado de esas aguas, se suman las pésimas condiciones higiénicas de los balnearios, los que carecen de las más elementales instalaciones sanitarias.

Para solucionar aún en parte el problema sanitario de la contaminación de los ríos, arroyos, etcétera, por los desagües industriales, sería conveniente realizar (2):

- 1º Una planificación integral del Gran Buenos Aires, respecto a la radicación de las grandes industrias, teniendo en cuenta que:

- a) Las industrias que requieren grandes volúmenes de agua, cuando utilizan el agua subterránea y la extraen sin fiscalización alguna, agotan, prácticamente, las napas o hacen que las aguas se salinicen. Lógicamente este problema es mayor en las ciudades que se abastecen con agua de pozos;

- b) Debe protegerse en toda forma la toma de agua de Palermo, no permitiendo ciertas descargas en los arroyos Maldonado, Vega, etcétera. Iguales precauciones deben tomarse en la zona de Bernal, donde se proyecta la nueva toma de agua destinada al futuro establecimiento de purificación, así como también en los abastecimientos del interior, que se efectúan con aguas superficiales.

- 2º No debe permitirse en ningún concepto la descarga de líquidos cloacales a los ríos o arroyos de pequeño caudal, por los graves inconvenientes que se originan.

- 3º Deben protegerse las zonas de las aguas de los balnearios y lugares de pesca, preferentemente en las zonas cercanas a las grandes ciudades.

- 4º Activar en lo posible la construcción de las colectoras y desagües en todas las poblaciones, especialmente aquellas que circundan a los grandes aglomerados.

- 5º Solicitar la cooperación de los industriales para que colaboren en una campaña de educación sanitaria con las instituciones del Estado.

No debe olvidarse que, a pesar de todas las ordenanzas y reglamentos que se dicten, la higiene no se impone por ellas, y sólo tiene éxito cuando la buena voluntad de los habitantes secundan las medidas oficiales.

Sr. Rabanal. — Entre los artículos de la ley orgánica que estamos considerando hay algunos que establecen las características de las obras a realizar. Por eso quiero hablar de la necesidad de sanear definitivamente algunos cursos de agua del Gran Buenos Aires, tales como el arroyo Morón, el río Las Conchas, el arroyo Sarandí, etcétera. Las descargas industriales y los líquidos cloacales que en aquéllos se arrojan traen como consecuencia la peligrosa contaminación de las aguas de los arroyos o riachos de las zonas balnearias, lugares de pesca, zonas residenciales y de fin de semana.

Denuncio, señor presidente, que en dichas zonas los vecinos beben agua de pozos que tienen tres, cuatro, cinco y seis metros de profundidades, cuyas napas freáticas lógicamente tienen que estar contaminadas.

Además, en la propia Capital se están haciendo descargas clandestinas. En el arroyo Cildañez se vierten aguas servidas, líquidos de origen industrial y cloacales. En ese sentido, yo mismo he verificado que en el tramo existente entre la calle San Pedro y Escalada hasta el Riachuelo, la utilización de ese canal para la servidumbre de todos los líquidos que acabo de señalar es evidente. No estoy, pues, improvisando. Cuando nuestro sector plantea un aspecto como el que estamos comentando, lo plantea con plena responsabilidad de lo que afirma.

El arroyo Medrano, por ejemplo, a la altura de la avenida General Paz, recibe también una gran cantidad de aguas servidas, líquidos cloacales y líquidos de origen industrial. En su desembocadura en el río de la Plata se hallan las

(1) En el III Congreso Nacional de Medicina, celebrado en el año 1926, se formuló un voto para que nuestros ríos y arroyos conservaran su estado higiénico natural.

(2) Actualmente el Poder Ejecutivo nacional ha constituido una comisión integrada por funcionarios de Salud Pública, Obras Sanitarias de la Nación, municipalidad de la Capital, Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, etcétera, para estudiar el saneamiento urbano y suburbano de la provincia de Buenos Aires. Esta comisión es presidida por el doctor Luis Lepera.

instalaciones del Club Náutico Bucharado que, como saben perfectamente bien los señores diputados, es utilizado diariamente por una enorme cantidad de ciudadanos que practican el *yachting*, la pesca y otros deportes similares.

Sr. Miel Asquía. — ¿Tiene eso alguna relación directa con la ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación?

Sr. Rabanal. — Está directamente relacionado porque en la ley orgánica se determina la forma en que debe encararse la ejecución de las obras. La Honorable Cámara debe escuchar todas estas informaciones porque entrañan hechos de inusitada gravedad para la salud de la población.

Contemplando los aspectos que he señalado, debe hacerse un código de saneamiento que ponga término a este estado de cosas.

Sr. Miel Asquía. — Presente el proyecto correspondiente, señor diputado.

Sr. Rabanal. — No pueden desconocer los señores diputados que estos aspectos deben tenerse en cuenta al poner en marcha a la nueva ley orgánica de Obras Sanitarias.

Sr. Colom. — ¿Por qué no presenta el señor diputado el proyecto respectivo para que la Cámara pueda estudiarlo debidamente?

Sr. Cattáneo. — Por eso está dando los fundamentos.

Sr. Colom. — Ahora estamos tratando la ley orgánica de Obras Sanitarias.

Sr. Rabanal. — Piensen los señores diputados que los arroyos Vega y Belgrano, entubados en la Capital Federal, y que desembocan en la zona Norte del río de la Plata, arrojan diariamente millones de litros de líquidos que constituyen una permanente amenaza para los ciudadanos que concurren a esa zona balnearia, en la cual el Ministerio de Obras Públicas también está construyendo actualmente un nuevo balneario. Esto debe servir de advertencia para que se busquen los medios técnicos necesarios para realizar la depuración de esas aguas.

Entiendo que la Cámara debe meditar seriamente acerca de la importancia que tiene una ley orgánica de Obras Sanitarias, no sólo en lo que atañe a la Capital y al Gran Buenos Aires, sino también al resto de la República.

Podría hacer otras consideraciones fundamentales importantísimas, pero espero que en alguna otra oportunidad volveremos a tocar el tema, para analizar también esos problemas que hacen a la esencia misma de la función específica de Obras Sanitarias, que deben ser resueltas en forma mediata para asegurar la tranquilidad y proteger la salud de toda la población.

Espero, señor presidente, que de este debate surjan elementos de juicio que permitan al gobierno, recogiendo las insinuaciones de la minoría, dar soluciones integrales al país. Espero que así sea para que podamos desde aquí tener la satisfacción de expresar que el gobierno, haciéndose eco de la crítica construc-

tiva de nuestro sector, se entrega de lleno a servir los intereses permanentes de todos los habitantes de la República, sin distinción de banderas políticas de ninguna naturaleza. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Astorgano. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Astorgano. — Hago moción de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital.

— Resulta afirmativa de 59 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Corresponde que la Cámara en comisión adopte un despacho.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación de que se adopte como despacho el texto del proyecto distribuido a los señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital.

— Resulta afirmativa de 60 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la conferencia.

15

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se va a dar cuenta del despacho producido por la Honorable Cámara constituida en comisión.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Institución

Artículo 1º — La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación constituirá una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, conservando su actual denominación.

Objeto de la institución

Art. 2º — Corresponde a la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República, y la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios, o bien a participar en empresas de capital mixto, que persigan el mismo objeto.

*Organización, atribuciones, deberes
y autoridades*

Art. 3º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación funcionará con la autarquía que le atribuye la presente ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia necesaria para el debido control de su funcionamiento y podrá intervenirla cuando las exigencias del buen servicio lo hicieran indispensable.

La superintendencia prevista en el párrafo precedente se ejercerá sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Contaduría General de la Nación por la ley de contabilidad y demás vigentes, salvo en cuanto hayan quedado modificadas por la presente.

Art. 4º — Para el cumplimiento de los fines consignados en el artículo 2º, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá las siguientes facultades:

- a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución en las condiciones establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea como demandante o demandada, y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales, y adoptar las medidas que estime necesarias para la debida prestación de los servicios a su cargo, con arreglo a las disposiciones de la presente ley, a las reglamentaciones en vigor o que en lo sucesivo apruebe el Poder Ejecutivo;
- b) Celebrar convenios de compraventa o locación de bienes muebles o inmuebles, aceptar donaciones, celebrar contratos para la adquisición de materiales, ejecución de obras y prestación de servicios con licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad y de obras públicas;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la institución, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- d) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación de la tarifa para el cobro de los servicios que presta la institución;

- e) Promover ante las autoridades provinciales y municipales las tramitaciones tendientes al acogimiento de las ciudades y pueblos del interior del país al régimen de la presente ley.

Art. 5º — Será dirigida por un Consejo de Administración presidido por un administrador general e integrado por los directores generales: técnico, de explotación comercial, de finanzas y contabilidad, de asuntos jurídicos y de personal y asistencia social, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Los directores generales técnico y de explotación comercial reemplazarán en este orden al administrador general, en caso de vacancia o ausencia o imposibilidad temporaria del titular.

Art. 6º — Corresponde al Consejo de Administración la resolución de los siguientes asuntos:

- a) Aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos y de la memoria anual;
- b) Aprobación de proyectos y presupuestos de obras y determinación de la oportunidad y forma, por administración o por contrato, de ejecución de las mismas;
- c) Aprobación de pliegos de condiciones y especificaciones para licitar la construcción de obras y ejecución de trabajos o servicios, y para la compraventa de materiales, artefactos, maquinarias, etcétera, y su adjudicación, o la adjudicación o compra directa de los mismos y todo lo concerniente al cumplimiento de los contratos emergentes en los casos en que su importe exceda de veinte mil pesos moneda nacional (\$ 20.000 m/n.);
- d) Organización y distribución de las dependencias de la repartición;
- e) Formulación de los reglamentos internos y de los que deban someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- f) Determinación de las tarifas para el cobro de los servicios prestados;
- g) Compraventa y locación de inmuebles, expropiaciones y servidumbres;
- h) Adquisición de obras e instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal;
- i) Confección del plan anual de trabajos públicos;
- j) Celebración de arreglos judiciales o extrajudiciales y transacciones;
- k) Aceptar donaciones;
- l) Consideración de todo otro asunto que someta a su consideración el presidente.

Las resoluciones del Consejo de Administración serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el administrador general doble voto en caso de empate. Si el administrador ge-

neral estuviera en desacuerdo con lo resuelto por la mayoría del consejo, el asunto será llevado al Poder Ejecutivo, el que resolverá en definitiva.

Art. 7º — El administrador general tiene a su cargo la parte ejecutiva de la repartición, ejerce su representación legal y administrativa y le corresponde resolver los asuntos no reservados para el Consejo de Administración.

Art. 8º — El administrador general podrá delegar en las dependencias principales de la administración la adopción de resoluciones en cuanto se trate de la simple aplicación de normas establecidas en leyes o reglamentos y no comprometan el patrimonio de la repartición.

Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención

Art. 9º — Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, desde su promulgación, en la Capital Federal, territorios nacionales y poblaciones de provincias en las cuales Obras Sanitarias de la Nación presta ya los servicios a que se refiere el artículo 2º.

Art. 10. — La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias al régimen establecido en la presente ley se producirá mediante el siguiente procedimiento: las Legislaturas sancionarán leyes que declaren con carácter general el acogimiento de la provincia y acuerden a las municipalidades respectivas la facultad de acogerse en cada caso particular; una vez producida la expresión de voluntad de la municipalidad o bien de la autoridad que haga sus veces, en caso de que no existiera organismo comunal con facultades suficientes, el Poder Ejecutivo provincial declarará por decreto el acogimiento, con lo que quedará perfeccionado el vínculo contractual sobre la base de las disposiciones de la presente ley y reglamentación complementaria.

— Los artículos 11, 12 y 13 se suprimen y se corrige la numeración.

Art. 11. — Transcurrido el término de tres años, a contar de la fecha del acto que declare su acogimiento a la presente ley, sin que se hubiere dado comienzo a la ejecución de las obras, la municipalidad respectiva podrá desistir del mismo, a cuyo efecto dictará la ordenanza correspondiente y la comunicará a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Si el proyecto de las obras estuviera ya perfeccionado, la municipalidad deberá reintegrar su costo a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en caso de que lo utilice para la construcción de las obras.

Art. 12. — Cumplida la tramitación prescrita en el artículo 10, la Administración General

de Obras Sanitarias de la Nación efectuará los estudios y formulará el proyecto respectivo, el que será aprobado en la forma que establece el artículo 6º.

Art. 13. — Mientras las obras construídas no hayan sido entregadas a las autoridades provinciales o municipales en virtud de lo que establecen los artículos 48 y 50, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejecutará las obras de ampliación, renovación y mejoramiento que el buen servicio haga necesarias.

Art. 14. — Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de la presente ley, no podrán otorgarse en los mismos concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua y desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones provinciales o municipales; pero en las localidades donde ya exista una concesión particular, podrá convenirse la subsistencia de la misma contemporáneamente con la prestación que la Nación toma a su cargo, siempre que el radio de acción se delimite en forma de que no se produzcan superposiciones.

Régimen financiero

Art. 15. — Los ejercicios financieros, las rendiciones de cuentas y la inspección de la contabilidad de la institución, se sujetarán a las disposiciones de la ley de contabilidad con la intervención pertinente de la Contaduría General de la Nación. Dentro del primer semestre de cada año, el presidente presentará al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente al ejercicio anterior.

Art. 16. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá siempre sus depósitos en el Banco Central de la República o en el establecimiento que éste determine, en cuenta corriente o a plazo fijo, y queda autorizada a adquirir títulos de la deuda pública de la Nación, con intervención del Ministerio de Hacienda, o el de Finanzas, siempre que la operación resulte conveniente para evitar pérdidas de intereses.

Art. 17. — No podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en su presupuesto general aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorizaciones del Poder Ejecutivo en cada caso.

Art. 18. — Para los gastos que demanden los estudios, proyectos, construcción, renovación y ampliación de las obras, créase un crédito global de \$ 200.000.000 moneda nacional por año, que se considerará incluído en las leyes 12.576 y 12.815, para ser atendido con el producido de la emisión de títulos. No se operará el arrastre de dicho crédito, debiendo cancelarse los excedentes anuales que se produzcan.

El Poder Ejecutivo, por conducto de los departamentos de Obras Públicas y de Hacienda, fijará en un plan anual, que aprobará en particular para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, la suma a invertir en el ejercicio. Una vez aprobado, la Administración de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para contratar la construcción de las obras y adquisición de materiales y elementos destinados a las mismas con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá contratar la ejecución de obras y compra de materiales por sumas que excedan a las asignadas para el ejercicio, cuando se trate de trabajos cuya realización requiera más de un año, sin que excedan los créditos correspondientes a esos años futuros, pero sólo podrá invertir anualmente la cantidad fijada en el plan de trabajos.

Las sumas que con tales objetos se entreguen a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación se acreditarán en una cuenta especial. El servicio financiero de estas sumas se efectuará en la forma que más adelante se dispone.

Art. 19. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación atenderá los gastos de explotación y servicios financieros de las obras construídas en la Capital Federal y en las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales con los siguientes recursos:

- a) Los provenientes de las transferencias que efectúe la Dirección Inmobiliaria Nacional con arreglo a la ley número 12.922 o las que los complementaren o substituyesen;
- b) La recaudación por otros conceptos en la Capital Federal, y por todos los servicios prestados en localidades del interior de acuerdo con las tarifas que fijará el Poder Ejecutivo Nacional, inclusive los derechos de oficina que establezcan las reglamentaciones pertinentes;
- c) El importe de las multas y recargos que sean de aplicación de acuerdo con la presente ley y con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
- d) El aporte de rentas generales que fije anualmente el presupuesto general de la Nación, como compensación por tarifas de fomento o servicios gratuitos en las localidades a que se refiere el artículo 51;
- e) Las donaciones y legados.

Si la suma de esos recursos no alcanzara a cubrir los egresos del ejercicio por concepto de gastos de explotación, el déficit que se produzca será atendido de rentas generales, con carácter de contribución no reintegrable. También se hará remisión a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación de los servicios

financieros que haya dejado de cumplir en el año por falta de fondos.

En el presupuesto general de gastos de la Nación, se incluirán las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones precedentes.

Art. 20. — La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de \$ 448.058.215,89 al 31 de diciembre de 1939, por decreto 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940, y las que con el mismo fin ha recibido con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés igual al menor nominal de los títulos de la deuda pública nacional y su importe será reintegrado por aquella institución mediante la entrega de una cuota del 2 % anual, no acumulativa. Los intereses de esas sumas comenzarán a correr el 1º de enero del año siguiente al de su entrega.

Por los capitales entregados con destino a estudios y construcción de obras, el reintegro comenzará a computarse una vez puestas en explotación las mismas obras; hasta ese momento, los referidos capitales sólo devengarán intereses.

Declárase cancelada la deuda de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con el gobierno nacional por servicios de amortización e intereses no pagados y las sumas recibidas para costear los déficit de explotación. La presente cancelación de deuda se aplicará con relación a la cuenta global que se crea por el artículo 18, pero no tendrá efecto respecto de las cuentas singulares a que se refiere el artículo 48.

Art. 21. — Si en el ejercicio de un año la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación alcanza a cubrir los gastos industriales, los intereses correspondientes y la cuenta de reintegro, el excedente será destinado en el año siguiente a la construcción de nuevas obras o a la renovación, ampliación y mejoramiento de las existentes, a cuyo efecto se incluirán las partidas respectivas en el plan correspondiente.

Régimen de explotación

Art. 22. — Si el 1º de enero de cada año no se hallare sancionado el presupuesto general de gastos y recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o el Poder Ejecutivo no hubiera acordado la autorización prevista en el artículo 16 de la ley 12.961, se considerará prorrogado el vigente para el año anterior.

Art. 23. — Producida la aprobación expresa de su presupuesto o la prórroga automática prevista en el artículo precedente, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar la adquisición de los materiales y elementos y celebrar las contrataciones que requiera la explotación de los

servicios con arreglo a las leyes de contabilidad y de obras públicas.

Art. 24. — En todos los distritos con obras en construcción o explotación, regirán los reglamentos y disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder Ejecutivo o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, como así también las disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos industriales. Las modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cada una en la esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos en cuanto sean de aplicación en ellos.

Art. 25. — A requerimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las empresas de servicios públicos, instituciones o particulares que hagan uso u ocupen el suelo o subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea necesario para la construcción o explotación de las obras previstas en la presente ley. Los gastos que esos trabajos demanden serán abonados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, salvo que los concesionarios se hallen obligados a soportarlos, porque así lo establezcan sus respectivos contratos de concesión. La remoción de las instalaciones de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación será costeada por quienes la soliciten.

Art. 26. — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal, será obligatoria para todo inmueble habitable comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de esos servicios a los inmuebles que sin ser habitables por personas se utilicen para estabular.

Art. 27. — Las obras domiciliarias externas serán construídas por la Administración General de Obras Públicas de la Nación, y las obras internas por los propietarios. Las conexiones serán costeadas por la citada repartición, salvo las excepciones que establezca la reglamentación.

Art. 28. — Los propietarios o poseedores estarán obligados a instalar los servicios de agua y desagüe cloacal y a mantener en buen estado las instalaciones.

Los trabajos se ejecutarán con intervención y aprobación de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Los empleados autorizados para vigilar y dirigir los trabajos domiciliarios o inspeccionar las instalaciones tendrán acceso a los inmuebles, con las limitaciones que fije la reglamentación. Cuando se opusiere resistencia, el administrador general o el jefe del distrito local pedirá el auxilio de

la fuerza pública, el que será acordado por las autoridades policiales.

Art. 29. — Desde la fecha en que se inicie la construcción de las obras queda prohibida la perforación de pozos a cualquier profundidad, sin permiso previo de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, dentro del radio servido, o a una distancia inferior a 500 metros de cualquier fuente de provisión de agua.

Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser cegados bajo la inspección de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, una vez habilitada la provisión de agua. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas. Los pozos existentes dentro del radio de 500 metros de las fuentes de provisión de agua, deberán ser cegados si existiera peligro de contaminación de éstas.

Art. 30. — En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 28 y 29, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá proceder de oficio a la obturación de los pozos y a construir o reparar las obras internas, así como a reconstruirlas si hubieran sido mal ejecutadas por cuenta de los propietarios o poseedores y con el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado en la forma prevista en el artículo 25.

Art. 31. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación está autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad de las ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada para disponer la clausura de los establecimientos industriales cuyos dueños no dieren cumplimiento a las disposiciones que ordene.

Art. 32. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejercerá la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde presta servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte.

Art. 33. — Tanto la provisión de agua a la población como el desagüe de las aguas servidas están previstos para los usos ordinarios dentro de los inmuebles, no comprendiéndose en tal carácter el uso del agua para riego, o para las industrias que no elaboran artículos alimenticios, ni el desagüe de establecimientos industriales.

Art. 34. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación queda facultada para imponer penas pecuniarias que no excedan de \$ 1.000 a los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley o en el reglamento para la construcción y funcionamiento de las obras domiciliarias. Estas multas podrán ser hasta de \$ 10.000, en caso de establecimientos industriales.

Los importes recaudados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en concepto de multas, se incorporarán a su renta, como compensación de los gastos que originen las funciones de inspección y contralor que la presente ley pone a su cargo.

Art. 35. — Todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicio, aun cuando carezca de instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas. Este pago será obligatorio también para los inmuebles que estén desocupados.

Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 36. — Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de las provincias o de los municipios, cualquiera sea la índole de su ocupación, abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas. Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de calles, plazas y paseos públicos, con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

—Se suprime el artículo 40.

Art. 37. — Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial. También estarán exentos del pago de los servicios de agua y de desagües cloacales, cuando carezcan de las conexiones respectivas.

Art. 38. — Los importes de las boletas por servicios sanitarios y demás cuentas que emita la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo pago no se efectúe en la época establecida al efecto, serán gravados con un recargo del 3 % por cada mes de atraso, hasta un máximo del 15 %, luego de lo cual serán pasadas a cobro por vía de apremio con dicho recargo del 15 % sobre su importe. Los valores correspondientes al servicio de agua para construcción, en lugar del recargo progresivo anterior, sufrirán un recargo fijo del 25 % sobre su importe.

Las sumas recaudadas en concepto de recargo tendrán el carácter de compensatorias de los mayores gastos originados por la falta de percepción en oportunidad del importe de los servicios.

Los recargos establecidos en el presente artículo no se aplicarán a las cuentas correspondientes a inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades.

Art. 39. — Los inmuebles en los cuales la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hubiere construido obras, conforme se establece en el artículo 46, por cuenta de los propietarios, y los que adeuden servicios, multas y cualquier otra suma de acuerdo con las disposiciones de esta ley, quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. El crédito correspondiente a las obras mencionadas, tendrá el privilegio establecido en el artículo 3931 del Código Civil; el correspondiente al servicio y sus recargos tendrá el establecido en los artículos 3879, inciso 2º, y 3880, inciso 5º, del mismo código. Ambos privarán sobre el crédito hipotecario posterior a las construcciones o a la prestación de los servicios, respectivamente.

Art. 40. — Antes de escriturarse una transferencia de dominio o constitución de derechos reales, o de ordenarse la inscripción de una sentencia o auto judicial que declare o reconozca una transmisión de derechos sobre inmuebles, se requerirá de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación un certificado en el que conste la deuda que por cualquier concepto reconozca el inmueble de que se trate. Dicho certificado tendrá una validez de quince días contados desde la fecha de su expedición.

Los escribanos públicos deberán incorporar dicho certificado al protocolo en caso de escrituración, así como la posterior constancia de pago, si éste resultare obligatorio según lo que se establece a continuación.

Art. 41. — El pago de los servicios, recargos y multas, como así también el de las cuotas vencidas en el caso de construcción de obras domiciliarias, se hará indefectiblemente y en su totalidad en toda clase de escrituras dentro de los diez días subsiguientes a su otorgamiento.

Para las cuotas no vencidas de la deuda por construcciones realizadas de acuerdo con el artículo 46, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá, previa solicitud de los interesados, autorizar que las facilidades de pago concedidas se mantengan, sea en favor del adquirente en caso de transferencia de dominio, sea del mismo propietario en caso de constitución de derechos reales.

Art. 42. — El Registro de la Propiedad de la Capital Federal y Territorios Nacionales, y los de las provincias, no inscribirán títulos de dominio o de constitución de derechos reales, sin

la constancia, en los testimonios de las respectivas escrituras, de haberse abonado la deuda certificada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o de haberse aceptado la substitución del deudor o el mantenimiento de las facilidades si se trata de deuda no vencida correspondiente a obras construídas conforme al artículo 46. El mismo requisito se exigirá en los oficios que ordenen la inscripción de declaratorias de herederos, testamentos, autos o sentencias que reconozcan, declaren o transfieran tales derechos.

Art. 43. — En las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales será juez competente para entender en las demandas que se inicien por cobros de las sumas que se adeuden de conformidad con la presente ley, el juez federal de sección o el juez letrado de territorio que corresponda.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación o el apoderado que ésta designe, intervendrá en dichos juicios como representante del fisco.

Art. 44. — El cobro de las cuentas se hará por vía de apremio que establece la ley nacional de procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, designando a los inmuebles deudores, y expresando la deuda que resulte de sus libros.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad extrínseca del título y falta de personalidad, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos de pago.

No procederá en él la obligación de afianzar las resultas de juicios ordinarios.

—Se suprime el artículo 49.

Art. 45. — Las instalaciones o inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, estarán exentos de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de mejoras, y de cualquier otro gravamen que hayan sancionado o sancionen la Nación, las provincias, sus municipalidades y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Régimen de construcción de obras domiciliarias con beneficio de su pago por cuotas mensuales

Art. 46. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá construir obras domiciliarias de provisión de agua y desagüe cloacal a pedido y por cuenta de los propietarios, quienes las abonarán en 60 cuotas mensuales e iguales, incluyendo intereses del 5 % anual capitalizado semestralmente.

Art. 47. — Por los fondos suministrados o que se suministren en adelante a la Administración

General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras domiciliarias a plazos, no se computará la cuota de reintegro. Dichos fondos serán devueltos a la tesorería nacional a medida que resulten innecesarios. En concepto de intereses, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación liquidará al gobierno nacional las mismas sumas que perciba de los propietarios deudores.

Régimen de rescate de las obras

Art. 48. — Una vez reintegrado el costo de las obras construídas en localidades del interior, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hará entrega de las mismas a las autoridades locales respectivas, a su requerimiento. En caso de no mediar tal requerimiento, la explotación de los servicios seguirá a cargo de la citada repartición nacional, en las condiciones establecidas en la presente ley.

A los fines del presente artículo, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación llevará cuenta separada por cada ciudad o pueblo en que administre obras de salubridad, acreditará en ella los productos de la explotación y las amortizaciones extraordinarias que efectúen las autoridades locales y debitará los gastos industriales, intereses y cuotas de reintegro. Se entenderá reintegrado el costo de las obras construídas cuando los superávits anuales de esa cuenta alcancen a cubrir la totalidad de los capitales invertidos y las sumas empleadas para atender déficit de explotación que se hubieran producido.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación enviará a pedido de parte, a cada provincia y municipalidad interesada, el balance correspondiente al estado de la cuenta expresada.

Art. 49. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no serán rescatables los servicios correspondientes a localidades que tengan obras comunes con las de la Capital Federal, o que comprendan en una sola unidad técnica distritos ubicados en un territorio federal y una provincia, o en dos provincias, o en un punto cualquiera del territorio nacional y en un estado extranjero.

Art. 50. — Los distritos o explotaciones que, correspondiendo a distintas ciudades o pueblos, constituyan por sus características un solo sistema, y no estén comprendidos en ninguno de los casos previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser rescatados una vez reintegrado el costo del conjunto de las obras que formen ese sistema.

Régimen de construcción de obras de carácter reducido

Art. 51. — En las localidades en las cuales por su escasa población o por falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas, re-

sulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario, de provisión de agua potable, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un servicio provisional, a base de surtidores públicos, ubicados en el número y forma suficientes, para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la localidad y podrá destinar el excedente de líquido que se produzca para el servicio de abrevaderos públicos de hacienda.

En casos muy especiales, de verdadera excepción, fundados en razones de orden sanitario o económico y cuando el caudal de agua lo permita, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá conceder conexiones para el servicio domiciliario de determinados establecimientos, cobrando por el mismo la retribución que fije la tarifa que establezca al efecto el Poder Ejecutivo.

Art. 52. — Si realizadas perforaciones el agua que se obtenga no resultare apta para el consumo humano, pero sí para otros usos domésticos o para abrevar hacienda, las instalaciones serán entregadas a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica o a las autoridades locales para su ulterior atención.

Cláusulas especiales

Art. 53. — Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las localidades del interior del país, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto podrá solicitar el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública.

Art. 54. — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, la ejecución de las respectivas instalaciones y su explotación corresponderá a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 55. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con otras reparticiones del Estado, de las provincias o de las municipalidades, ad referendum del Poder Ejecutivo nacional, la instalación de obras y prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de desagüe cloacal en determinadas zonas o poblaciones, para satisfacer principalmente necesidades derivadas de explotaciones industriales, ferroviarias, etcétera, quedando a cargo de las reparticiones beneficiadas la financiación de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las obras, total o parcialmente, conforme sea la extensión y carácter de los servicios.

Art. 56. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará exenta de

todo derecho de aduana, básico o adicional, por la importación de útiles, maquinarias, medios de transporte y cualquier otro material que se destine a la construcción por administración o por contrato o a la explotación de sus obras y servicios.

Art. 57. — Las multas incurridas por falta de cumplimiento, total o parcial, de los contratos celebrados con la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, así como los depósitos dados en garantía cuya pérdida se produzca por las mismas causas, se incorporarán a su renta.

Art. 58. — Declárase de utilidad pública el suelo o el subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de provisión de agua, que sean necesarias para la ejecución de las obras que se construyan o amplíen en virtud de esta ley, en todo el territorio de la Nación y queda autorizada la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para proceder a su expropiación, de acuerdo con la ley de la materia.

Art. 59. — Las provincias y municipalidades entregarán a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, libre de todo cargo o gravamen, los terrenos y fuentes de provisión de agua que les pertenezcan y sean necesarios y constituirán las servidumbres que se requieran para la construcción, ampliación y explotación de las obras.

Art. 60. — Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de las obras previstas en esta ley, y concédese igual autorización para transferir con el mismo destino los terrenos municipales de la Capital Federal.

Art. 61. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a solicitud de las autoridades locales y con autorización del Poder Ejecutivo, podrá tomar a su cargo, a medida que cuente con los recursos necesarios, las obras o instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal de propiedad provincial o municipal o de empresas privadas que actúen en virtud de concesiones, que sirvan a las ciudades y pueblos que se acojan al régimen de la presente ley.

En caso de que las obras o instalaciones fueran de propiedad provincial o municipal, deberán ser entregadas por sus autoridades sin carga y su importe se acreditará en la cuenta patrimonial del distrito a formarse para la explotación de las mismas; sin embargo, ambas partes podrán convenir que Obras Sanitarias de la Nación se haga cargo de la deuda que hubiere contraído la autoridad local para construir las instalaciones que se transfieren, siempre que se trate de deuda no amortizada y que su monto no sea superior al valor físico de utilización de tales instalaciones que se determi-

nará en la forma establecida en el apartado siguiente.

Si las obras o instalaciones fueran de pertenencia de empresas privadas, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, abonará por las mismas su valor físico de utilización, siempre que él sea inferior al costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. En caso de que el costo de origen determinado en esa forma, sea inferior al del valor físico de utilización, sólo se abonará el importe de aquella determinación.

Entiéndase por valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias disminuido por la depreciación de uso, no contándose aquellas instalaciones y maquinarias que no sean utilizables para los nuevos servicios a prestar por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. La determinación de esos valores será efectuada por la citada repartición y sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

Las provincias y municipalidades deberán tomar a su exclusivo cargo el pago de toda suma que deba invertirse para la compra, rescate o expropiación de esas obras e instalaciones de propiedad privada, en cuanto exceda al valor físico de utilización.

Art. 62. — Serán conservadas en poder de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación las usinas construídas y en explotación por la misma para el exclusivo suministro de energía eléctrica a sus propias instalaciones; y podrá construir nuevas usinas, con iguales fines, cuando no existan en las localidades donde se disponga la realización de obras de saneamiento.

En aquellos casos en que exista la posibilidad de una utilización de la energía que emana de sus instalaciones específicas, las instalaciones energéticas podrán ser proyectadas y realizadas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. El sobrante de la energía generada, después de satisfechas las necesidades propias, podrá ser enajenado, debiendo hacerlo con preferencia o exclusividad, según los casos, a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.

Art. 63. — En los territorios nacionales, toda fundación de nuevos centros de población quedará supeditada al dictamen favorable de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, sobre la posibilidad de un adecuado aprovisionamiento de agua potable.

Art. 64. — Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se

opongan a la presente ley, y, en particular, al artículo 172 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, edición 1943.

Disposición de emergencia

Art. 65. — Decláranse hechos con facultades suficientes, en cuanto no hayan excedido las que la ley 8.889 otorgaba al extinguido directorio, los actos realizados por Obras Sanitarias de la Nación, o por la Administración Nacional del Agua, con respecto a los servicios y obras que competen específicamente a dicha repartición y que hayan sido dispuestos por autoridades y funcionarios que en virtud de decretos del Poder Ejecutivo nacional substituyeron al directorio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido esas autoridades y funcionarios por inobservancia de otras leyes o reglamentos.

Art. 66. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar en general el despacho adoptado por la Cámara en comisión.

— Resulta afirmativa de 61 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Yo lamento molestar la atención de la Honorable Cámara, pero seré muy breve.

En la discusión en general el señor diputado Illia afirmó un hecho inexacto, y, seguramente por falta de antecedentes, ha incurrido en un error. Sostuve que la obra del acueducto de Villa María a San Francisco...

Sr. Presidente (Cámpora). — Le ruego que se concrete al artículo 1º, señor diputado.

Sr. Colom. — Estoy en la cuestión, señor presidente.

...era una realización del gobierno de la revolución. Al hacer tal afirmación, tenía los antecedentes sobre mi banca.

Esa obra fué concebida en 1930 e iniciada en 1939, y luego paralizada hasta 1943, en que se reanuda y terminan los 170 kilómetros de acueducto. Hecha esta aclaración, entraré a la discusión en particular.

Es lamentable que cuando se discute una ley de este carácter se haga una cuestión política. Y digo que es lamentable, porque, en realidad, esta repartición es quizás una de las pocas del Estado que en diversas épocas y regímenes permaneció ajena a la política. Pero, a pesar de haberse salvado de la mala política, por razones de índole diversa, no pudo realizar la obra tras-

cidental que está realizando el actual gobierno. Tomemos como ejemplo el caso del dique de río Tercero. En ese dique no se aprovechaba la fuerza hidráulica. Con el gobierno de la revolución se aprovecha esa fuerza hidráulica y se están construyendo dos usinas más. Traigo esto a colación para los que afirman que no se ha hecho nada y se proyecta mucho.

En materia de servicios públicos de agua, en 1945 existían 145 servicios, y en la actualidad existen 330. Vale decir que en cuatro años de gobierno hemos duplicado los servicios de agua corriente.

En lo que respecta a los servicios gratuitos de agua, que anteriormente no existían, dado que muchas poblaciones se morían de sed, este gobierno construyó 183 pozos que suministran agua a esas pequeñas poblaciones. Traigo estos datos a colación, porque recién el señor diputado Rabanal se refería a que este gobierno se limita a hacer obras en sus discursos. El señor diputado olvida que las poblaciones de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, antes de este gobierno eran atendidas por empresas particulares que daban mal servicio y caro. Con la administración de esos servicios por Obras Sanitarias, esas ciudades tienen agua buena y barata.

Sr. Monjardin. — ¿Qué se está discutiendo, señor presidente?

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia ha llamado a la cuestión al señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Cientos de localidades han estado aguardando pacientemente que los gobiernos anteriores se preocuparan de ellas. Ustedes saben, señores diputados...

Sr. Monjardin. — ¿Por qué cerraron el debate para luego seguir hablando de esta manera? Es un fraude.

Sr. Colom. — No se moleste, señor diputado.

La verdad es que existen cientos de poblaciones en las que los habitantes se morían literalmente de sed, y que fué necesario que este gobierno realizara obras de emergencia, como son los pozos que hoy suministran agua potable a centenares de pequeñas poblaciones. Claro está que los señores diputados pueden decir: en tal parte no hay agua. Pero es que este gobierno no puede hacer en tres años lo que otros gobiernos no hicieron en treinta. Vamos realizando una obra integral en materia de obras sanitarias y de aguas corrientes. Cuando en este recinto se pronuncia un discurso kilométrico, como el pronunciado, mejor dicho, leído por el señor diputado Rabanal, es necesario poner buena fe y absoluta sinceridad.

Sr. Monjardin. — ¿Y para qué cerraron este debate?

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Colom. — ¿Qué ha hecho en materia de obras sanitarias la actual administración?

Los señores diputados...

Sr. Mac Kay. — Esto se llama deshonestidad parlamentaria.

Sr. Presidente (Cámpora). — La Presidencia ha llamado a la cuestión al señor diputado por la Capital. La determinación de si el señor diputado está o no en la cuestión no corresponde a la Presidencia, sino a la Honorable Cámara. El señor diputado debe plantear la cuestión formal; de lo contrario, la Presidencia no la puede poner a consideración de la Cámara, señor diputado por Entre Ríos.

Ruego al señor diputado por la Capital que se concrete al artículo 19, a consideración de la Cámara.

Sr. Colom. — Cuando se está discutiendo en un ambiente de armonía como éste, no es posible...

Sr. Monjardin. — Se ha cerrado el debate.

Sr. Colom. — ... que los diputados de la oposición, tan amantes de las libertades públicas, quieran aplicarme la dictadura del reglamento, cuando hay precedentes de diputados de la oposición que han hecho una incursión por todo el proyecto de ley.

Sr. Monjardin. — Reabran el debate, y está todo arreglado. Ese es el procedimiento correcto.

Sr. Colom. — Hemos oído discursos de todo corte y yo llamo a la realidad a los señores diputados.

Sr. Monjardin. — Reabran el debate.

Sr. Colom. — Doy datos concretos sobre la obra realizada y es curioso que cuando Obras Sanitarias reemplaza a la actividad particular, reciba la crítica de un diputado cuyo partido político tiene en su plataforma electoral la recuperación de todos los servicios públicos.

En materia de obras sanitarias, este gobierno ha hecho una obra de ciclopes en tres años.

Sr. Rabanal. — Son seis años.

Sr. Colom. — Hay que destacar entre otras la situación de San Francisco, donde epidemias como el tifus reinaban al amparo de la falta de agua. Cuando este gobierno terminó el acueducto los opositores dijeron: ese proyecto era nuestro. Como ya lo he dicho, la obra se proyectó en 1930; se empezó a realizar como ensayo en 1939; se interrumpió en 1941, y se reanudó y terminó en la casi totalidad de su extensión durante el actual gobierno.

Aceptamos la crítica constructiva; que traigan sus luces para modificar esta ley, pero no podemos permanecer en silencio cuando se dice que este gobierno no hace más que proyectar, cuando en realidad, si por algún motivo ha de pasar a la historia, es porque realiza y no promete. Nuestra acción se ajusta al lema peroniano: «Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.»

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Hemos expresado ya cuál es el fundamento de nuestra disidencia en este despacho. En general estamos de acuerdo con la necesidad de dictar esta ley orgánica de Obras Sanitarias, porque ella refunde una serie de leyes y disposiciones dispersas para estructurar una ley de mayor eficiencia.

En particular nuestra disidencia es fundamental y empieza a ponerse de manifiesto desde el enunciado del artículo 1º, que suprime la autonomía a este organismo. Manifestamos terminantemente nuestra disidencia, porque somos partidarios de que continúe desarrollando su acción dentro de esa autonomía.

Como señalé en la sesión pasada, no hemos tenido oportunidad de conocer de parte de los miembros de la mayoría integrantes de la Comisión de Obras Públicas las razones que han inclinado a la comisión a producir este dictamen.

Sr. Colom. — No puede ser autónoma, porque le falta la autonomía política.

Sr. Zanoni. — Hubiera sido interesante que expusieran cuáles son los inconvenientes con que el organismo ha tropezado en el desenvolvimiento de su acción que la ley 8.889 le asegura dentro del régimen autonómico.

El cuerpo total de la ley, después de este artículo 1º crea una especie de chaleco de fuerza dentro del cual no podrá desenvolverse este organismo, que virtualmente ha sido despojado de las más mínimas atribuciones para regir su vida. Ese cercenamiento de facultades llega al extremo de poner en manos del Poder Ejecutivo de la Nación hasta la designación de los empleados más subalternos de la repartición. En el boletín de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación que ésta publica puede encontrarse la documentación que hace fe de cuanto estoy afirmando con respecto a esta situación.

Por otra parte, en el artículo 3º la ley habla de una autarquía con la cual habriase pretendido disimular este cercenamiento de facultades dispuesto por el artículo 1º.

Nosotros sostenemos que muchos de los inconvenientes y de las críticas que se han podido formular por la deficiente actuación de este organismo en los últimos tiempos se debe pura y exclusivamente a la intromisión que dentro de sus funciones ha venido operando el Poder Ejecutivo de la Nación. Hubiese sido interesante que los señores diputados de la mayoría, a quienes advertí esta tarde un tanto cansados e indiferentes a la consideración de esta ley, hubieran permitido que los diputados de este sector continuaran puntualizando, como lo estaban haciendo, todos los hechos y circunstancias que, en definitiva, hubieran venido a demostrar que se produjeron, pura y exclusivamente, porque este organismo, trabado en su libre desenvol-

vimiento, está declinando su responsabilidad en quien viene interfiriendo su funcionamiento. Lo que se va a conseguir con esta ley es que este antiguo y prestigioso organismo que es la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación terminará por desentenderse de la preocupación que antes ponía tan celosamente para lograr ese estado de eficiencia que unánimemente han reconocido los señores diputados para los años anteriores a la revolución de 1943.

Si los señores diputados se han tomado el trabajo de leer esta ley orgánica, habrán podido advertir que son innumerables las disposiciones que escalonadamente han ido estableciéndose para otorgar al Poder Ejecutivo una nueva facultad, que terminará por hacer que el presidente de la Nación, agobiado por un cúmulo de preocupaciones minúsculas, no pueda dedicarle seriamente la atención que demandará el funcionamiento de este organismo. Y tendrá que llegar, por ese camino, a una situación lamentable, que se resolverá con el abandono de sus facultades, con el desconocimiento de la forma cómo esta repartición cumple sus delicadas tareas, o con el viejo recurso de estampar la firma en barbecho, que hará el presidente de la República frente a tantos asuntos como le van a ser sometidos para su resolución.

Por este motivo nosotros nos oponemos a ese cercenamiento de su autonomía, y proponemos que en el artículo 1º se suprima la parte que establece que el organismo dependerá del Ministerio de Obras Públicas, reemplazándose esta expresión por la palabra «autonomía». De modo que el artículo quedaría redactado de esta manera: «La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación constituirá una institución autónoma que se regirá por las disposiciones de la presente ley, conservando su actual denominación.»

Sr. Colom. — A mi juicio, el señor diputado está en un error de concepto jurídico, porque la palabra «autonomía» lleva implícito el concepto político de soberanía, y en derecho administrativo corresponde decir «autarquía».

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Marotta. — En primer término debo expresar que en las exposiciones que he escuchado esta tarde se ha considerado en forma tangencial el proyecto en debate. Es así como se ha hecho referencia a problemas y cuestiones ajenos al mismo.

En cuanto al artículo 1º, se discrepa en un punto fundamental: el sector de la Unión Cívica Radical propugna porque la entidad sea autárquica, en tanto que nosotros sostenemos la centralización, cuyo beneficio ha sido demostrado a través de una serie de leyes sancionadas por este Congreso. Por ello, sin entrar a hacer una larga disquisición sobre autarquía

y centralismo, nuestro sector va a sostener el artículo 1º tal cual está redactado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Señor diputado por Santiago del Estero: a través de sus palabras ha expresado el deseo de introducir algunas modificaciones al artículo en discusión. Su proposición, para ser votada, requiere la votación por partes del artículo.

Sr. Zanoni. — Entonces, hago indicación de que se vote, en primer término, hasta la palabra «institución».

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 1º hasta la palabra «institución», inclusive.

— Resulta afirmativa de 67 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar las palabras «dependiente del Ministerio de Obras Públicas», que son las observadas por el señor diputado por Santiago del Estero.

— Resulta afirmativa de 62 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el resto del artículo.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Si hubiera asentimiento, la Presidencia haría mención del número de los artículos a considerar, y si no se formulan objeciones, los daría por aprobado.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Obras Sanitarias de la Nación tiene distintas fábricas, las principales de las cuales se dedican a producir ácido sulfúrico y coagulantes: alúmino férrico y derivados de la bauxita. Estas fábricas prestan un gran servicio y cumplen con la misión para la que se las ha destinado.

En la parte final del artículo 2º se permite que Obras Sanitarias pueda elaborar los materiales necesarios por su cuenta, o bien participar en empresas de capital mixto. De acuerdo con nuestra invariable posición —ya que siempre nos hemos opuesto a la constitución de sociedades mixtas—, pedimos la supresión de las palabras «o bien participar en empresas de capital mixto».

Por otra parte, hemos manifestado al señor diputado Colom que nosotros no hemos dicho que éramos partidarios de que empresas particu-

lares prestaran servicios reemplazando a Obras Sanitarias, sino que existían empresas particulares que han pasado a poder de esa institución, de lo cual estamos sumamente complacidos.

Además, debo manifestar al señor diputado por la Capital que en el dique del río Tercero existía una usina que prestaba servicios generando luz. Posteriormente, se construyó una nueva usina. Ese es el problema, y no como explicó el señor diputado por la Capital. Pero esta es una digresión al margen del asunto.

Concretándome al artículo 2º, en representación de nuestro sector, pido la supresión de las palabras «o bien participar en empresas de capital mixto».

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Pastor. — Yo hubiera hecho, con pocas palabras y en poco tiempo, una serie de observaciones a este proyecto, si se me hubiera permitido hablar en la consideración en general. De esa manera le hubiera ahorrado a la Cámara la intervención en particular en cada uno de los artículos en que hay que expresar alguna idea o proponer alguna modificación. Pero está visto que la sistematización de las mociones de cierre del debate, a veces, en vez de beneficiar al asunto y al trabajo de la Cámara, evidentemente los perjudican.

Esta es una ley larga y complicada, y si nos damos a la tarea de querer perfeccionarla y hacer algunas advertencias, puede insumir gran tiempo a la Honorable Cámara. Me resultaba más cómodo hacer enunciados de carácter general y dejar librada al criterio de la mayoría su sanción.

Este artículo tiene dos partes. En la primera de ella, que se refiere a la realización de estudios, proyectos, reconstrucción, renovación, etcétera, existe al final la siguiente expresión: «que la exploración, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas...». Quiero manifestar que Obras Sanitarias ha realizado en el pasado, como institución sometida al régimen de la antigua ley orgánica, obra muy ponderable que no hay por qué negarla ni disminuirla.

En el nuevo régimen ella ha estado sometida a la improvisación y ha seguido realizando esa obra en la medida de las circunstancias y de las posibilidades que le deparaba su nueva situación. La tremenda confusión entre los dos problemas, el problema sanitario de agua potable y el de aprovisionamiento de agua de riego, etcétera, trajo consecuencias fatales para que Obras Sanitarias pudiera seguir desarrollando el plan que desde su creación venía ejecutando en beneficio del país. De manera que esta disposición es necesario que quede perfectamente aclarada.

Obras Sanitarias no puede realizar «exploración, alumbramiento» —esta última expresión no es técnica, pues lo que en realidad se quiere decir es descubrimiento de las aguas— ni utili-

zación de las aguas subterráneas» sino para un solo y exclusivo uso que es el que justifica la existencia de esta institución nacional.

Por eso voy a proponer que se agreguen estas tres palabras: «para uso potable.»

En cuanto al segundo párrafo que se refiere a que «Obras Sanitarias puede establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios», entiendo que esta cláusula no puede tener la latitud que presenta en el proyecto.

Obras Sanitarias no puede incursionar en el campo de la industria sino en los casos que sean necesarios para el cumplimiento de su finalidad. Si la industria en manos de Obras Sanitarias no va a tener por consecuencia la mejor calidad del material, no se justifica la substitución del trabajo industrial por Obras Sanitarias por encima del capital particular o de la industria privada que provee en mejores condiciones de calidad el producto a utilizar. Y menos justificada frente a la política de imposición sanitaria, que está resultando sumamente gravosa para los propietarios.

De acuerdo con las últimas informaciones sobre Obras Sanitarias, todos los impuestos que emergen de sus servicios han aumentado en el término de seis años en más de un ciento por ciento.

El fenómeno es curioso. Con el sistema originario, Obras Sanitarias no sólo cubría todas las obras sino todas las erogaciones para el mantenimiento de su administración, y otros gastos imprevistos, y hacía un fondo de reserva que le permitía realizar obras con sus propios recursos y también hacía posible para las provincias que habían realizado convenios con Obras Sanitarias el rescate de las obras. Si ese rescate no era gestionado por las provincias, éstas podían hacer otra gestión que era muy benéfica para ellas, ya que se permitía que los fondos que se habían acumulado como consecuencia de la explotación de las obras realizadas en su territorio podían ser invertidos en la realización de otras obras en su beneficio.

Con el régimen actual, las obras sanitarias de las provincias no van a poder ser rescatadas sino dentro de un término extraordinariamente largo, y posiblemente su rescate va a ser ya innecesario y va a ser inconveniente para los intereses de las provincias. Digo innecesario e inconveniente porque ya dentro del régimen anterior algunas provincias, con muy buen criterio, porque carecían de los elementos técnicos, porque no contaban con personal habilitado para la administración útil y eficaz de la obra, renunciaban al rescate y pedían a la Nación que los fondos se invirtieran en otro tipo de obras.

Mientras más se avanza en la materia, indudablemente más va a progresar el concepto general de que se trata de un problema que debe estar concentrado bajo la dirección de una sola institución. Pero, como decía, esto puede ser consecuencia del régimen financiero e impositivo establecido por esta ley. Lo que no es admisible es el criterio general de que Obras Sanitarias, sin una evidente necesidad de mejoramiento de su acción y de sus posibilidades de realización, tenga la facultad de reemplazar a la industria establecida, en el suministro de los materiales que necesita.

No es admisible esa conclusión, no sólo por las razones que ya he dado sino porque nosotros no estamos dentro de la tendencia excesivamente centralista del régimen administrativo nacional, que consideramos perjudicial para los intereses generales del país y que sólo tiene como consecuencia fortalecer políticamente al gobierno de la Nación mientras las provincias van quedando cada día más reducidas en su personalidad autonómica frente a una política en que corren paralelamente dos procesos: el del unitarismo, aplicado a la política y a la administración nacional y el del centralismo, aplicado exclusivamente a la administración pública.

Por esas consideraciones, voy a pedir que se vote el artículo por partes, a fin de incorporar en la primera parte las palabras «para uso potable» y de eliminar en la segunda parte la forma de asociación entre el Estado y el capital privado, llamada empresa mixta. El segundo párrafo debe votarse, pues, por partes: primero hasta las palabras «servicios», para suprimir las siguientes «o bien participar en empresas de capital mixto», y continuar luego con la parte final en la siguiente forma: «siempre que sea para mejorar la calidad o con fines de economía».

De manera que el segundo párrafo quedaría redactado en la siguiente forma: «El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios, siempre que sea para mejorar la calidad o con fines de economía.»

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Colom. — Quiero hacer simplemente una aclaración.

El señor diputado Illia sostiene que incurrió en error al sostener que la energía eléctrica que se produce en el dique del río Tercero había sido ya aprovechada con anterioridad a la gestión del actual gobierno. Y como deseo establecer la verdad yo afirmo que la fuerza hidráulica de 13.500 kilowatios de energía producida por ese dique jamás fué aprovechada

y que recién ha sido utilizada durante el actual gobierno para dar fuerza motriz y luz a fábricas militares y una parte de la ciudad de Córdoba. Pongo a disposición del señor diputado los antecedentes que tengo en mi banca.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Marotta. — El artículo 2º, que se refiere a la posibilidad de constituir la sociedad mixta, está perfectamente redactado, teniendo en cuenta entidades que elaboran materias primas y materiales indispensables.

Obras Sanitarias necesita en grandes cantidades azufre, cañerías de hierro y medidores de agua que, en muchas oportunidades, le ha sido difícil conseguir. Prueba de ello es que, durante la última guerra, se encontró en dificultades para conseguir materiales de tanta importancia como el alumbre.

Por otra parte, en este artículo la constitución de las sociedades mixtas no es más que una previsión, y al respecto existen precedentes sostenidos por nuestro bloque en esta Cámara, como el del debate a propósito del plan siderúrgico. Recuerdo que en esa ocasión el bloque de la minoría sostuvo el mismo criterio que ahora, en contra de la constitución de sociedades mixtas, en tanto que nosotros afirmamos que, en las oportunidades que se consideren indispensables, el gobierno puede constituir sociedades mixtas.

Por esa razón vamos a mantener la redacción del artículo tal cual está.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Comparto las observaciones que a la segunda parte de este artículo formula el señor diputado por Córdoba, Illia, en lo que se refiere a la autorización que el Poder Ejecutivo podrá prestar a la Administración General de Obras Sanitarias para participar en empresas de capital privado, destinadas a producir materiales necesarios para sus servicios, consecuente con el pensamiento expuesto con anterioridad, y a fin de no resultar inconstante dejando pasar por alto este artículo, sin formular las correspondientes objeciones, es que en el segundo párrafo propongo la supresión de las palabras, «El Poder Ejecutivo podrá autorizar a». De otra manera, cuando se entre a considerar otros artículos que se refieren a la autarquía de Obras Sanitarias de la Nación, nos encontraremos con que las facultades acordadas al Poder Ejecutivo son tan excesivas que ni siquiera quedará en pie el carácter autárquico de este organismo.

Por eso propongo que en primer lugar se someta a votación el primer apartado del artículo.

Sr. Colom. — Aprobado el artículo 1º no podemos hablar de autarquía, pues sería un contrasentido.

Llamó a la reflexión al señor diputado por Santiago del Estero, y le pidió requiera del señor diputado Yadarola la explicación técnica correspondiente.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el primer apartado del artículo 2º, al que no se ha formulado objeción.

— Resulta afirmativa de 74 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado de las palabras «para uso potable» que propone el señor diputado por San Luis al final del primer apartado del artículo 2º.

— Resulta negativa de 49 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la parte observada por el señor diputado por Santiago del Estero: «El Poder Ejecutivo podrá autorizar a».

— Resulta afirmativa de 58 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la continuación del segundo párrafo: «la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios».

— Resulta afirmativa de 61 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el agregado que propone el señor diputado por San Luis, a continuación de la palabra «servicios»: «siempre que sea para mejorar la calidad o con fines de economía».

— Resulta negativa de 62 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el resto del artículo 2º: «o bien a participar en empresas de capital mixto, que persigan el mismo objeto».

— Resulta afirmativa de 62 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Este artículo tiene una expresión evidentemente equivocada y que debe ser suprimida para evitar que la ley contenga términos que no coinciden con su verdadero

alcance y contenido. Me refiero a la palabra «autarquía».

Yo afirmo que toda la organización que se da por esta ley a Obras Sanitarias de la Nación no contiene en absoluto ningún principio de autarquía. Obras Sanitarias de la Nación será un mero engranaje administrativo del Poder Ejecutivo nacional y así lo ha reconocido el señor diputado por la Capital, miembro informante por la mayoría.

El concepto de autarquía está perfectamente definido en derecho público administrativo: involucra la organización de la entidad administrativa descentralizada con funciones y facultades determinadas por la ley y que actúa como una persona jurídica.

Es parte esencial de la autarquía, como concepto jurídico administrativo, el de que la organización que se crea con ese carácter funcione como una verdadera persona jurídica.

El concepto de autarquía se diferencia fundamentalmente del de autonomía, que lo he visto confundido en la exposición de algún señor diputado. La autonomía envuelve un concepto institucional y se vincula a la organización política del Estado. Son autónomas las provincias; eran autónomas las municipalidades; pero no es autónoma una repartición administrativa a la cual se le delimitan las funciones por la ley y se concreta su área de actividad al margen meramente administrativo bajo la directa acción y control del Poder Ejecutivo.

Sr. Colom. — Exacto.

Sr. Yadarola. — Son características de la autarquía, en primer término, la personalidad jurídica del ente autárquico. Esto es fundamental. Si no hay en la creación de este ente una verdadera persona jurídica, no hay autarquía, sino mera dependencia del poder administrador.

En esta ley se habla de autarquía, pero no se crea la personalidad jurídica, y así se incurre en el grave error, que acaba de sancionarse al haberse aprobado el artículo 20, de facultar a Obras Sanitarias de la Nación a integrar sociedades mixtas, es decir, se faculta a una organización que no es persona jurídica a constituir otra persona jurídica. Eso es un verdadero contrasentido; es una verdadera aberración, una herejía jurídica.

Sr. Colom. — Se le faculta por ley.

Sr. Yadarola. — En segundo término, entre las características esenciales de la autarquía está la de la limitación legal de sus atribuciones. Aquí, las atribuciones, aunque están en parte regladas por este proyecto, buena parte quedan pendientes de la autorización que pueda dar el Poder Ejecutivo. De tal manera que tampoco existe este otro carácter del ente autárquico.

En cuanto al contralor del gobierno, las entidades que gozan de autarquía están sujetas

también al contralor administrativo que la propia ley establece.

En una palabra, se organiza una persona jurídica con funciones delimitadas en el ámbito de la administración pública, sujeta a ese régimen legal que fija el límite de sus atribuciones y sometida también al contralor que la ley misma establece. De esas características no goza Obras Sanitarias de la Nación.

Hemos sostenido ya, según lo ha manifestado el señor miembro informante de la minoría, diputado Illia, que para que Obras Sanitarias de la Nación cumpla con eficiencia su función trascendental debe ser organizada como entidad autárquica. En el estado actual de nuestra vida política, la quiebra de la autarquía de esta organización importa un nuevo reconocimiento de la absorción total que el Poder Ejecutivo hace de todas las funciones de gobierno. La autarquía importa una descentralización administrativa que vuelve más eficaz la gestión que cumple la entidad autárquica, la hace más ágil en su funcionamiento y asegura mejor la responsabilidad de sus gestores. Cuando se ha entregado una parte de la administración pública a una entidad autárquica, que se gobierna independientemente de la gestión o de la acción del Poder Ejecutivo, se asegura una mejor eficacia en su labor y una mayor responsabilidad en sus gestores. Pero, fundamentalmente, importa una descentralización administrativa que significa restar, en cierta medida, acción a la prepotencia del Estado. Vale decir, la descentralización administrativa tiende a evitar la omnipotencia del Poder Ejecutivo.

Todo esto ha desaparecido en esta ley. De ahí, que para que no aparezcam nosotros consintiendo en una fórmula totalmente inexacta, como es ésta que habla de autarquía, cuando no existe, dejo formulada la observación, para que la Cámara, si lo cree conveniente, la recoja y, por lo menos, elimine esa palabra, ya que no ha creado un régimen autárquico.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Pastor. — El señor diputado por Córdoba acaba de señalar, en forma muy clara y con fundamentos jurídicos indiscutibles, una de las categorías de las instituciones autárquicas. Se ha referido al aspecto de la autarquía institucional. No podría entrar en este instante a discutirse otro aspecto como el de la autarquía territorial, porque a este organismo, que no es autárquico sino una simple dependencia de gobierno, la ley le da jurisdicción en la Capital Federal y en los territorios nacionales y provinciales.

Ya veremos que esta ley tiene como consecuencia el allanamiento total de las autonomías provinciales porque, a diferencia de otras leyes anteriores que reconocían el derecho autónomo de las provincias, incluyendo cláusulas de tipo

optativo, según las cuales las provincias podían celebrar convenios con la Nación, en esta nueva ley se les impone la obligación de dictar leyes en la forma que la misma establece.

A mí no me alarma este antecedente, porque ya tenemos el más terrible: el de la reforma constitucional. Es sabido que en la nueva Constitución figura una cláusula respetuosa de las autonomías provinciales, puesto que autorizaba a las legislaturas a actuar como cuerpos constituyentes. Esta cláusula autorizante ha sido interpretada por todos estos gobiernos provinciales —que se muestran tan obedientes y sumisos al poder central—, como que es imperativa, y pasando por encima de todas sus instituciones y leyes, las legislaturas provinciales se corvirtieron en asambleas constituyentes, llegándose en una provincia a realizar en el término de seis meses tres reformas constitucionales.

No quiero extenderme en este momento sobre tal aspecto. Quiero, sí, referirme a la estructura especial que se da a esta ley, introduciendo un concepto de autarquía reñido con la economía general de la ley.

En el artículo 3º se habla de autarquía que le atribuye la ley, pero en el artículo 4º, inciso c), se establece que la administración general de Obras Sanitarias de la Nación tendrá la facultad de «proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la institución, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional». De manera que en la parte fundamental, que es la referente a la estructuración del presupuesto de gastos, tiene una simple función administrativa. Obras Sanitarias de la Nación deberá elevar al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos.

Sr. Conte Grand. — En la mayoría de las reparticiones autárquicas creadas, así está establecido.

Sr. Pastor. — El artículo 6º, inciso e), se refiere a los reglamentos internos. Los reglamentos internos, que es lo más esencial y que es la mínima de las funciones que deben reconocérsele a un organismo autárquico, se le dice que debe proyectarlos y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Como si no fuera suficiente todavía toda esta serie de vínculos de dependencia directa e indiscutible de este nuevo organismo administrativo con el Poder Ejecutivo, se convierte a éste en juez árbitro cuando una decisión en el Consejo Administrativo de Obras Sanitarias no cuente con la anuencia del presidente de ese consejo, es decir, el señor administrador. Esta es una anomalía tremenda. Se establece un régimen de votación en el cual se le da al administrador el voto doble para el caso de desempate, pero además ese administrador tiene el derecho de desconocer y de expresar su disconformidad con

la resolución del consejo y someterla al arbitraje del señor presidente de la República.

Es una mezcla tremenda de conceptos, es una confusión de principios que son clarísimos en la vida administrativa y en el régimen jurídico administrativo de la República. Por un lado se quiere presentar a esta nueva organización de Obras Sanitarias como manteniendo, siquiera levemente, el carácter que tenía antes, de institución descentralizada; por otro lado se le atribuye el carácter de repartición autárquica, y por otro lado se la coloca bajo el control directo en todos sus actos del Poder Ejecutivo, desnaturizando el concepto.

Sr. Colom. — Es una autarquía relativa.

Sr. Pastor. — Esta va a ser una repartición autárquica vergonzante.

Sr. Conte Grand. — Se limita un poco la autonomía.

Sr. Pastor. — Aquí lo tienen ustedes a un autor cuyas opiniones muchas veces han seguido y aplicado, a Rafael Bielsa, que parece que los señores diputados ya han olvidado un poco en cuanto a los conceptos que expresa relativos a las reparticiones autárquicas. No voy a leer los conceptos de este autor porque no quiero cansar a la Cámara y porque es inútil estar golpeando como quien dice en una campana de palo. Simplemente voy a hacer todas las observaciones que crea necesarias a esta ley, pero le voy a ahorrar a la Cámara la mecanización de votaciones que no tienen otra finalidad que la de que los señores diputados puedan prenderse, como si fuera una cosa intocable, al proyecto del Poder Ejecutivo.

Y conste, señores diputados, que yo no niego algunas de las virtudes que tiene este proyecto, que es el fruto indudable de un estudio realizado con mucho interés y por hombres que entienden la materia y las funciones de Obras Sanitarias de la Nación. Pero es un proyecto que está imbuído de ciertos conceptos deformantes, no sólo de los principios jurídicos, sino de la realidad que ha vivido la República Argentina en materia de entidades descentralizadas, y deformante también de todo aquello que puede ser motivo de una orientación administrativa en la República de acuerdo con su régimen constitucional.

La Constitución Nacional, respetada en todas sus cláusulas que no han tenido un sentido político por la última Convención Constituyente, es un instrumento que permite que la Nación se desenvuelva dentro de un régimen de descentralización para obtener la mayor eficacia en la administración pública.

No puede sostenerse que una excesiva centralización en un país que progresa aceleradamente y frente al planteamiento de problemas que son de estirpe universal, que están ya golpeando en la conciencia nacional, pueda ser una forma de mejor gobernar al país. Es decir, que se sos-

tiene de modo poco convincente que si el país pudiera encaminarse directamente al gobierno, a la dirección y a las resoluciones de una sola persona, que es la expresión más alta de la centralización y hacia la cual nos dirigimos, el país está más garantizado por el acierto, por la capacidad y por las buenas intenciones de esa persona, doctrina que para destruirla bastaría con invertir los términos, presentando el caso de que mañana tuviéramos la desgracia de que esa persona no esté bien inspirada, no sea capaz, no sea patriota.

Hago estas observaciones a título general y no propongo ninguna modificación al proyecto. En cada uno de los artículos salvaré mi opinión, y los señores diputados de la mayoría tendrán la responsabilidad de la sanción de la ley.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. del Carril. — Deseo hacer un aporte, que me parece útil, a esta discusión y que va en apoyo de la tesis sustentada por los señores diputados Illia y Yadarola, y en parte de la sostenida por el señor diputado Pastor.

Los miembros de la comisión y los redactores del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo deben desconocer la ley de contabilidad, que modificó totalmente el sistema de autarquía que existía hasta su sanción.

Durante el gobierno del general Justo se efectuó una investigación sobre las entidades autárquicas y hubo una limitación de las facultades que ellas tenían. La ley de contabilidad en vigor suprimió la poca autarquía que les quedaba, y tanto es así que hasta cambió el término que las individualizaba, y desde entonces las entidades autárquicas se llaman descentralizadas. Esta es la expresión que usa el gobierno en todas las leyes, menos en ésta.

Nosotros hubiéramos deseado que el sistema de la autarquía hubiera sido contemplado no sólo por ley, sino en la propia Constitución; es decir, que un gobierno que en este país como en cualquier país del mundo tiene en la actualidad que tomar muchos servicios públicos, que a veces tiene que intervenir en la gran industria, debe tener un régimen que le permita ser eficiente en estos servicios, y la eficiencia está en la autarquía más completa de esos organismos, para que puedan desenvolverse con prescindencia de la política y con capacidad técnica.

Por eso, muchas veces los señores diputados de la mayoría nos deben haber escuchado decir que deseamos que en este país es menester impulsar la autarquía de los organismos en los que el gobierno interviene, bien sea en los servicios públicos o en las entidades industriales.

De cualquier modo, el objeto de mi interrupción es señalar a los señores diputados la contradicción que existe en los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, ya que en unos habla de

autarquía y en otros de descentralización. El concepto actual del Poder Ejecutivo es el de entidades descentralizadas, y la palabra autarquía nada tiene que hacer en esta ley.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Casas Noblega. — Me extraña sobremanera la argumentación que hace el señor diputado Yadarola en el sentido de que Obras Sanitarias no actúa como persona jurídica.

Me parece que el señor diputado incurre en un error, porque Obras Sanitarias actúa como persona jurídica de derecho privado, y en este sentido puede llegar a perfeccionar el contrato de obra, régimen netamente civil que está dentro de las relaciones privadas. Así actúan todas las reparticiones, sean autárquicas o no, por depender del Estado.

Este es el sentido de persona jurídica y no, a mi juicio, el que ha dado el señor diputado por Córdoba, a no ser que se haya querido referir a persona jurídica de derecho público, cosa que no encuentro admisible.

El argumento dado por el señor diputado Pastor, adhiriéndose al expresado por el señor diputado por Córdoba, se desvirtúa con las mismas razones que acabo de mencionar.

Estoy con el señor diputado del Carril, en cuanto dice que, de acuerdo con la ley de contabilidad, llamamos reparticiones descentralizadas a las autárquicas, pero aquí hablamos de la autarquía que le da la presente ley a Obras Sanitarias. Con este sentido la vamos a votar.

Sr. Pastor. — La ley no le da ninguna autarquía.

Sr. Colom. — Se le da una autarquía relativa.

Sr. del Carril. — Si hasta los empleados siguen siendo nombrados por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Me llama la atención las explicaciones que acaba de hacer el señor diputado por Catamarca.

Cada uno tiene de las instituciones jurídicas y de los problemas del derecho, el concepto que ha adquirido con sus estudios y sus conocimientos. Según el señor diputado, resulta que una entidad que no es persona jurídica, puede actuar como persona jurídica.

Sr. Casas Noblega. — Es una persona jurídica.

Sr. Yadarola. — Para mí, es un contrasentido. No hay personalidad jurídica si no se reúnen los distintos elementos que, en otra sesión y con otro motivo, he establecido. Por este proyecto de ley la administración de Obras Sanitarias se organiza como un mero instituto de carácter administrativo, dependiente directamente del Poder Ejecutivo, de tal manera que

si quiere formar una sociedad mixta, por ejemplo, no será Obras Sanitarias de la Nación la que integre esa sociedad —porque no existe como persona jurídica—, sino que será el Estado argentino el que integre esa sociedad, en cuyo nombre simplemente actuaría Obras Sanitarias.

Esa es la diferencia entre la existencia y la inexistencia de la personalidad jurídica.

Supongo que el señor diputado no pensará que, en materia de personas jurídicas o de existencia ideal, puede hablarse como de las personas de existencia humana, de personas por nacer, que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones apenas han sido concebidas en el seno materno. Posiblemente, el señor diputado piense que se ha creado para Obras Sanitarias de la Nación un nuevo tipo de persona jurídica que puede adquirir derechos, contraer obligaciones e integrar sociedades sin haber nacido ni estar concebida en el seno de nadie.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Casas Noblega. — Yo desearía que el señor diputado por Córdoba, que es profesor universitario, repase en Bielsa las nociones más elementales de derecho administrativo.

En opinión del señor diputado, Obras Sanitarias de la Nación no puede actuar como persona jurídica del derecho privado y es un tamaño error.

Sr. Yadarola. — Yo sostengo mis opiniones.

Sr. Casas Noblega. — Y yo le recomiendo que repase las nociones más simples de derecho administrativo.

Sr. Colom. — Y el Código Civil.

Sr. Casas Noblega. — Verá el señor diputado por Córdoba cuando relea Bielsa si Obras Sanitarias puede o no actuar como persona jurídica de derecho privado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 3º.

—Resulta afirmativa de 61 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 4º.

—Sin observación, se da por aprobado.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardin. — El artículo 5º se refiere a cómo será dirigida esta entidad. Aquí se expresa que será dirigida por un consejo de administración presidido por el administrador general e integrado por los directores generales: técnico, de explotación comercial, de finanzas y conta-

bilidad, de asuntos jurídicos y de personal y asistencia social, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Nada se dice respecto del tiempo de ejercicio del Consejo de Administración ni para designar a los directores se requiere algún acuerdo.

A los fines de una mayor eficiencia administrativa, sería conveniente que se estableciera plazo para el ejercicio de ese poder administrativo y que la designación fuese realizada con acuerdo del Senado. Es realmente extraño que para la designación de funcionarios que no tienen que manejar intereses de la magnitud de los que establece esta ley, se requiera ese acuerdo y no para los integrantes de este Consejo de Administración.

Se podrá argüir que el artículo 83 de la Constitución en uno de sus incisos determina exactamente para qué funcionarios se requiere el acuerdo del Senado, pero lo evidente es; ya que no está prohibido, que sería prudente y conveniente desde todo punto de vista, inclusive —y esto puede hacer sonreír a alguno— desde el punto de vista de los intereses políticos del Poder Ejecutivo actual que se requiriese este acuerdo y se fijase término.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — He redactado un nuevo artículo 5º, que substituye al que figura en el despacho, solicitando se dé lectura por Secretaría.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a dar lectura por Secretaría del artículo propuesto por el señor diputado por Córdoba.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Dice así: «Artículo 5º — Será dirigida por un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y cinco vocales nombrados por el término de cuatro años por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.»

Sr. Illia. — He redactado ese artículo con el mismo texto que figuraba en la antigua ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación, número 8.889.

La larga vigencia en la administración de Obras Sanitarias de un directorio constituido en la forma que proyecto para dirigir las actividades de esta institución, certifica en forma clara la bondad del artículo que he presentado, lo que me ahorra abundar en mayores detalles.

Más, señor presidente. De acuerdo con lo que se ha discutido en esta Cámara y con el temperamento expuesto por los señores diputados de la mayoría, de lo que se desprende que se desea atribuir al Poder Ejecutivo una injerencia considerable en la solución de los asuntos de competencia del Consejo de Administración de Obras Sanitarias, creo que este nuevo artículo no será aprobado. Pero dejamos perfectamente claro cuál es nuestra manera de pensar y, aunque sea redundante, refirmar nuevamente nuestro con-

cepto de que Obras Sanitarias de la Nación debe ser una repartición autárquica.

A eso tiende la redacción del nuevo artículo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Marotta. — Con referencia a la argumentación del señor diputado Monjardin quiero recordarle que el presidente de la República tiene facultades para designar los funcionarios de la administración y que los que requieren acuerdo del Senado están específicamente enunciados en la Constitución.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Quiero dejar constancia de que en el proyecto originario del Poder Ejecutivo figuraba el nombramiento del administrador general con el requisito del acuerdo del Senado. La comisión suprimió ese requisito, sin que conozcamos hasta ahora cuáles son las razones que la impulsaron a modificar el criterio del Poder Ejecutivo.

Sr. Marotta. — Efectivamente, en el proyecto originario del Poder Ejecutivo figuraba el requisito del acuerdo, pero el propio Poder Ejecutivo ha propuesto la enmienda.

Sr. Díaz (M. M.). — Señor presidente: hago moción de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

— Resulta afirmativa de 61 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar el artículo 5º.

— Resulta afirmativa de 57 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Yadarola. — Pido la palabra para una moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Yadarola. — Hago moción de que se reconsidere el artículo 4º, a fin de salvar los errores que haré notar.

El inciso a) del artículo 4º expresa como una facultad de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación la de «administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución en las condiciones establecidas en el Código Civil».

Las entidades administrativas rigen sus actividades por las normas de derecho administrativo, no de acuerdo con el derecho civil. Las responsabilidades que corresponden a los administradores de esas entidades son las de los funcionarios públicos y no la de meros mandatarios, a los cuales se refiere el Código Civil.

Por otra parte, la redacción del inciso a) es incorrecta al decir que corresponde a la Admi-

nistración General de Obras Sanitarias de la Nación administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución, «pudiendo representarla en juicio». Habrá querido decirse: «pudiendo estar en juicio». Si se habla de la administración como organismo, como entidad de orden puramente burocrático, no se trata de representarla, sino de actuar en juicio.

El inciso c) establece la facultad de «proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la institución», pero luego el inciso a) del artículo 6º incluye como facultad del consejo de administración la aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. La contradicción es evidente.

La redacción del inciso e) es también incorrecta e inconveniente. Establece como facultad de la Administración General la de promover, ante las autoridades provinciales y municipales, las tramitaciones tendientes al acogimiento de las ciudades y pueblos del interior al régimen de la ley, como si las ciudades y pueblos pudieran acogerse a una ley. Se acogerá, en todo caso, el gobierno de la provincia o el de la municipalidad, pero no la ciudad o el pueblo.

Por esas razones, hago moción de reconsideración del artículo 4º, para que se modifique conforme con lo que he observado.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se va a votar la moción del señor diputado por Córdoba de que se reconsidere el artículo 4º.

— Resulta negativa de 51 votos; votan 79 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Illia. — Propongo que se elimine la facultad que en el artículo en discusión se da al presidente del consejo de administración, de doble voto y derecho de veto.

En realidad, es una cosa realmente extraña esta facultad. No conozco exactamente si en alguna otra ley existe una disposición de naturaleza semejante, pero me parece que con esta facultad quedan desnaturalizadas las funciones de los demás integrantes del consejo de administración.

Eso en cuanto a la última parte del artículo 6º. Además, quiero recalcar que, entre las obligaciones del consejo de administración, en el apartado a) se encuentra la de publicar la memoria anual.

Al respecto, al referirme al proyecto en general, dije que la última memoria de Obras Sanitarias es la de 1943. El señor diputado Colom se refirió a una serie de obras realizadas por este organismo, y a la acción que despliega actualmente, mencionando una serie de

cifras; pero nosotros no las podemos comprobar si no contamos con las memorias correspondientes.

Sr. Colom. — Y me quedé corto.

Sr. Illia. — Dejo expresado nuestro deseo de que la actual administración de Obras Sanitarias publique las memorias que faltan, para apreciar si la labor desarrollada ha sido tan eficiente como lo ha expresado el señor diputado por la Capital.

Concretamente, propongo la supresión del último apartado del artículo 6º.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monjardín. — Me adhiero a la observación que acaba de hacer el señor diputado Illia respecto al artículo en discusión. No creo que haga falta realizar el análisis del mismo, puesto que, si se lo vincula con el artículo 7º, se advertirá que las funciones de este consejo de administración quedan prácticamente reducidas a la voluntad del administrador general.

Se determinan muy minuciosamente en este artículo 6º cuáles son las funciones del Consejo, que se inician con la aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos, y de la memoria anual. Digo de paso que interpreto el término «aprobación» en el sentido de que se referirá a instrumentos administrativos presentados por las distintas dependencias, y que el consejo se limitará a considerarlos, aprobándolos o rechazándolos.

En esta enumeración de facultades, que va del inciso a) al l), se habla también de organización y distribución de las dependencias de la repartición; de la formulación de reglamentos; determinación de tarifas; compraventa y locación de inmuebles; adquisición de obras; con-

fección del plan anual de trabajos; aceptación de donaciones; y consideración de todo otro asunto que el presidente someta a consideración del consejo.

Pero en toda esta amplia enumeración no se dice nada respecto a la designación y remoción del personal. ¿A quién compete esta facultad? ¿Es de competencia del consejo de administración o del Poder Ejecutivo nacional? ¿O figura implícito en la posibilidad enunciada en el inciso l), por la que el presidente del consejo podrá someter al mismo la nómina de los empleados que deben ser designados y la de las cesantías que en cada oportunidad haya que producir, si lo considera necesario?

Esa es la pregunta que dejo formulada.

Sr. Presidente (Cámpora). — Corresponde votar el artículo 6º hasta las palabras «por mayoría de votos presentes», inclusive.

Sr. Balbín. — Advertida la extensión de esta ley y el inconveniente que tenemos para formar quórum, hago indicación de levantar la sesión.

Sr. Presidente (Cámpora). — En la casa hay número.

Sr. Colom. — Me opongo a la indicación. Estamos en los últimos días del período y esta ley tiene fundamental importancia.

Sr. Visca. — Pido al señor diputado que retire su moción.

Sr. Uranga. — Es una ley muy extensa y con cada artículo pasará lo mismo.

Sr. Presidente (Cámpora). — Como en este momento no hay número para votar la moción de orden que formula el señor diputado por Buenos Aires, queda levantada la sesión.

—Es la hora 22 y 37.